

La República y la Revolución Española



Partido Obrero socialista Internacionalista

(Sección de la Cuarta Internacional)



La República y la Revolución Española

I. ESPAÑA EN 1931

La España de principios del siglo XX es el país más atrasado de Occidente: es el islote de las tradiciones y sus amos se vanaglorian de haber sabido mantener su "hispanidad" frente a las corrientes políticas y económicas modernas. Y sin embargo, es en este país, profundamente hundido en su pasado, donde se lleva a cabo, a partir de 1936, la última revolución del periodo comprendido entre las dos Guerras Mundiales. Como en Rusia en 1917, España es, entonces, el eslabón más débil del mundo capitalista; pero la revolución española, a diferencia del movimiento de Octubre en Rusia, no era el comienzo, sino el final de la oleada revolucionaria que había afectado a toda Europa. La revolución rusa anunció el final de la Primera Guerra Mundial. La revolución española, trocada en guerra civil, no fue sino el prelude y el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial.

La monarquía de Alfonso XIII estaba profundamente desacreditada. El rey había animado un régimen de corrupción y una guerra colonial sangrante y absurda en Marruecos. Para continuarla, instauró en 1923 una dictadura militar, la de Primo de Rivera, que lleva hasta el fin la brutal guerra colonial de Marruecos y reprime a las movilizaciones obreras, pero no logra dar solución a ninguno de los problemas, siendo abandonada por la burguesía. La dictadura cae. *"Esta primera etapa", escribía Trotsky, "es el resultado de las dolencias de la vieja sociedad y no de las fuerzas revolucionarias de una sociedad nueva... El régimen de la dictadura que ya no se justificaba, a ojos de las clases burguesas, por la necesidad de aplastar de inmediato a las masas revolucionarias, representaba al mismo tiempo, un obstáculo para las necesidades de la burguesía en los terrenos económico, financiero, político y cultural. Pero la burguesía ha eludido la lucha hasta el final: ha permitido que la dictadura se pudriera y cayera como una fruta madura".* La Monarquía, decisivamente comprometida con la dictadura, estaba herida de muerte. Tras la caída de la dictadura, el régimen no se sostiene.

El 12 de abril de 1931 se celebran elecciones municipales. En todas las grandes ciudades las candidaturas de los partidos republicanos (coalición republicano-socialista) barren a los monárquicos. Los monárquicos sólo ganan en los pequeños pueblos, donde no hay elecciones libres, sino el voto dominado por los caciques. Los militares aconsejan al rey que abandone el país. Alfonso XIII se va, pero no abdica. La República es instaurada.

Para los trabajadores, para los campesinos, para la pequeña burguesía nacionalista, la República ha de ser el régimen de la libertad, del reparto de las tierras, de la mejora de las condiciones sociales, de las libertades nacionales, del fin del poder de la Iglesia. Pero el nuevo régimen desmiente en los hechos esas ilusiones.

El advenimiento de la República supone una esperanza para las masas laboriosas, que se traduce en una profunda movilización social. Frente a ella, el nuevo régimen niega las reivindicaciones y responde con una represión sin piedad. La sociedad se polariza. Dos alternativas se enfrentan. La revolución obrera o el retorno de la reacción. Esta polarización concluye en el golpe militar del 18 de julio de 1936 y la revolución obrera que le responde.

Se instaura un gobierno provisional republicano, según Manuel Tuñón de Lara, *"preocupado hasta la exageración por las formas del derecho y el mantenimiento de las esencias liberales, fijó el reconocimiento de la libertad de conciencia y culto, del derecho sindical y del derecho de propiedad como piezas esenciales, así como el sometimiento de los actos gubernamentales a las cortes constituyentes... España se encontraba en el umbral de un régimen de democracia liberal, mantenedor del orden social basado en la propiedad*

privada de los medios de producción y circulación, es decir, lo que suele llamarse un régimen de Democracia Burguesa..".

Un país semicolonial

A comienzos del siglo XX, España es un país esencialmente agrícola. A la agricultura se consagra más del 70% de su población activa. La posición de la agricultura en la economía nacional era decisiva. Aportaba el 50% de la renta nacional y constituía 2/3 de las exportaciones.

Pero no se trataba de una agricultura de tipo capitalista, sino de la vieja agricultura feudal. El campesino español trabaja con las mismas herramientas que su antepasado de la Edad Media. Los rendimientos por hectárea figuran entre los más bajos de Europa y más del 30% de las tierras cultivadas permanecen en barbecho. En el mejor de los casos los jornaleros de Andalucía y Extremadura estaban en paro de 90 a 150 días al año.

La industria, donde existe, apenas ha salido del periodo de las manufacturas. Sólo la metalurgia del País Vasco presenta todos los rasgos de la gran industria capitalista. En Cataluña, la industria textil, que es la más importante desde el punto de vista de la producción global, se halla todavía desparramada en una multitud de empresas minúsculas. En el mercado mundial, España sólo puede presentar los productos de su suelo y los de su subsuelo, a cambio de los productos manufacturados de las industrias extranjeras. Pero es también, un terreno predilecto para los capitales extranjeros invertidos, a lo largo de algunas décadas, en los sectores más lucrativos e importantes. El capital extranjero había penetrado profundamente en la economía española y dominaba incluso sectores productivos y de las comunicaciones, de carácter estratégico para el desarrollo del país.

Estructura de la sociedad española

La extrema diferenciación social acentúa los menores contragolpes económicos. De los once millones de españoles que constituyen la población activa del país, ocho millones "son pobres" cuyo trabajo apenas si les asegura la subsistencia: un millón de pequeños artesanos, de dos a tres millones de obreros agrícolas, de dos a tres millones de obreros de la industria y mineros, dos millones de aparceros o muy pequeños propietarios rurales. Entre esta masa y el millón de privilegiados -funcionarios, sacerdotes, militares, intelectuales, grandes propietarios rurales y grandes burgueses- se intercalan menos de dos millones de hombres de las "clases medias", la mitad de los cuales son campesinos acomodados. La pequeña burguesía urbana no llega al millón.

La burguesía española había renunciado a lo largo del siglo XIX a su independencia política. Era muy débil, dependiente del capital extranjero. Sólo en Vizcaya y en Asturias se constituyó una verdadera oligarquía financiera bien representada por los bancos de Vizcaya y de Bilbao. Los millonarios de Bilbao y de Asturias buscaban aliarse con la oligarquía terrateniente. La nueva oligarquía financiera, recién nacida, se unió por multitud de lazos, así personales como económicos, con la aristocracia.

El aristócrata español no supo integrarse al movimiento de expansión capitalista. Casi no se preocupaba por lograr que sus dominios prosperasen como una empresa, sino que se cuidaba ante todo de no perder su autoridad del señor sobre la mano de obra barata, de la que consideraba que podía disponer por derecho de nacimiento. Naturalmente era monárquico, y no conocía más ley que la de su propia clase. Fueron ellos los que nutrieron, durante la República, las filas del "Partido de la Renovación Española", "cobertura legal de la insurrección", que dirigían Goicoechea y José Calvo Sotelo.

El problema agrario

En 1931, dos millones de trabajadores agrícolas no tenían tierra, mientras que 50.000 grandes terratenientes poseían la mitad de las tierras de España. Mientras que un millón y

medio de pequeños propietarios, cuyas tierras no ascendían a más de una hectárea de superficie, se veían obligados a trabajar las tierras de los grandes para vivir, 10.000 propietarios tenían más de cien hectáreas. En algunas provincias, el dominio de los "grandes" era total

Junto a esta España de los latifundios, de los grandes dominios del Sur explotados mediante el trabajo de obreros a quienes la abundancia de mano de obra permitía ofrecer tan sólo sueldos de hambre, coexistía otro problema agrario: el de las pequeñas tenencias del Norte y del Centro, a menudo demasiado pequeñas para la subsistencia de quienes las trabajaban.

La Iglesia

También la Iglesia española era un anacronismo, pues parecía haber salido directamente de la Edad Media con sus 80.000 sacerdotes, monjas y religiosos. Su poderío espiritual y temporal, era considerable. Era una potencia en el mundo de los negocios, tanto en la banca como en la industria. El mantenimiento de este auténtico ejército de sotanas, consumía una parte muy importante de la plusvalía extraída a la clase obrera y a los jornaleros. El presupuesto de la Iglesia Católica ascendía en 1930 a 52 millones de pesetas, y sus miembros más destacados vivían en condiciones de lujo insultante.

Durante la Monarquía, era dueña de la enseñanza, y lo siguió siendo en gran medida en la República. Pero las masas populares se habían separado de la tutela de la Iglesia y se volvían contra ella. Sólo en las regiones en que la desigualdad social es menos manifiesta, la Iglesia conservó una audiencia en las masas rurales. En otras partes, en la España de los latifundios, y en las grandes ciudades, la Iglesia era considerada como el instrumento de propaganda y de encuadramiento de los ricos, como la defensora de un orden social y de una propiedad inicuos, como el adversario decidido de todo mejoramiento social. Para bien aparte de la clase obrera, los curas eran enemigos de los trabajadores

El Ejército español

El ejército español no tenía equivalente en Europa. Regularmente derrotado a lo largo de todo un siglo en la defensa de las últimas posesiones coloniales, se afirmó al mismo tiempo como un cuerpo político autónomo. En pocas palabras, era un ejército de pronunciamientos.

Salida honrosa para los hijos de familia -los señoritos- la casta de los oficiales, celosa de sus privilegios, encarnaba a ojos de los tradicionalistas todas las virtudes españolas.

El Ejército jugaba un papel protagonista en los acontecimientos políticos. *"En el país del particularismo y del separatismo"*, escribía Trotsky, *"el ejército ha adquirido, por la fuerza de las cosas, una importancia enorme como fuerza de centralización y se ha convertido, no sólo en el punto de apoyo de la monarquía, sino también en el conductor del descontento de todas las fracciones de la clase dominante y ante todo, de su propia clase: la oficialidad..."* No podría resistir ni una semana a un ejército moderno: pero sí era capaz de ahogar en sangre una tentativa revolucionaria. Mal alimentados, mal vestidos, mal equipados, sus reclutas estaban también muy mal entrenados. Los oficiales eran muy mediocres técnicamente, y los más experimentados eran los coloniales que habían servido en las unidades de Marruecos. Sin embargo, tenía su élite, verdadero ejército profesional, con el *Tercio* de la Legión Extranjera, y sus regimientos marroquíes -los *Regulares*- reclutados entre las tribus montañosas más atrasadas y guerreras. Estos mercenarios, legionarios y *moros*, eran la tropa de choque de este ejército de guerra civil.

Por lo demás, lo que menos le faltaba a este ejército eran oficiales. Durante la monarquía había 198 generales, 16.926 jefes y oficiales, y 105.000 soldados de tropa, o sea, un oficial por cada seis hombres y un general para un poco más de cien soldados. Pero durante la República, hubo cada vez menos oficiales republicanos.

II. EL MOVIMIENTO OBRERO

El movimiento obrero español tiene también una fisonomía original. A diferencia del resto de Europa, donde los partidarios de Marx, mayoritarios, construyeron los partidos socialdemócratas afiliados a la segunda internacional y las centrales sindicales reformistas, en España, por el contrario, la victoria de los "libertarios", los amigos de Bakunin, tuvo consecuencias duraderas, y señaló durante largo tiempo al movimiento obrero español con el sello revolucionario de las tradiciones anarquistas y anarco-sindicalistas.

EL ANARCO-SINDICALISMO

La influencia de los teóricos anarquistas, como el célebre pedagogo Francisco Ferrer y, sobre todo, Anselmo Lorenzo, la de los sindicalistas revolucionarios de la C.G.T. francesa, se combinaron para producir el nacimiento, en 1911, a partir de los núcleos libertarios catalanes, de la *Confederación Nacional del Trabajo*, organización sindical revolucionaria a la que la represión no le impidió dirigir, a partir de 1917, la gran ola de huelgas de Cataluña

Bajo la dictadura de Primo de Rivera, en plena represión, se organizó, en 1927, la *Federación Anarquista Ibérica*, la F.A.I., tan misteriosa como poderosa, y que muy rápidamente dominó por completo a la C.N.T. Organización secreta, formada por grupos de afinidad semejantes a logias masónicas, bajo la autoridad de un Comité peninsular clandestino, la F.A.I. se convirtió muy rápidamente en el alma de la central anarcosindicalista. La FAI suponía para los obreros afiliados a la CNT una ruptura con la dirección del misma, anclada en un práctica de anarco-reformismo similar a la de la CGT francesa de entonces.

Acicateadas por ella, estallaron durante la República breves rebeliones, violentas llamaradas locales o regionales que instauraron un efímero *comunismo libertario*: en el Alto Llobregat en enero de 1932, en Casas Viejas en enero de 1933, en Aragón en diciembre de 1933. Es ella la que mantuvo a la C.N.T. al margen de todo entendimiento con los republicanos o los socialistas, la que alimentó en la propaganda de la central la hostilidad feroz de los anarquistas a los "engaños" electorales y parlamentarios.

La C.N.T. - F.A.I.

No todos los sindicalistas aceptaron de buen grado el dominio de la F.A.I. A partir de 1931, buen número de dirigentes se rebelaron contra la política de aventuras y de putsch que imponía a la central. Dirigentes, bien conocidos, el antiguo secretario general Ángel Pestaña, el redactor en jefe de *Solidaridad obrera*, Juan Peiró, y Juan López pedían el retorno a una acción más propiamente sindical, menos despego ante las reivindicaciones inmediatas, perspectivas de acción a más largo plazo. Su grupo llamado "treintista", excluido de la C.N.T., formó los "*Sindicatos de la oposición*" que fueron influyentes en Asturias, en Levante, en algunas ciudades de Cataluña.

Cualesquiera que hayan sido las indiscutibles dificultades de la C.N.T., sigue siendo verdad que su fidelidad al principio de la lucha de clases, al de la acción directa, le preservó una base obrera militante y combativa que tenía en su activo huelgas muy duras.

Durante la lucha contra la dictadura, surgen en la CNT dirigentes abiertamente revolucionarios, a los que los anarcorreformistas llaman despectivamente anarco-bolcheviques, de los que es el ejemplo Buenaventura Durruti.

Durruti nació en León, el 14 de julio de 1890, en una familia de ocho niños, de padre ferroviario. A los 14 años, era mecánico en un taller de ferrocarriles. Como participó activamente en la huelga de 1917, tuvo que expatriarse a Francia, donde trabajó tres años, luego volvió a España, se afilió a la C.N.T. y se volvió anarquista. En ese momento llegó a Barcelona, que era el corazón del movimiento. Allí, en el grupo de *Los Solidarios*, se vinculó a los que habrían de ser los compañeros de su vida de luchas. Durruti, Jover, Francisco Ascaso, y Juan García Oliver, el más "político" de los cuatro, serán los "Tres Mosqueteros", héroes legendarios del anarquismo español, combinación de militantes sindicales y

bandoleros, que no vacilaban en cometer un atraco para nutrir las arcas de la organización obrera o de enfrentarse pistola en mano a los escuadrones rompehuelgas de la Dictadura.

LOS SOCIALISTAS

Los comienzos del Partido Socialista

El pequeño grupo de "autoritarios" excluidos en 1872, por los amigos de Bakunin, de la sección española de la Internacional habría de ser el núcleo del *Partido Democrático Socialista Obrero*, fundado en 1879. En 1888, dos dirigentes socialistas, Mora y García Quejido, fundaron la *Unión General de Trabajadores* (U.G.T.). Centralizado, moderado y francamente reformista, el nuevo sindicato, fundado con poco más de 3.000 miembros, necesitó más de once años para duplicar sus efectivos iniciales.

A partir de comienzos de siglo, sin embargo, el *Partido Socialista Obrero Español* y la U.G.T. perdieron su carácter primitivo de secta para convertirse, poco a poco, en verdaderas organizaciones de masas. La institución de las Casas del Pueblo, que se propagó en este periodo, convirtió a los socialistas en los educadores de millares de militantes obreros.

El problema de la adhesión a la Tercera Internacional sacudió duramente al Partido Socialista. La revolución rusa fascinaba a los militantes. Finalmente, después de dos decisiones contradictorias tomadas por dos Congresos extraordinarios, un Tercer Congreso extraordinario decidió, por 8.800 votos contra 6.025 rechazar los "21 puntos" de adhesión a la Tercera Internacional. Mora y García Quejido, los fundadores de la U.G.T., y Daniel Anguiano, de regreso de Moscú, rompieron entonces con la organización y se llevaron casi a la mitad de los militantes para formar, con Andrés Nin, Maurín y los demás elementos de la C.N.T. convertidos al comunismo el *Partido Comunista Español*.

Una nueva crisis sacudió al Partido Socialista durante la dictadura de Primo de Rivera. El general, que buscaba un apoyo en el movimiento obrero, pidió a los socialistas que colaboraran con él. La "colaboración" se decidió: Largo Caballero se tornó consejero de Estado y, por intermedio de las comisiones paritarias de arbitraje se esforzó por ampliar la influencia y las bases de la U.G.T., en detrimento de la C.N.T., duramente perseguida.

Durante los dos primeros años de la República, a imagen de los partidos socialistas occidentales, los socialistas españoles colaboraron en el gobierno con los republicanos.

Largo Caballero fue ministro del Trabajo en un gobierno de Azaña que no vaciló en perseguir a los militantes de la C.N.T. Sin embargo, durante este periodo, y beneficiándose con el despertar a la vida política y sindical de nuevas capas de trabajadores, la U.G.T. se reforzó considerablemente. En 1934 contaba con un poco más de 1.250 000 adherentes.

Después de la victoria de la derecha en las elecciones de 1933, los socialistas parecieron dar la espalda a su actitud reformista tradicional de socialdemócratas: la insurrección de octubre de 1934 señaló este punto de inflexión radical hacia posiciones claramente revolucionarias.

LOS COMUNISTAS

Hemos visto cómo nació el Partido Comunista Español. Durante algunos años, el atractivo de la Revolución rusa parecía haber dado cuerpo al viejo sueño de Víctor Serge, la unión en el comunismo, alrededor de Lenin y de la Tercera Internacional de las dos corrientes separadas desde Marx y Bakunin, la de los "autoritarios" y la de los "libertarios", la socialista y la anarquista. Los resultados inmediatos fueron mediocres. Algunos años más tarde eran risibles. Pero esa fuerte corriente de atracción afectaba a militantes socialistas, anarquistas y sindicalistas en todos los países

Tres corrientes se habían reunido para fundar el movimiento comunista en España: las juventudes socialistas, primero, con Andrade y Portela, después la minoría socialista con Pérez Solís, García Quejido, Anguiano, Lamonedá, y el grupo de dirigentes de la C.N.T. que animaban Andrés Nin y Maurín. Dos años después, García Quejido, Lamonedá y Anguiano abandonaron el P.C. para regresar a la vieja casa socialista. Durante la dictadura de Primo de Rivera, el partido fue duramente afectado por la represión y debilitado por las luchas

internas y los conflictos provocados por las directivas de la Internacional. Si hacia el final de la dictadura, recibió la adhesión de militantes de la C.N.T. andaluza que dirigían José Díaz y Mije, perdió los 3.000 militantes de la Federación de Cataluña y de las Baleares que dirigían Maurín y Bonet y que se fusionó con el *Partido Comunista Catalán* que dirigían Arquer y Fané Gassó, formando así el *Bloque Obrero y Campesino* cuyo secretario será Maurín. Andrés Nin, secretario de la "Internacional Sindical Roja" por su parte, se adhirió a la "Oposición de Izquierda" y defendió, contra Stalin, las posiciones políticas de Trotsky. Vuelto a España en 1931, fundó con Andrade la *Izquierda Comunista*.

Desde 1923 hasta 1930, el partido nunca contó con más de unos cuantos centenares de miembros y no logró reunir un Congreso... En el de 1932, los "vencedores" de Nin y Maurín, el secretario general Bullejos, Trilla y Adame fueron expulsados a su vez, acusados de haber lanzado equivocadamente la consigna oportunista de "defensa de la República" contra el pronunciamiento del general Sanjurjo.

Los comunistas disidentes

Los grupos que se proclamaban comunistas pero que se habían separado de la organización oficial tenían orígenes diversos. Maurín y sus amigos del "*Bloque Obrero y Campesino*" se habían negado a aplicar la táctica impuesta por la Internacional y a crear, contra la U.G.T. y la C.N.T., los "sindicatos rojos" de la C.G.T.U. Por lo demás, manifestaron simpatías catalanistas que, en determinadas ocasiones, los acercaron a la Esquerra. Como todos los movimientos disidentes nacidos durante este periodo de una ruptura "hacia la derecha", en oposición a la línea de "ultra-izquierda" de la Internacional Comunista, el Bloque se negó, sin embargo, a tomar posición en las cuestiones rusas y su órgano, *La Batalla*, defendió a menudo posiciones parecidas a las de la prensa estalinista.

Por el contrario, en lo tocante a las posiciones de la "Oposición de Izquierda" trotskista, nacida de las divergencias en el interior del partido ruso, se constituyó la "*Izquierda Comunista*" de Andrés Nin y Andrade, otros pioneros del comunismo español. Este pequeño grupo de cuadros valiosos se había consagrado, sobre todo, hasta 1934, a un trabajo "teórico" en la publicación de la revista *Comunismo*. Pero en esa fecha rompieron con Trotsky, que quería hacerlos entrar al Partido Socialista para constituir un ala revolucionaria, y decidieron fusionarse con el Bloque Obrero y Campesino para constituir el *Partido Obrero de Unificación Marxista* (P.O.U.M.).

C.N.T. y U.G.T.

El reordenamiento político que se operó en las filas de los partidos y de los sindicatos obreros, en los últimos meses de la República, hace difícil un análisis exacto de las fuerzas existentes. Sin embargo, es indiscutible que, más que las organizaciones políticas propiamente dichas, eran los sindicatos los que daban el tono: la vida del obrero gravitaba alrededor de las Casas del Pueblo y de las Bolsas del Trabajo, centros de vida colectiva que eran las verdaderas fortalezas de clase.

Fue la C.N.T. la que organizó a los obreros industriales en Cataluña, donde la U.G.T. no tenía más que una reducida existencia. Fue también la C.N.T. la que organizó a los braceros de Andalucía. Pero la U.G.T. seguía dominando entre los mineros de Asturias y de Río Tinto, entre los metalúrgicos de Bilbao y en la región de Madrid. En las zonas en que dominaba la otra, cada central llegó a organizar fuertes minorías de no escasa influencia.

Sin embargo, en general, los efectivos de la U.G.T., más sólidamente organizada y encuadrada, parecían más estables que los de la confederación rival, sujetos a brutales fluctuaciones y variando considerablemente con el éxito o el fracaso de las acciones emprendidas localmente.

III. LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

Tras el fin de la dictadura de Primo de Rivera, la burguesía y los terratenientes intentaron aún salvar a la Monarquía. Pero los intentos de salvar al régimen desprestigiado fracasaron.

El rey encarga las últimas tentativas de salvar a la monarquía primero al general Berenguer, jefe del cuarto militar de Alfonso XIII, y luego al almirante Aznar. Pero para muchos burgueses era obvio que el mantenimiento del monarquía se estaba convirtiendo en un peligro para la garantía del orden social. De este modo viejos prohombres de la monarquía cambiaron de chaqueta. Gente como Miguel Maura, o el ex ministro monárquico Niceto Alcalá Zamora se volvieron hacia la República. Otros muchos siguieron su camino.

Los republicanos burgueses y los dirigentes del PSOE buscan un acuerdo. El 17 de julio de 1930, en el *Círculo Republicano* de San Sebastián se dieron cita los principales dirigentes del republicanismo junto a Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos en representación "oficiosa" del PSOE. El objetivo de la reunión era trazar un plan de acción para proclamar la República. Una República definida en el mitin del 28 de octubre en la plaza de toros de las Ventas de Madrid, que congregó a una enorme multitud para escuchar a los líderes republicanos, donde Manuel Azaña defendió explícitamente, *"una república burguesa y parlamentaria tan radical como los republicanos radicales podamos conseguir que sea"*. En principio se buscaba el advenimiento de la República por la vía de un pronunciamiento militar.

El Comité Ejecutivo salido del *Pacto de San Sebastián* y transformado en el mes de octubre en Gobierno Provisional de la República, fijó la fecha del alzamiento contra la Monarquía para el 15 de diciembre. Pero el plan, mal trazado, sólo dio lugar a un limitado levantamiento militar en Jaca, dirigido por dos capitanes. A pesar de todo, el régimen caminaba hacia su fin. El gobierno Berenguer cae, tras rechazarse su propuesta de adelantar las elecciones legislativas. El nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar se muestra impotente para controlar la situación. La agitación estudiantil se extendió con continuas huelgas universitarias que eran reprimidas con dureza por la policía y la guardia civil mandadas por Mola. El movimiento obrero despertaba. La confraternización y la unidad de los obreros y los estudiantes en la calle reflejaba la enorme tensión revolucionaria que había alcanzado la situación.

El gobierno acosado intentó ganar tiempo convocando para el 12 de abril elecciones municipales, con la esperanza de contener el movimiento de la oposición y lograr el apoyo de los sectores republicanos al establecimiento de una Monarquía Constitucional. Pero ya era tarde. A pesar del fraude electoral y la intervención de los caciques monárquicos en las zonas rurales más atrasadas, el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas fue masivo en las grandes ciudades. El delirio de las masas se desató en las principales capitales y ciudades del país, donde la República fue proclamada en los ayuntamientos. En Barcelona Lluís Companys, elegido concejal, proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento. En Madrid, las masas se habían echado a las calles y el 14 de abril abarrotaron las arterias centrales de la ciudad. Miles de obreros venidos de todos los rincones llenaban la Puerta del Sol, todo el centro de Madrid. Finalmente, el gobierno provisional republicano entró en la sede de Gobernación y a las ocho y media de la noche, Alcalá Zamora proclamó la República. Alfonso XIII salía camino del destierro. La primera fase de la revolución española había culminado con la caída de la Monarquía.

El nuevo régimen republicano tenía ante sí la tarea de crear una base democrática al débil capitalismo español y modernizar sus estructuras económicas. Sin embargo la burguesía española, la aristocracia y el ejército, que tanto lucharon por prolongar la vida de la monarquía, aceptaron a regañadientes la llegada de la República, y desde el comienzo intentaron transformar la situación en su propio beneficio.

EL BIENIO REPUBLICANO-SOCIALISTA

Las elecciones a Cortes Constituyentes fueron convocadas el 28 de junio de 1931 y a pesar de las restricciones antidemocráticas (Sólo podían votar los mayores de 23 años, la mujer no votaba...) los resultados electorales constataron un triunfo arrollador de las candidaturas republicano-socialistas.

La derecha se afianzó especialmente en las provincias agrarias de Castilla y Navarra; Los carlistas de la "Comunión Tradicionalista", movimiento monárquico reaccionario, tenían indiscutiblemente una base popular entre los pequeños agricultores de Navarra encuadrados por un clero fanático.

El Gobierno de la Conjunción republicano-socialista, que contaba con la participación del PSOE, partido tradicional de la clase trabajadora española, tenía ante sí una enorme responsabilidad, pero apenas pasó de unas moderadas reformas. Además, en su defensa del orden burgués, se enfrentaron al movimiento de los trabajadores y especialmente a los jornaleros que no se conformaba con las promesas y los debates parlamentarios: su sed de tierra no podía esperar. La agitación obrera en favor de la jornada de 8 horas, de incrementar salarios, del subsidio de paro y de reformas agrarias se extendió formidablemente. El 1º de Mayo puso de manifiesto esta nueva correlación de fuerzas. En Madrid más de 100.000 personas desfilaron encabezadas por los ministros y dirigentes socialistas.

Para garantizar la supervivencia de la República y del propio Gobierno, era necesario depurar el ejército de elementos reaccionarios y de golpistas. Azaña, temeroso de enfrentarse con la casta militar, se limitó a una "proposición de caballeros", favoreciendo el retiro de aquellos mandos que no querían jurar fidelidad a la República, pero con la garantía de que seguirían percibiendo la totalidad de su sueldo. Muchos oficiales aprovecharon la oportunidad para conseguir un retiro dorado, sobre todo los republicanos que odiaban el ambiente de asfixiante reacción de las salas de banderas, pero muchos otros, reaccionarios de la peor especie, estamparon su firma de servicio a la República y continuaron en sus puestos: Un fiel colaborador del general Franco ha dicho refiriéndose a aquel momento: "*muchos le preguntaban si debía solicitar el retiro. Franco les respondió: ¡No! Mucho más útiles a España seréis dentro del ejército*".

Reforma Agraria

Para las masas campesinas, la República tenía sentido sólo si ratificaba su derecho a la tierra. Todos esperaban que el gobierno diera satisfacción a este anhelo a través de la *Reforma Agraria*.

La burguesía española siempre había antepuesto a la movilización campesina su alianza con los terratenientes y la aristocracia. Pero la sed de tierras del campesinado por el contrario no podía esperar, y las ocupaciones se sucedían. En Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Rioja... Muchas de estas ocupaciones terminaron con una represión sangrienta. Mientras el gobierno debatía con lentitud exasperante el proyecto de reforma agraria en el Parlamento, la presión de los acontecimientos, y la sublevación de Sanjurjo en Sevilla, en agosto de 1932, derrotada por la huelga general de los obreros sevillanos, provocaron la aceleración del debate y la promulgación final de un proyecto que no afectaba a la gran propiedad terrateniente.

La ley establecía un *Instituto de Reforma Agraria* encargado de realizar el censo de tierras sujetas a expropiación, eso sí, mediante el pago de indemnización que tenía además por base la declaración hecha por sus propietarios. Los créditos para la Reforma Agraria procederían del *Banco Agrario Nacional* con un capital inicial de 50 millones de pesetas, pero cuya administración dependía no de los jornaleros ni sus organizaciones, sino de representantes del *Banco de España*, el *Banco Hipotecario*, del *Cuerpo Superior Bancario*, del *Banco Exterior de España*, es decir del gran capital financiero ligado a los terratenientes.

La reforma agraria exigida por los jornaleros se dejaba en manos de los terratenientes y la banca. El proyecto además, obviaba el problema de los minifundios, que obligaban a una vida miserable a más de un millón y medio de familias campesinas en Castilla la Vieja,

Galicia, y otras zonas. Tampoco abordaba el problema de los arrendamientos que esclavizaba a los pequeños campesinos a las tierras del amo. El fracaso de este proyecto es palpable: el 31 de diciembre de 1933, el *Instituto de Reforma Agraria*, había distribuido 110.956 hectáreas. Sólo 12.000 campesinos habían recibido un lote de tierras que, por lo demás, tenían que pagar. Si comparamos este dato con las 11.168 fincas de más de 250 hectáreas que ocupaban una extensión de más de 6.892.000 hectáreas se puede afirmar que los terratenientes seguían controlando el campo a su antojo. Y que a ese ritmo la Reforma Agraria se completaría en ¡125 años!.

El proyecto de reforma agraria favoreció la hostilidad de los jornaleros frente al gobierno de la República. Las ocupaciones y la lucha contra el latifundio se extendieron. Los jornaleros, defraudados por el gobierno, buscaban en la acción directa la solución a sus problemas.

La represión contra el movimiento obrero y campesino

Ante el incremento del número de huelgas y ocupaciones de fincas, el gobierno actuó con suma dureza. Frente a la agitación obrera y campesina, el orden se mantuvo con más firmeza que contra los monárquicos. La "Ley de Defensa de la República" hizo posible una represión que no tenía nada que envidiar, en cuanto a severidad, a la de la monarquía. Entre otras cuestiones, planteaba la prohibición de difundir noticias que perturbaran el orden público y la buena reputación, denigrar las instituciones públicas, rehusar irracionalmente a trabajar y promover huelgas. La "guardia civil", heredada de la monarquía, permaneció intacta. Se creó, a manera de doble, otro cuerpo de policía reclutado entre los republicanos: "la guardia de asalto" no menos enérgica en su acción contra los obreros y los campesinos.

Cuando Azaña dejó el poder, el balance de su lucha con la agitación obrera y campesina era concluyente: Las cárceles estaban llenas de militantes revolucionarios: 9 000, en su mayoría anarquistas, según los documentos oficiales.

El poder de la Iglesia

En su política religiosa, el gobierno Azaña sólo consiguió exasperar a los trabajadores y a la vez irritar a la derecha.

Respecto del poder de la Iglesia, el proyecto de Constitución presentaba un escollo para la derecha más reaccionaria, el referido a la extinción del presupuesto de culto y clero, y el límite que se imponía a la Iglesia sobre su control omnipresente de la enseñanza. El ala derecha, los reaccionarios "republicanos", como Alcalá Zamora, Presidente del Gobierno, y Miguel Maura dimitieron. Hecho que no impidió que después de la ratificación de la Constitución en el parlamento el 9 de diciembre, fuese elegido, como primer Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora con 362 votos de un total de 410.

Aunque la constitución aseguraba formalmente la separación de la Iglesia y del Estado, lo que acabó con las subvenciones directas, el control del que siguió disfrutando sobre la educación le garantizó un buen nivel de ingresos. Se acordó la expulsión de la Iglesia de los colegios, pero en un "plan de larga duración", y la disolución en 1932 de la orden de los jesuitas, a quines se les dió todas las oportunidades para transferir la mayor parte de sus bienes a particulares y otras órdenes.

La cuestión de las nacionalidades

El Gobierno de Conjunción republicano-socialista no concedió el derecho de autodeterminación a las nacionalidades históricas, y tan sólo otorgó a Catalunya una autonomía muy restringida y para Euskadi se negó a conceder el estatuto de autonomía basándose en el carácter "reaccionario" del nacionalismo vasco.

La opresión colonial

El gobierno siguió gobernando las colonias como antes había hecho la Monarquía. En Marruecos su posición imperialista enfrentaba a la República al movimiento independentista.

No podía ser de otra manera: conceder libertades nacionales al Marruecos español supondría abrir la caja de Pandora de un levantamiento colonial en las posesiones francesas de Marruecos y Argelia, en el Egipto controlado por los ingleses...

Balance del gobierno Azaña

En dos años de gobierno, la coalición de la pequeña burguesía republicana y sus aliados socialistas no fue capaz de llevar a cabo las tareas de la revolución democrática, ni menos aún satisfacer las ansias de mejora de las condiciones de la clase trabajadora. Capitularon ante el poder de la burguesía, el clero y los terratenientes y, en defensa de éstos, se enfrentaron precisamente con quienes les habían instalado en el gobierno: los trabajadores y los jornaleros.

La reacción, agazapada ante los primeros empujes de las masas, empezó a levantar cabeza, primero con el intento de golpe de estado de Sanjurjo, derrotado por la huelga general que le opusieron los trabajadores de Sevilla, después en el parlamento cuando los monárquicos y católicos, envalentonados, llegaron a utilizar demagógicamente la represión contra los obreros y los campesinos, especialmente el asesinato de 20 jornaleros, por la Guardia Civil en Casas Viejas (Cádiz), para atacar al gobierno.

Las bases del PSOE, UGT y Juventudes Socialistas, que constituían el destacamento más importante de la clase obrera española, se resistían cada vez más a esta política. En octubre de 1932 durante la celebración del XIII Congreso del PSOE, este profundo descontento se manifestó en el intento de romper la coalición gubernamental. La oposición sin embargo no era lo suficientemente clara y firme: necesitaba de acontecimientos.

A pesar de todo, las líneas del enfrentamiento y los actores que lo protagonizaron se dibujaron en ese período; Largo Caballero empezó a emerger como el líder del ala de izquierdas, mientras que Besteiro y Prieto se consolidaron como los garantes de las posiciones reformistas en el partido y en el sindicato.

La CNT superaba el millón doscientos mil afiliados, y su política de hostilidad hacia el gobierno de coalición se vio confirmada por la política de éste. La agitación campesina y el enfrentamiento permanente con el gobierno republicano alimentaron las tendencias hacia el apoliticismo, dando alas a los sectores faístas que defendían la acción directa más radical y rechazaban toda participación electoral.

IV. EL BIENIO NEGRO

El gobierno de conjunción republicano-socialista no resolvió los problemas fundamentales de la población: El desencanto y rechazo de los trabajadores permitía a la burguesía prescindir de él y poner de nuevo a los “suyos” en el gobierno.

El enfrentamiento social continuó desarrollándose vertiginosamente a lo largo de 1933, año crítico desde el punto de vista económico: el desempleo forzoso cada vez crecía más, afectaba a más de un millón y medio de trabajadores y jornaleros, los cierres patronales con la reducción de jornales, creaban un panorama donde la conflictividad laboral encontró su máximo apogeo.

Los dos años de gobierno de coalición acabaron en una profunda desilusión política de las masas. Las esperanzas depositadas en la República, la confianza en que los ministros socialistas realizaran reformas progresivas, que las medidas del gobierno abrirían nuevos horizontes para la vida de millones de personas, se convirtieron en frustración, rabia e impotencia.

La Acción Popular y la C.E.D.A.

La Iglesia de España no siguió inmediatamente a aquellos de sus miembros que querían lanzarla por el camino de los conspiradores monárquicos. Se trataba de crear, de dotar de cuadros y de animar a un gran partido católico de masas, que rechazara tanto la etiqueta de "monárquico" como la de "republicano", aceptando jugar el juego dentro del marco del régimen parlamentario, pero proclamando abiertamente su intención de abolir, en la constitución, toda referencia al carácter laico del Estado. La *Acción Popular* así constituida no era más que la trasposición a la arena electoral, en forma de un partido reaccionario y autoritario, de la *Acción Católica* enmarcada por la jerarquía. Su jefe era José María Gil Robles, hijo de un jurista católico, discípulo brillante de los salesianos de Salamanca, periodista de *El Debate*.

En 1933, al fusionar a su organización con otros grupos de derecha, llegó a crear la C.E.D.A (*Confederación Española de las Derechas Autónomas*): la alianza electoral con los grupos monárquicos le permitió alcanzar un enorme éxito. La C.E.D.A. fue, desde 1934 hasta 1936, el alma de la coalición con los republicanos de derecha, que destruyó sistemáticamente todas las realizaciones del primer gobierno republicano.

El "*Partido Radical*" de Alejandro Lerroux representó las aspiraciones de la pequeña burguesía hostil al Ejército y a la Iglesia, encarnó su deseo de ver surgir una España nueva, liberada de las trabas de la época feudal, que abriera el camino a una expansión capitalista creadora. Pero, espantados por la agitación obrera y campesina, los radicales dieron marcha atrás muy rápidamente y eligieron, en 1933, por miedo a la revolución, la alianza con la C.E.D.A. con la que compartieron las responsabilidades gubernamentales.

Las elecciones de 1933

El descontento obrero y campesino tuvo una expresión muy concreta en el terreno electoral. Cuando el presidente de la República disuelve las cortes y convoca nuevas elecciones para noviembre de 1933, la reacción de derechas había reconquistado una parte importante del terreno perdido el 14 de abril, especialmente entre las capas medias urbanas y las del campo, y sectores atrasados del campesinado.

Los resultados electorales transformaron la composición de la Cortes. Aunque el PSOE no perdió una parte sustancial de los votos, (obtuvo 1.600.000 aproximadamente, el 20% del censo electoral), la ley electoral aprobada bajo el gobierno de conjunción que favorecía a las agrupaciones y/o bloques electorales, castigó severamente al PSOE que pasó de 116 escaños a 61, de los 471 que contaba el parlamento. El desplome de los republicanos fue espectacular: pasaron de 118 diputados a 16; y la derecha pasó de 34 a 227, de los que 115 correspondían a la CEDA de Gil Robles. La CNT que no pudo impedir que en 1931 cientos de miles de afiliados votaran por las candidaturas republicano-socialistas, desarrolló en esta ocasión, una intensa campaña por la abstención que encontró un amplio eco.

Aún así, el proletariado estaba muy lejos de sentirse derrotado. La burguesía era perfectamente consciente de esto, y en lugar de promover un gobierno directamente de la CEDA, prefirió promover un gobierno de derechas más aceptable, encabezado por el viejo Lerroux. Pero el partido de Lerroux cayó en el descrédito más total a consecuencia de un escándalo financiero en 1935. Una parte de su estado mayor, detrás de Martínez Barrio, hijo de obreros y dignatario de la masonería, se unió en ese momento a los "republicanos de izquierda" de Manuel Azaña, de quienes los distinguían solamente matices.

La patronal y los terratenientes con la ayuda de la mayoría parlamentaria de derechas, se entregaban a la tarea de eliminar todas las tímidas reformas y los pequeños avances registrados por el anterior gobierno. Se suprimieron los salarios mínimos en el campo y en la industria; se promovía el desahucio de miles de pequeños arrendatarios del campo; aprobaron la ley de amnistía que incluía la libertad con todos sus derechos a los militares sublevados de 1932 a las órdenes de Sanjurjo, excluyendo obviamente a los anarquistas detenidos por la insurrección cenetista del 8 de diciembre de 1933.

Radicalización Obrera

Frente al gobierno del derecha, se produjo una importante radicalización de los trabajadores, y en especial, de la juventud obrera.

La presión del movimiento se concretó en el giro izquierdista de Largo Caballero. Consejero de Estado con Primo de Rivera, Ministro del Trabajo en el gobierno republicano de Azaña, fue el campeón de la colaboración de los sindicalistas y de los socialistas con el Estado, el cabo de fila del reformismo más franco y abierto. Sin embargo, en febrero de 1934, no vaciló en afirmar: *"la única esperanza de las masas es, hoy en día, una revolución social"*.

Y es que su experiencia ministerial lo había decepcionado profundamente. Fue el primero de los socialistas que chocó con Azaña. El personal del Ministerio, los altos funcionarios, habían saboteado francamente sus directivas y habían ridiculizado sus proyectos de reforma. Sacó en conclusión que el reformismo conducía al movimiento obrero a un callejón sin salida. *"Es imposible -dijo- realizar un pedazo de socialismo en el marco de la democracia burguesa"*.

El primer resultado práctico de esta nueva orientación fue, desde 1934, la organización, auspiciada por él, de la "Alianza Obrera", frente único de los partidos y sindicatos obreros al cual los comunistas y la C.N.T., salvo en Asturias, no se sumaron.

En ocasión de la huelga general de octubre de 1934, contra la llegada de la C.E.D.A. al gobierno, fue la Alianza Obrera, a la cual se sumó el P.C. en el último momento, la que dirigió el levantamiento revolucionario de Asturias.

Encarcelado tras la revolución de Asturias, Caballero, ese viejo, ese "patricio", ese administrador del movimiento obrero, se puso a leer por primera vez. A los 67 años descubrió a los clásicos del marxismo, a Marx y Engels, Trotsky, Bujarin y Lenin sobre todo. Se entusiasmó por *el Estado y la Revolución* y por la revolución rusa que había combatido tan vivamente. Estas lecturas, la influencia del brillante estado mayor de intelectuales que lo rodearon, Araquistáin, Álvarez del Vayo, Carlos de Baraibar reforzaron todavía más las conclusiones sacadas de su propia experiencia. A su juicio, habían muerto tanto el *"socialismo democrático reformista y parlamentario de la Segunda Internacional como el socialismo revolucionario de la Tercera dirigido desde Moscú"*. Soñó en una Cuarta Internacional que tomaría de sus predecesores lo que de mejor habían tenido, la autonomía de los partidos nacionales de la Segunda, la táctica revolucionaria de la Tercera. Multiplicó las insinuaciones para llegar a un acuerdo con la C.N.T. y recibió favorablemente las que le hacían los comunistas a quienes atraían más, en realidad, sus tomas de posición en favor de la unidad que las perspectivas revolucionarias que tan recientemente acababa de descubrir.

Ahora bien, su evolución fue la misma que la de las grandes masas de obreros y de campesinos, como él decepcionados por la República y el reformismo, como él conquistados para la Revolución, aun y sobre todo después del fracaso de 1934. Largo Caballero será su hombre

Al mismo tiempo, las Juventudes Socialistas –que agrupaban a cientos de miles de jóvenes trabajadores- sufren una evolución aún más radical hacia posiciones revolucionarias. Su órgano central, *Renovación* llama abiertamente *"a los trotskistas, a los mejores revolucionarios del estado español"* a unirse a ellos para construir un partido revolucionario.

"las declaraciones incendiarias de Largo Caballero", escribe Grandizo Munis, *"producían un efecto eléctrico en las masas; lo que dicen los dirigentes como maniobra calculada, las masas lo toman en serio y lo incorporan a sus convicciones"*. El proceso se alimentaba en doble dirección, favoreciendo la politización de las masas, la radicalización de sus posiciones y transformando su conciencia

Las Alianzas Obreras

El avance del fascismo y las mediadas del gobierno de la derecha aceleraron los intentos de coordinar la respuesta de las organizaciones de clase, que rápidamente cristalizaron en las *Alianzas Obreras*. Impulsadas por el *Bloque Obrero y Campesino* y la

Izquierda Comunista, adquirieron su mayor extensión e influencia tras la incorporación del PSOE y la UGT en diciembre de 1933 tras la derrota electoral.

Las *Alianzas Obreras*, fueron en esencia comités de enlace entre los partidos, donde el PSOE dominante se negó a transformar las AO en consejos obreros, funcionando con delegados elegidos democráticamente en las fábricas, tajos, en el campo. Aún así, las AO cumplían un papel esencial: elevaban a un grado superior la conciencia del proletariado y favorecían la unidad de acción. La lucha de clases en el Estado español adquirió con rapidez las formas de un choque revolucionario.

El PCE rechaza las Alianzas Obreras "(...) *los renegados del bloque, la rama anarquista del treintismo, la variante socialfascista catalana, el grupo de contrarrevolucionarios trotskistas, enemigos acérrimos del Frente Único y el Partit Comunista de Catalunya, constituyendo la Alianza Obrera, caricatura del frente único, pretenden engañar a los obreros que quieren el frente único sinceramente...*" (Proyecto de tesis del Tercer Congreso del PCE, 31 de agosto de 1934). "*La Alianza Obrera es una maniobra de traidores (...) que divide a los obreros y fortalece al bloque de toda la reacción...*" (Catalunya Roja, nº 33, diciembre 1933). Aunque a última hora, el PCE rectificó y se unió a la *Alianza Obrera* de Asturias.

La CNT, salvo donde dominan los contrarios a la FAI, como en Asturias, tampoco se unió a ellas.

Declaraciones revolucionarias

El Gobierno Lerroux no conseguía frenar la movilización obrera y campesina. Sectores decisivos del capital exigieron la entrada de la CEDA en el gobierno, con la amenaza de establecer un régimen fuertemente autoritario desde la legalidad y la mayoría parlamentaria de que disfrutaban.

Largo Caballero y otros dirigentes del PSOE anunciaron públicamente que la llegada de la CEDA al gobierno obligaría al PSOE y a la UGT, y por tanto a las Alianzas Obreras, a desencadenar la revolución. La radicalización de las posturas de Caballero, en palabras, no dejan dudas: "*Ya no es cuestión ahora de partidos intermedios entre la clase trabajadora y la burguesía (...) o bien el poder pasa a manos de las derechas, o bien a las nuestras, y como las derechas necesitan para sostenerse una dictadura, la clase trabajadora una vez logrado el poder, ha de implantar también la suya, la dictadura del proletariado. La hora de choques decisivos se va acercando. El movimiento obrero ha de prepararse para la Revolución...*" (diario *Adelante*, febrero de 1934).

Estas palabras no tenían sin embargo su traducción práctica. La falta de preparativos para la insurrección dejaba claro que Largo Caballero trataba de utilizar el movimiento como una amenaza en lugar de organizar seriamente la revolución. No existían ni preparativos militares serios (que fueron confiados al dirigente del ala derecha del PSOE, Prieto, que sabotaba abiertamente toda acción), ni agitación hacia los soldados (se priorizaba la complicidad con militares "republicanos"), ni organización de las Alianzas Obreras en la base, ni búsqueda de unidad con los militantes del CNT. Para colmo, el PSOE permitió que una gran huelga de jornaleros, promovida por la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) de la UGT, y que alcanzó 38 provincias y más de 300.000 huelguistas, fuera derrotada después de 15 días de lucha, frente a una terrible represión: hubo trece muertos, diez mil detenidos y la FTT fue desmantelada. Los obreros del campo quedaban temporalmente fuera de combate, sin capacidad de reacción. ¿Se podría pensar en una posterior insurrección victoriosa sin la participación activa del movimiento jornalero?

La Revolución de Asturias

La indecisión de Largo Caballero lleva a la burguesía a dar un paso adelante. Cuando en la noche del 4 de octubre se anunció la entrada de la CEDA en el gobierno, Largo Caballero y las AO dieron la orden de la insurrección, pero ésta no había sido preparada.

Sin una dirección consecuente, sin objetivos decididos y sin la participación y discusión previa de esos objetivos por los cuadros y activistas obreros la insurrección se transformó, salvo en Asturias, en una huelga laboral. En Madrid, las concentraciones de

obreros en las casas del pueblo, Puerta del Sol, inmediaciones de los cuarteles, esperando planes, consignas, armamento, fueron respondidas por los líderes socialistas con el silencio.

En Catalunya la AO dominada por el BOC de Maurín, se limitó a desencadenar la huelga y esperar que la Generalitat de Companys tomase la iniciativa. No hubo planes militares, ni intentos serios para ganar a la base de la CNT, cuyos líderes en Barcelona se opusieron a la huelga. Según Maurín "(...) *El éxito o el fracaso depende de la Generalitat (...) es muy probable que la pequeña burguesía desconfíe de la causa de los trabajadores. Hay que procurar en lo posible que este temor no surja, para lo cual, el movimiento obrero se colocará al lado de la Generalitat para presionarla y prometerle ayuda, sin ponerse delante de ella...*" (*Hacia la Revolución*, Joaquín Maurín, 1935).

La Generalitat y la pequeña burguesía gubernamental respondieron traicionando el movimiento insurreccional, aunque para salvar su honor, proclamaron el "Estado Catalán", sin hacer nada por resistir el asedio militar de las tropas del gobierno de Madrid.

En el resto del Estado el movimiento fue enormemente confuso y aunque los trabajadores adoptaran una postura militante ante el llamamiento de sus dirigentes, sin consignas, sin estrategia y con el campesinado derrotado, pronto se desmoronaron.

En Asturias el proceso fue muy diferente. La insurrección de Asturias prendió en las cuencas mineras mientras en Gijón y Oviedo, los dirigentes socialistas actuaron igual que sus colegas en el resto del Estado. Los mineros aceptaron el reto, y su actitud revolucionaria lo transformó todo. Según Tuñón de Lara en la insurrección participaron 20.000 mineros; para Grossi, representante del BOC en Mieres, la cifra puede llegar hasta los 30.000. Durante 15 días de insurrección, la Comuna asturiana, como en 1871 la Comuna de París, se convirtió en un embrión de Estado obrero dentro del Estado español. Los comités desempeñaron las tareas militares, de aprovisionamiento de medios de subsistencia. Se sustituyó las monedas por vales, se estructuró la red sanitaria, los pozos mineros seguían teniendo sus tareas de conservación y se formó una Guardia Roja encargada de mantener el orden. Durante más de una semana, con un armamento improvisado, bajo la dirección de militantes de las diferentes organizaciones, los mineros se batieron con el ejército y las tropas de choque, Regulares y Tercio que mandaba el general López Ochoa.

La represión que vino después -más de 3.000 trabajadores muertos, en su mayoría asesinados en el sitio, 7.000 heridos y más de 40.000 presos- no llegó a aplastar el sentimiento revolucionario que había inspirado el movimiento. La insurrección de Asturias será para los trabajadores españoles, tanto anarquistas como socialistas, una epopeya ejemplar, el primer intento de los obreros para tomar el poder con organismos de clase, sus comités revolucionarios, de reclutar sus tropas, de armar a los obreros, en una palabra, de edificar su propio Estado contra el Estado de la oligarquía. Su lema: "U.H.P." (Unión de hermanos proletarios) se convirtió en el de toda la clase.

La represión

La insurrección de Octubre desató todas las alarmas de la clase dominante. El proletariado español había probado no sólo en las declaraciones públicas de sus líderes, sino con las armas en la mano, que no consentiría un triunfo "frío", pacífico de la contrarrevolución.

El terror blanco desató toda su furia contra los cabecillas del levantamiento minero, que fueron fusilados por cientos, las organizaciones proletarias, que sufrieron detenciones, prohibiciones y clandestinidad, y en general contra el movimiento obrero que sufrió en sus filas miles de detenidos.

En mayo, Lerroux finalmente formó gobierno con seis ministros cedistas, incluido su líder, Gil Robles, que ocupó el Ministerio de la Guerra. Pero los acontecimientos de Asturias habían señalado el peligro. La conjura militar, que había permanecido latente desde la proclamación de la República, se aviva

La conjuración militar

Bajo la mirada benévola de Gil Robles, ministro de la Guerra de 1934 a 1935, se desarrolló la conspiración militar con que contaban los elementos extremistas. Uno de los

primeros actos del gobierno emanado de las elecciones de 1934 fue la proclamación de la amnistía de los militares envueltos, en 1932, en el pronunciamiento del general Sanjurjo. Los oficiales condenados y expulsados fueron reintegrados. En 1934, por iniciativa del propio Sanjurjo, se creó la "*Unión Militar Española*", que se convirtió rápidamente en el centro de una conspiración de la que formaban parte la mayoría de los grandes jefes, el general Franco, jefe de Estado Mayor, el general Fanjul, subsecretario de Estado, el general Rodríguez del Barrio, Inspector General del Ejército, todos ellos monárquicos y conservadores, instalados en los puestos de mando del ejército republicano. Uno de los suyos, el teniente general Barrera, con los monárquicos Lizarza y Goicoechea, firmó un acuerdo con Mussolini.

Oculto tras el nombre de guerra de "Don Pepe", fue el coronel Varela -rápidamente ascendido a General- el que aseguró la conexión con los jefes carlistas y dirigió en Navarra la formación militar de los requetés. En el transcurso del verano de 1935, durante las grandes maniobras de Asturias, Franco, Fanjul y Goded, según uno de los historiógrafos oficiales del movimiento, pusieron "las bases de los preparativos del levantamiento nacional". Los jefes del ejército estaban preparados para entrar en acción si el partido de Gil Robles se mostraba incapaz de alcanzar el poder por el camino de las elecciones.

Individuos destacados de la oligarquía, como Luis Oriol (tradicionalista y banquero), que fletó un barco desde Bélgica con 6.000 fusiles, 150 ametralladoras pesadas, 300 ligeras, 10.000 bombas de mano y 5 millones de cartuchos, financiaban y armaban sin tapujos las fuerzas de la contrarrevolución. Los carlistas habían organizado una Junta Militar, que funcionaba desde San Juan de Luz, y adiestraba a las fuerzas de choque de los Requetés, que regularmente recibían cargamentos de armamento para sus arsenales.

Radicalización de los socialistas

A pesar de la represión, durante todo el año de 1935 las organizaciones obreras reconstruyen sus estructuras, levantan de nuevo sindicatos, reaparecen las publicaciones. El 1º de Mayo de 1935 el país se paraliza ante la llamada a la huelga de las organizaciones de izquierda. La agitación por la amnistía moviliza los esfuerzos de cientos de miles de obreros y campesinos, y se extiende a todos los rincones del país.

Este fenómeno adquirió mayor virulencia en el Partido Socialista y en las Juventudes Socialistas, las agrupaciones más importantes del proletariado español. Largo Caballero que se convertía en la cabeza visible de este giro a la izquierda logró agrupar a un importante núcleo de dirigentes socialistas, entre los que destaca, Luis Araquistain, "teórico" de las posiciones de esta tendencia. Pronto comenzarán a publicar un periódico para exponer sus posiciones políticas, *Claridad*, que aparece como portavoz de la UGT.

En las JJSS el proceso iniciado antes de la insurrección de octubre se fortalece después de la derrota. En un folleto publicado clandestinamente, *Octubre segunda etapa*, en el que se contienen ideas muy confusas respecto al gobierno de conjunción (1931-1933) y la política del PSOE, a la que se califica de oportunismo revolucionario, se refleja la evolución política de las juventudes hacia la izquierda: "*Regresemos a Marx y Lenin, unamos a la juventud revolucionaria en una internacional que rompa los errores del pasado, para ello invitamos a la Juventud Comunista, a las Juventudes Comunistas de Izquierda y a las juventudes del BOC a entrar en masa a la Juventud Socialista de España, invitamos a la juventud revolucionaria a unirse a nuestra bandera para la reconstrucción del movimiento proletario internacional*".

Los jóvenes socialistas se dirigen en primer lugar a los trotskistas de la *Izquierda Comunista Española*, a quienes Trotsky aconseja entrar a banderas desplegadas en las JJ.SS.. Pero Nin y Andrade, dirigentes de la ICE, se niegan a hacerlo y se orientan a la fusión con el BOC de Maurín. Los jóvenes socialistas se orientan entonces hacia el PCE, que mima a sus dirigentes. Pronto se unifican con las minúsculas JCE en una organización de masas, las *Juventudes Socialistas Unificadas*, que no tardará en ser totalmente controlada por el PCE.

V. LAS ELECCIONES DE 1936: EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR

El Presidente de la República, Alcalá Zamora, católico y conservador, puso fin al bienio negro al disolver las Cortes. En 1935, en efecto, la coalición gubernamental de los radicales y la C.E.D.A. estaba seriamente quebrantada. Dos escándalos mancharon de lodo los políticos del partido radical.

El descrédito en que cayó el partido del centro-derecha fue tal que la C.E.D.A. no pudo pensar en continuar la alianza: Gil Robles que, desde el comienzo de la legislatura, buscaba el poder para su partido, aprovechó la ocasión. Los ministros de la C.E.D.A. rechazaron el presupuesto que estipulaba, al lado de la reducción de los salarios de los funcionarios en un 10% o un 15%, un aumento de 1 a 3.5% de los impuestos sobre herencia de los bienes raíces. El gobierno dimitió.

Gil Robles reclamó la presidencia del Consejo. Alcalá Zamora se negó a dársela: temía un nuevo levantamiento popular si le ofrecía el poder a un adversario declarado del régimen parlamentario. Apeló a un político del centro, Portela Valladares, para formar un gobierno cuya misión esencial era preparar nuevas elecciones. No lo logró: las Cortes se habían vuelto ingobernables. Después de unas pocas semanas, renunciando a preparar seriamente elecciones que reforzarían el centro, Portela Valladares renunció: sometió a firma del presidente el decreto de disolución de las Cortes que fijó las elecciones para el 16 de febrero de 1936.

La campaña electoral: derecha contra izquierda

Lo que se ventilaba en las elecciones tenía considerable importancia. Ciertamente es, los acontecimientos de los últimos años, la insurrección y la represión de 1934, la reacción del bienio negro y la radicalización obrera habían endurecido las posiciones y creado una atmósfera propicia a la formación de bloques electorales irreductiblemente opuestos. Pero, a este respecto, fue la ley electoral la que pesó, por sus exigencias, sobre la estrategia de unos y de otros, de todos aquellos que, en última instancia, deseaban jugar a fondo el juego parlamentario. Las circunscripciones previstas eran inmensas y exigían para las campañas electorales fondos enormes, de los que sólo podían disponer vastas organizaciones. El implacable escrutinio mayoritario empujaba a la formación de vastas coaliciones.

En 1933, la derecha, unida en un frente electoral, tuvo menos votos que los partidos de izquierda, pero dos veces más diputados. Aunque hubo en algunas circunscripciones candidaturas de "Renovación Española" y la Falange acudió a las casillas electorales con su propia bandera, en conjunto, sin embargo, la derecha presentó en las elecciones un frente unido ampliado inclusive, en varios lugares, con liberales de derecha que se habían mantenido al margen en 1933. Realizó un enorme esfuerzo de propaganda: carteles inmensos, en los que el retrato de Gil Robles ilustraba las consignas del "jefe", cubrían los muros del país. El propio Gil Robles llevó a cabo una campaña de extraordinaria violencia verbal en la que insultó y amenazó al adversario, y dio a entender claramente que su victoria significaría el fin de la República y el advenimiento de un régimen autoritario.

Una coalición electoral de izquierda replicó a la alianza de las derechas. El 15 de enero de 1936 los partidos republicanos de izquierda, la Unión Republicana de Martínez Barrio, la Izquierda Republicana de Azaña firmaron con el Partido Socialista (y, por consiguiente, la U.G.T.), el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, el Partido Comunista y el P.O.U.M. el pacto del "Frente Popular" que fijó el programa de la coalición electoral así constituida.

La táctica de Frente Popular acababa de ser adoptada por la Internacional Comunista, tras enterrar su ultrasectaria teoría del "socialfascismo", según la cual la socialdemocracia era la mayor enemiga de la clase obrera y gemela del fascismo. Tras la aplastante derrota que supuso la subida de Hitler al poder en Alemania, la IC gira bruscamente y propugna en

todas partes la alianza de los partidos obreros con la burguesía liberal. Dimitrov se encargó de presentar la nueva doctrina política, enterrando las viejas ideas ultraizquierdistas del socialfascismo: *"Hoy en día, en una serie de países capitalistas, las masas trabajadoras tienen que elegir concretamente, por el momento, no entre la dictadura del proletariado y la democracia burguesa, sino entre la democracia burguesa y el fascismo"*.

Este pacto-programa de ocho puntos era menos, por lo demás, un acuerdo en lo tocante a un programa común que la aceptación por los partidos obreros del de los republicanos. Al lado de las viejas reivindicaciones republicanas de reforma agraria y de planes de enseñanza, se pronunció en favor de reformas del reglamento de las cortes, de reformas de las municipalidades, en pro de planes de reorganización de las finanzas, de protección de la pequeña industria, de desarrollo de las obras públicas.

Era un programa liberal que se mantenía dentro de un marco burgués y excluía expresamente las reivindicaciones socialistas de nacionalización de las tierras y de los bancos y del control obrero de la industria. *"La República que conciben los republicanos - afirmó él- no es una república animada por intenciones sociales y económicas de clase, sino un régimen de libertad democrática movido por razones de interés público y de progreso social"*.

Este programa indiscutiblemente moderado, en el que, como escribe Ramos Oliveira, *"cada punto parecía una huida"* llevaba consigo, no obstante, una exigencia que encontró una gran aprobación y permitió una verdadera movilización popular: la de la amnistía total para los insurrectos de 1934, y la reintegración, con indemnización, de todos los trabajadores echados de su trabajo. Por la intención de liberar, en primer lugar, a los 30.000 obreros todavía encarcelados y hacer aprobar, al mismo tiempo su gesto revolucionario, los amigos de Caballero y el P.O.U.M. -mantenedores de la Alianza Obrera- justificaron su adhesión al Frente Popular: no querían ver en ello más que una alianza electoral sin mañana. En todo caso es este interés el que explicó el voto casi unánime de los obreros en favor de un programa que, por lo demás, no se prestaba mucho a movilizarlos. Y, por último, fue ese interés el que explicó el cambio de actitud de los anarquistas. Ciertamente es que la C.N.T. y la F.A.I. seguían siendo hostiles a las luchas electorales y, al igual que los sindicatos de la oposición, se mantuvieron al margen del Frente Popular y de la campaña electoral propiamente dicha; por primera vez, sin embargo, se abstuvieron de lanzar su consigna habitual de *No votad*, de sabotaje de las elecciones. Los observadores estiman en un millón y medio el número de votos habitualmente perdidos a consecuencia de las campañas anarquistas, las cuales, en febrero de 1936 se lanzaron en favor de las listas del Frente Popular para obtener la liberación de los presos políticos de 1934.

Resultados de las elecciones

Fueron estos votos los que, sin duda, inclinaron la balanza. El 16 de febrero, el Frente Popular venció con 4.206.156 votos contra 3.783.601 de la coalición de las derechas y 681.447 del centro, cifras que, después de las operaciones de revisión rápidamente llevadas a cabo en la Cámara se convirtieron, respectivamente, en 4.838.449, 3.996.931 y 449.320, de 11 millones de inscritos y 9.5 millones de votantes.

El Frente Popular obtuvo, por tanto, una mayoría muy pequeña que sin embargo se tradujo en las Cortes en una aplastante superioridad numérica de los diputados elegidos bajo su patrocinio: fueron 277 contra 132 de la derecha y 32 del centro. La ley electoral que favorecía a la mayoría operó aquí en favor de la izquierda: la derecha que había obtenido más votos que en 1933 obtuvo un aumento menor que los partidos coaligados en el Frente Popular, y perdió más de la mitad de los asientos en el Congreso. En una competencia tan apretada era fatal que surgieran ásperas disputas en lo tocante a las presiones y a las falsificaciones. Ninguno de los partidos se privó de ejercerlas. Es indudable que muchos burgueses tuvieron que vacilar al votar en algunos barrios populares, pero se comprobó que muchas aldeas votaron por la derecha bajo la amenaza directa de la policía o con la intimidación de perder el empleo que les hicieron los grandes propietarios. El historiador no puede sacar ninguna conclusión complementaria de estas querellas.

Lo importante, cualquiera que sea la estimación que se haga de la validez de estas elecciones, es que transformaron profundamente la fisonomía de las Cortes y más profundamente todavía la atmósfera política del país.

Contrariamente a las esperanzas del Presidente de la República, las elecciones fueron una resonante derrota para el centro y el centro-derecha. Políticos como Lerroux y Cambó no fueron reelegidos: los radicales de Lerroux no obtuvieron más que seis escaños y el grupo del centro más importante, el que dirigía Portela Valladares, el saliente Presidente del Consejo, no contó más que con 14 diputados. La C.E.D.A. formaba todavía un bloque sólido con 86 elegidos, a los que casi siempre se sumarían los 13 agrarios. Goicoechea había sido derrotado y fue Calvo Sotelo el que se convirtió en portavoz de la extrema derecha, en la que la Renovación Española contaba solamente con 11 diputados.

No hay manera de conocer la parte de votos que correspondió a cada partido en el total de los que favorecieron a las listas del Frente Popular. El número de los elegidos de estas listas dependió simplemente, en efecto, no de los votos que se lanzaron en favor de las listas de la coalición, sino de los acuerdos concertados entre las organizaciones cuando se formaron las listas. La Izquierda Republicana de Azaña tuvo 84 diputados, la Unión Republicana de Martínez Barrio 37, la Esquerra Catalana de Companys 38. Los socialistas tuvieron 90 diputados, los comunistas 16, el P.O.U.M. 1, su secretario general Maurín, el Partido Sindicalista 1, el viejo Pestaña.

Los días siguientes a la elección: el gobierno

Los días siguientes a las elecciones estuvieron señalados por diversos movimientos: entusiasmo, pero temor también entre los vencedores; pánico o rebelión entre los vencidos.

Se palparon los más diversos rumores: en las derechas se hablaba de un levantamiento armado de los "marxistas" o de los anarquistas, y en las izquierdas se denunciaban los preparativos del golpe de Estado militar. Nada de esto carecía de fundamento: la agitación popular parecía confirmar lo que decían las derechas y Portela Valladares reveló más tarde que el general Franco le había ofrecido el apoyo del ejército para anular las elecciones.

En todo caso, Portela Valladares juzgó que la situación era suficientemente delicada como para presentar, sin más tardanza, su dimisión y aconsejar al presidente que llamara, para reemplazarlo, a uno de los dirigentes del Frente Popular. Azaña formó de inmediato el nuevo gobierno, que como se reflejaba en pacto de Frente Popular, estuvo compuesto exclusivamente de republicanos burgueses, y al que los partidos obreros apoyaron sin formar parte de él. Así se concretaba la táctica del Frente Popular por los dirigentes estalinistas y reformistas del PSOE: Dejar hacer a la "burguesía progresista republicana" para no atemorizar a las capas medias.

Una situación revolucionaria

Desde el día siguiente de las elecciones, poderosas manifestaciones de masas, sin esperar la firma del decreto de amnistía, abrieron las cárceles y liberaron a los obreros detenidos desde 1934. Así, el 17 de febrero, se observó la apertura de la cárcel de Valencia por manifestantes de la C.N.T. y la liberación de los condenados de 1934, varios centenares de "liberaciones" en Oviedo mismo y muchos miles en toda España. Dos días después comenzaban en todo el país huelgas para la reincorporación inmediata de los condenados o de los despedidos, por el pago de su salario a todos los obreros detenidos durante el bienio negro, por aumentos de salarios, y el despido de tal o cual agente patronal, y por la mejora de las condiciones de trabajo. A estas huelgas corporativas se añadieron huelgas más políticas, huelgas de solidaridad, huelgas generales, locales o regionales. Algunos conflictos se eternizaron y provocaron otros. Los patronos replicaron con el cierre de las empresas y la lucha se encontró.

En el campo, la situación era verdaderamente revolucionaria. El Frente Popular había hablado de reforma agraria a campesinos ávidos de tierra: como escribe el embajador Bowers: *"los campesinos, seres sencillos y rudos, habían creído que victoria en las elecciones bastaba para que eso fuera una cosa hecha"*. Desde fines de febrero, en las

provincias de Badajoz y Cáceres, y después a lo largo de los meses siguientes en toda Extremadura, en Andalucía, Castilla, y aun en Navarra, se multiplicaron las ocupaciones. Las tierras de Alcalá Zamora fueron ocupadas en abril, lo mismo que las del duque de Albuquerque. Los campesinos se instalaron en las tierras de los grandes propietarios y comenzaron a cultivarlas por cuenta propia. Muy a menudo se produjeron incidentes sangrientos entre campesinos y guardias civiles. Este movimiento culminó el 25 de marzo con la ocupación de fincas realizada al mismo tiempo por ochenta mil campesinos en las provincias de Badajoz y Cáceres...

División en el PSOE

Cada vez más, Largo Caballero aparecía como el hombre de la revolución que iba en ascenso. Según sus palabras, él y sus partidarios aguardaban a que los republicanos diesen pruebas de su incapacidad para resolver los problemas de España, para tomar el poder. Pero ¿cómo lo habrían de tomar? Esto es lo que no está muy claro.

Fue su rival socialista, Prieto, el que lanzó contra Largo Caballero las acusaciones más graves. Para él, huelgas, manifestaciones, desórdenes, reivindicaciones excesivas, constituían un "revolucionarismo infantil" que le hacía el juego al fascismo al espantar a las clases medias. Mientras que el primero de mayo, en Madrid, Largo Caballero jugaba a jefe de la revolución, Prieto pronunciaba en Cuenca un resonante discurso. A la anarquía generadora del fascismo que, según él, estaba a punto de preparar su rival, opuso lo que llamaba la "revolución constructiva". La primera tarea razonable y posible a sus ojos, era la constitución de un gobierno de coalición: al lado de los republicanos, los socialistas tendrían como misión "hacer indestructible el poder de las clases laboriosas". Pero este programa de reformas progresivas y prudentes en el marco del capitalismo encontró poco eco en las masas a las que la fiebre revolucionaria empujaba día tras día a nuevas acciones

El terrorismo contrarrevolucionario de la Falange

En 1932, José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, fundó la "*Falange Española*", transformada en "*Falange Española y de las J.O.N.S.*", en 1934, en virtud de su fusión con las "juntas ofensivas nacional-sindicalistas", que fue un grupo minúsculo y sin influencia real hasta los días siguientes a las elecciones de febrero de 1936.

El programa de veintiséis puntos de la Falange era característicamente fascista: reprochaba a los republicanos su timidez ante la oligarquía, proponía la nacionalización de los bancos y de los ferrocarriles, una reforma agraria radical, pero, al mismo tiempo, denunciaba la doctrina marxista, corruptora y disolvente, de la lucha de clases, para oponerle el ideal de "la armonía de las clases y de las profesiones en un destino único", el de la Patria y el de Europa.

Hasta 1936, la oligarquía española se mostró reticente para con este movimiento de aire plebeyo, y confió sobre todo en Gil Robles para obtener una victoria dentro del marco legal de las elecciones. Quedó como fuerza de reserva de la burguesía hasta la victoria del Frente Popular.

Desde febrero, a impulso de la Falange, se desarrolló una acción sistemáticamente contrarrevolucionaria. Fue en la calle, como en Alemania y en Italia, donde la Falange revistió su carácter fascista con mayor claridad: se trataba de quebrantar con la violencia y el terror el movimiento obrero y revolucionario. Los falangistas se lanzaron a la lucha armada al día siguiente de las elecciones. En Madrid, los coches cargados de escuadristas provistos de armas automáticas sembraban el terror en los barrios obreros. En Andalucía, los pistoleros a sueldo cobraban día tras día nuevas víctimas. El objetivo era doble: se trataba, al mismo tiempo, de eliminar al adversario de clase, militante o periodista "marxista" o "anarquista", o a aquel que les ayudaba, juez o policía, y se trataba de crear una atmósfera tal que los amigos del orden, finalmente, no viesen otra solución más que la de volver a poner la suerte del país en manos de una dictadura. Los progresos de la Falange fueron relampagueantes a partir de febrero: la ola de los descontentos de derecha engrosó

sus filas. Hacia ella se dirigieron los jóvenes del partido de Gil Robles, las *Juventudes de Acción Popular* que dirigía en aquel momento Ramón Serrano Suñer.

La preparación del levantamiento militar

A pesar de su importancia creciente en los meses que siguieron a las elecciones, y en la marcha hacia la guerra civil, la Falange no puede ser considerada como un factor determinante. La oligarquía, los tradicionalistas, los monárquicos, los conservadores esperaban del ejército su salvación. Era su acción la que temían, día a día, republicanos y revolucionarios. Se preparaba, prácticamente a la vista de todos y con conocimiento de todos, para intervenir y reglar definitivamente la suerte del movimiento revolucionario. Para los jefes del ejército, en efecto, era evidente que la victoria del Frente Popular había desencadenado una crisis revolucionaria a la que no eran capaces de imponerse los políticos republicanos moderados de la izquierda.

Desde el 17 de febrero, Calvo Sotelo y después, como hemos visto, el propio Franco, incitaron al presidente de la República a que tomara la iniciativa de un golpe de fuerza anulando las elecciones. Después de la negativa de Portela Valladares, el 20 de febrero, a iniciativa de los jefes de la *Unión Militar Española* se realizaron en toda España conferencias entre los jefes militares y los dirigentes políticos de los partidos de la derecha. La conclusión a que se llegó fue la de que no era todavía el momento de una acción porque las tropas, conquistadas por el entusiasmo popular, no eran de ninguna manera seguras.

El gobierno, informado de lo que sucedía, no tomó más medidas que el traslado de los jefes de la conspiración: Franco a Canarias, Mola a Navarra... Italia facilitó a los generales armas y dinero. Se mantuvieron estrechos contactos con los dirigentes políticos de la derecha. Al parecer, Calvo Sotelo fue una de las cabezas de la conspiración. Pero los militares confiaban en atraer a su bando a Gil Robles y a sus amigos, que se resistían.

Finalmente, y tras muchos cambios de planes, el 16 de junio, Mola avisó a José Antonio Primo de Rivera que la sublevación se había fijado para los días 18, 19 y 20 de julio. Estas fechas ya no se aplazaron.

La actitud del gobierno en el curso de estos meses decisivos ha sido objeto de numerosas críticas. El gobierno, indiscutiblemente, estuvo al corriente de lo que tramaban los jefes militares. Tomó muy pocas medidas y las que adoptó fueron especialmente torpes. La timidez de las medidas tomadas contra los conspiradores, la declarada voluntad del gobierno de cerrar los ojos, no tuvieron más resultado, sin duda, que sumar al golpe de fuerza a muchos oficiales vacilantes. A imagen y semejanza de los grupos políticos que representaban y de las fuerzas sociales que encarnaban, Casares Quiroga, lo mismo que Azaña, vacilaron y tergiversaron porque habían quedado cogidos entre dos fuegos.

La revolución obrera y campesina amenazaba a la República parlamentaria precisamente por lo mismo que la reacción militar y fascista. La lucha armada entre los dos bandos, la guerra civil, señalarla el final, el fracaso de la política de los Azaña y los Casares Quiroga. Esa fue la razón por la cual trataron de evitarla, asestando golpes, sucesivamente, a cada uno de los adversarios y procurando no debilitar demasiado a uno para no tener que entregarse al otro.

Fue el 19 de junio cuando los 70.000 obreros de la construcción de Madrid comenzaron su huelga ilimitada después de una asamblea general organizada en común por las dos centrales sindicales. Pero los patronos hicieron resistencia. La huelga se endureció. La policía era impotente ante el número, a pesar de los encuentros cotidianos con los piquetes de huelga. A los falangistas les pareció favorable la ocasión para aplicar a los albañiles su método de violencia contrarrevolucionaria. Atacaron primero a obreros aislados, y luego a los grupos que se hallaban delante de los lugares de trabajo ocupados. El comité de defensa de la C.N.T. del Centro tomó entonces en sus manos la dirección de la huelga y la organización de la defensa armada de los obreros.

Se comprende que, a estas condiciones particulares, aun frente al peligro creciente del levantamiento militar, el gobierno se haya negado a distribuir las armas, como le pedía Largo Caballero. "Armar al pueblo", a ojos de los dirigentes, sería en primer lugar armar a

los albañiles de la C.N.T. madrileña, armar a la vanguardia revolucionaria, fuerza que le producía más temor todavía que la de los generales reaccionarios.

VI. LEVANTAMIENTO MILITAR Y REVOLUCIÓN OBRERA

El levantamiento militar

El 17 de julio la Guarnición de Marruecos, empezando por Ceuta y Melilla, comienza el levantamiento, y el resto de las guarniciones militares telegrafiadas por Franco preparan todos los operativos.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Un operador de radio leal a la república captó todas las comunicaciones de Franco e inmediatamente las transmitió a Casares Quiroga y Azaña, que ya tenían noticias de los combates en Melilla y Ceuta, pero no hicieron nada. Su respuesta a los gobernadores civiles fue tranquilizadora: ¡No pasa nada!: *"El gobierno declara que el movimiento se limita exclusivamente a ciertas ciudades de Marruecos y que nadie en la península se ha sumado a tan absurda maniobra"*. El gobierno se niega en redondo a tomar ninguna medida para evitar la extensión del levantamiento. Los ministros republicanos avisados de los preparativos militares, dejan hacer, durante 48 horas, a los insurrectos, sin movilizar las fuerzas leales del ejército, ni impartir una sola orden. El levantamiento se extiende a Sevilla, Algeciras, La Línea, Écija, Cádiz. En Pamplona, Mola se hace rápidamente con el control de la ciudad. Burgos y Valladolid caen pronto bajo el control de los militares fascistas. ¿Qué dice el gobierno? *"Quien facilite armas sin mi consentimiento será fusilado"*, proclama Casares Quiroga, mano dura contra las masas obreras que el 18 se echan a la calle para impedir el triunfo de la contrarrevolución, y tolerancia para los fascistas.

Lo que ocurrió, narrado por Tuñón de Lara, es un ejemplo vivo de cómo "luchaba" la "progresista burguesía republicana" contra el fascismo: *"...Azaña piensa entonces en la solución de compromiso: un gobierno moderado presidido por Martínez Barrio, con participación de Sánchez Román, y dos amigos suyos del Partido Nacional Republicano, que se habían negado a entrar en el Frente Popular... Durante unas horas está formado este gobierno; su ministro de guerra Miaja, telefona a Mola, que responde que se ha sublevado..."* En las calles de Madrid, una multitud cada vez más numerosa, que reclama armas, prorrumpe en gritos de ¡traición!, al correrse la noticia de que Martínez Barrio va a formar un gobierno que pacte con los sublevados. En este momento se sitúa la controvertida conversación entre Martínez Barrio y Mola. Es casi imposible saber los ofrecimientos que hizo el nombrado jefe del gobierno, conocida es la respuesta que se atribuye a Mola: *"No nos es posible señor Martínez Barrio, ustedes tienen sus armas, y yo tengo las mías. Si yo acordara con ustedes una transacción habríamos los dos traicionado a nuestros ideales, a nuestros hombres, mereceríamos antes que nos arrestasen"*.

La revolución obrera se desencadena

Mientras el gobierno republicano vacilaba o intentaba una solución de compromiso con los insurrectos, las masas obreras se lanzaron a la acción. En todas partes desenterraban las armas ocultas desde el año 34 o se procuraban otras nuevas, se lanzaban a la huelga, asaltaban o sitiaban los cuarteles.

El nuevo gobierno, presidido por Giral, se vio obligado por la presión de centenares de miles de manifestantes y de las organizaciones obreras a dar el paso decisivo: decretó la disolución del ejército y la distribución de las armas a las milicias obreras formadas por los partidos y los sindicatos. Firmó, al mismo tiempo, lo que pareció ser el decreto de muerte de la "legalidad republicana", pero en aquella fecha no era más que un reconocimiento del hecho consumado: ahora era la fuerza, la de los generales y sus tropas, la de los obreros armados, la que habría de decidir el porvenir de España. La "legalidad" se esfumó ante el choque de las fuerzas sociales.

El Movimiento venció, muy rápidamente, en aquellos lugares en que los insurgentes se adelantaron a la organización de sus adversarios. Venció también, con un poco de retraso, cada vez que los dirigentes obreros se dejaron engañar por las declaraciones de lealtad de los oficiales. En esta medida no es imprudente afirmar que fue menos en la acción de los rebeldes que en la reacción de los obreros, de los partidos y de los sindicatos, y de su capacidad de organizarse militarmente, en una palabra, en su perspectiva política misma, donde residió la clave del resultado de los primeros combates. En efecto, cada vez que las organizaciones obreras se dejaron paralizar por el cuidado de respetar la legalidad republicana, cada vez que sus dirigentes se contentaron con la palabra dada por los oficiales, éstos últimos vencieron. Por el contrario, el Movimiento fracasó cada vez que los trabajadores tuvieron oportunidad de armarse, cada vez que se lanzaron inmediatamente a la destrucción del ejército en cuanto tal, independientemente de las tomas de posición de sus jefes o de la actitud de los poderes públicos "legítimos".

En Barcelona, al igual que Azaña en Madrid, Companys, presidente de la Generalitat, se negó a distribuir armas entre los trabajadores. Militantes de la CNT y del POUM asaltaron armerías, tiendas de caza, obras en construcción en busca de dinamita, requisaron las armas que los fascistas ocultaban en sus casas, así como todos los automóviles que pudieron encontrar. Con este escaso material se enfrentaron en una lucha desigual desde el punto de vista militar a las tropas que los fascistas movilizaron. Sin embargo, su arrojo, su moral, su confianza, desmoralizó a los soldados, muchos de los cuales abandonaron su posición para pasarse al bando del pueblo. A pesar de los centenares de obreros que murieron, en la tarde del 19 de julio cayó preso el general Goded. El pueblo en armas había derrotado la sublevación en toda Catalunya, ante la pasividad del gobierno de la Generalitat que quedó suspendido en el vacío, sin ninguna base segura en la que apoyarse.

Una situación parecida se vivió en Madrid, donde miles de obreros y jóvenes reagrupados el mismo 18 de julio comenzaron la tarea del armamento. Comunistas, socialistas, anarquistas levantaron barricadas en las zonas claves de la ciudad, requisaron y asaltaron los depósitos de armas que pudieron y se arrojaron muchos de ellos con las manos vacías a la conquista del Cuartel de la Montaña que pasó después de horas de intenso combate a manos de los obreros.

La misma actitud de los obreros se repitió en cientos de pueblos y ciudades importantes del país: Valencia, Gijón, Málaga, Santander, Bilbao, Badajoz, Cáceres... En otras, fundamentalmente Andalucía, los fascistas tuvieron que emplearse a fondo en una represión salvaje contra los obreros en huelga que con las armas en la mano intentaban abortar la sedición. La clase obrera española volvió a escribir una página heroica de su historia: lo que pretendía ser un triunfo militar aplastante de la contrarrevolución, se transformó en el inicio de la revolución socialista de las masas trabajadoras. El levantamiento fascista encontró con poderosas dificultades en el ejército, donde los marineros, tradicionalmente provenientes de las filas de obreros más cualificados y vinculados a las organizaciones de clase, salvaron la mayor parte de la flota, amotinándose y deteniendo a los oficiales insurrectos. Eligieron en muchos barcos Comités de marineros para coordinar la acción con los comités obreros surgidos en la península.

El levantamiento armado de los trabajadores fue la señal inequívoca de un cambio dramático en la situación. En centenares de grandes y pequeñas ciudades, de pueblos, el poder real ya no se encontraba en los gobiernos civiles o ayuntamientos. Las instituciones "legales" del Estado republicano habían dejado de funcionar, y en la práctica el único poder real existente era el de los obreros en armas y sus organizaciones, que inmediatamente empezaron a formar y desarrollar sus comités y sus milicias para establecer la defensa armada de sus ciudades y la ofensiva militar contra el levantamiento fascista. Azaña y el gobierno de quedaron literalmente arrinconados en el limbo de los justos, incapaces de reaccionar ante la enérgica actuación de las masas y obligados a sancionar lo que en la práctica eran ya hechos consumados.

En efecto, con el fracaso de su golpe militar, los militares habían desencadenado precisamente aquello que querían evitar: una revolución obrera.

DOBLE PODER EN LA ESPAÑA REPUBLICANA

Allí donde la insurrección fue aplastada, no resultó la única vencida. Entre su ejército rebelado y las masas populares armadas, el Estado republicano había saltado en pedazos. El poder se había literalmente desmoronado y, en todos los lugares en que los militares habían sido aplastados había pasado al pueblo, donde grupos armados resolvían sumariamente las tareas más urgentes: la lucha contra los últimos focos de la insurrección, la depuración de la retaguardia, la subsistencia. Cierto es que el gobierno republicano existía, y que ninguna autoridad revolucionaria se levantaba como rival declarado de la suya en esa zona que los corresponsales de izquierda bautizaron muy rápidamente con el nombre de "zona leal". Pero la autoridad del gabinete del doctor Giral no rebasaba casi los alrededores de Madrid, ciudad en la que sobrevivía menos en virtud de su acción y de su prestigio propios que gracias a los de las organizaciones obreras.

Sin embargo, poco a poco, entre las gentes que se habían lanzado a la calle y el gobierno fueron apareciendo órganos del poder nuevo que disfrutaban de una autoridad real y se apoyaban, a menudo, tanto en el gobierno como en la fuerza popular. Estos fueron los innumerables Comités locales y, en la escala de las regiones y de las provincias, verdaderos gobiernos. En ellos residía el nuevo poder, el poder revolucionario que se organizaba apresuradamente para hacer frente a las enormes tareas inmediatas y remotas, la realización de la guerra y la reanudación de la producción en plena revolución social.

España vivía la revolución que los generales habían querido prevenir, pero que, en definitiva, habían provocado. Lo que había sido una reacción defensiva al principio se había convertido en fuerza ofensiva y agresiva. Reacción espontánea con la que los trabajadores habían tomado en sus manos su propia defensa, y, con ello, se habían encargado de su propio destino, habían dado nacimiento a un poder nuevo.

Barcelona era el símbolo de esta situación revolucionaria. Para el excelente observador que es Franz Borkenau fue el *"bastión de la España soviética"* (en el sentido originario del término) de la España de los consejos y de los comités obreros. En efecto, no solamente ofrecía el aspecto de una ciudad poblada exclusivamente de obreros, sino de una ciudad en la que los obreros tenían el poder.

El poder de los grupos armados

En la zona "republicana", prácticamente no había ya fuerzas de mantenimiento del orden, no había cuerpo de policía. Los miembros de las mismas se habían pasado a las filas de los sublevados o fundido en las de los combatientes.

Los obreros en armas se consagraron en primer lugar a consolidar su victoria y reprimir a los facciosos ocultos. Hubo un movimiento espontáneo, un verdadero "terrorismo de masas" tanto por el número de los verdugos como por el de las víctimas. Reflejo provocado por el miedo, reacción de defensa ante el peligro, análoga a la que culminó, durante la Revolución Francesa, en las matanzas de septiembre, correspondió a las exigencias lo mismo que a las fatalidades de la guerra revolucionaria.

El poder de los comités

El sindicalista francés Robert Louzon describió de la siguiente manera el espectáculo que se le ofrecía, a comienzos de agosto, al viajero llegado de Francia:

"En cuanto pasáis la frontera, os detienen hombres armados. ¿Qué son estos hombres? Son obreros. Son milicianos, es decir, obreros vestidos con sus ropas ordinarias, pero armados -con fusiles o con revólveres- y que llevan en el brazo la insignia de su función o del poder que representan... Son ellos los que... decidirán... no dejaros entrar o bien consultar al comité".

En todas las ciudades y en la mayoría de los pueblos de España operaban, con nombres diversos, comités semejantes: comités populares de guerra, de defensa, comités ejecutivos, revolucionarios o antifascistas, comités obreros, comités de salud pública... Todos fueron constituidos en el calor de la acción, para dirigir la réplica popular al golpe de Estado militar. El modo en que fueron designados varió infinitamente. En los pueblos, en las fábricas o en los talleres se les eligió, por lo menos sumariamente, en el curso de una asamblea general. En todo caso, se preocuparon siempre porque estuviesen representados partidos y sindicatos, inclusive allí donde no existían antes de la revolución, pues el comité representaba, al mismo tiempo, al conjunto de los trabajadores y a la totalidad de sus organizaciones.

Todos los comités, cualesquiera que fuesen sus diferencias de nombre, de origen, de composición, presentaban un rasgo común fundamental. Todos, en los días que siguieron a la sublevación, se apoderaron localmente de todo el poder, atribuyéndose funciones lo mismo legislativas que ejecutivas, decidiendo soberanamente en su región, no solamente en lo tocante a los problemas inmediatos, como el mantenimiento del orden y la regulación de los precios, sino también las tareas revolucionarias de la hora, socialización o sindicalización de las empresas industriales, expropiación de los bienes del clero, de los "facciosos" o, más simplemente, de los grandes propietarios, distribución entre los aparceros o explotación colectiva de las tierras, confiscación de las cuentas bancarias, municipalización del alojamiento, organización de la información, escrita o hablada, así como de la enseñanza y de la asistencia social.

Para decirlo con la feliz expresión de G. Munis, por doquier se instalaron "*comités-gobierno*" cuya autoridad se apoyaba en la fuerza de los obreros armados y a los cuales, de buen o de mal grado, obedecían los restos de los cuerpos especializados del antiguo Estado.

Lo que era verdad a escala local, ya no lo era totalmente a escala regional, donde se enfrentaban o coexistían poderes de origen diverso.

El Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña

El 21 de julio, al terminar los combates en Barcelona, se llamó al palacio de la Generalidad a los revolucionarios, dueños de las calles. El presidente Companys los felicitó por su victoria: *"Sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque vosotros solos habéis vencido a los soldados fascistas... Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no tenéis necesidad de mí, si no me queréis como presidente, decididlo ahora y me convertiré en un soldado más de la lucha antifascista. Si, por el contrario, me creéis cuando os digo que no abandonaré este cargo hasta que haya muerto a manos del fascismo victorioso, entonces quizás, con mis camaradas de partido, mi nombre y mi prestigio, os podrá servir..."*.

El poder real era el de los obreros armados y el de los comités de las organizaciones en las calles de Barcelona, los comités-gobiernos en los pueblos y en las aldeas. Los socialistas y los comunistas, por boca de Comorera, propusieron al Presidente la constitución de "Milicias de la Generalidad" que disputarían las calles a los hombres de la C.N.T. y del P.O.U.M. Companys no les hizo caso: el combate le parecía demasiado desigual, su persona, en aquel día, su "nombre y su prestigio", como había dicho, eran de hecho todo lo que subsistía en Cataluña, del Estado republicano

Ahora bien, los dirigentes de la C.N.T. aceptaron proseguir la colaboración. Santillán comentó su decisión con las siguientes palabras: *"Pudimos quedarnos solos, imponer nuestra voluntad absoluta, declarar caduca la Generalidad y colocar en su lugar al verdadero poder del pueblo, pero no creíamos en la dictadura cuando se ejercía contra nosotros, y no la deseábamos cuando podíamos ejercerla nosotros mismos a expensas de otros. La Generalidad habría de quedar en su lugar con el presidente Companys a la cabeza, y las fuerzas populares se organizarían en milicias para continuar la lucha por la liberación de España. Así nació el Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña, en el que hicimos entrar a todos los sectores políticos, liberales y obreros"*.

En el salón vecino del despacho presidencial, los delegados de las organizaciones se reunieron y constituyeron allí mismo al Comité Central, del que entraron a formar parte

delegados de los moderados, tres de la Esquerra, uno de los rabassaires y uno de la Acció Catalana. El P.S.U.C., en vísperas de constituirse oficialmente, tenía un representante. El P.O.U.M., igualmente, un representante, la F.A.I. estaba representada por Santillán y Aurelio Fernández, la C.N.T. por García Oliver, Asens y Durruti, al que sustituyó, unos días después, Marcos Alcón. La U.G.T., diez veces menos numerosa, tenía también tres representantes.

El Comité Central era, por las circunstancias de su nacimiento, un organismo híbrido. En realidad, salvo en Barcelona, donde estaba en contacto con las direcciones de los partidos y de los sindicatos, su base en el país estaba constituida por los "comités-gobierno", los poderes locales revolucionarios de los que era, al mismo tiempo, la expresión suprema. Y esto es lo que señala Santillán muy claramente cuando escribe: *"El Comité de las milicias fue reconocido como el único poder efectivo en Cataluña. El gobierno de la Generalidad seguía existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo no obedecía más que al poder que se había constituido en virtud de la victoria y de la revolución, porque la victoria del pueblo era la revolución económica y social"*.

Organismo político de poder, a la vez legislativo y ejecutivo, el Comité se organizó creando comisiones de trabajo y comités ejecutivos especializados que bien pronto desempeñaron el papel de verdaderos ministerios.

La situación distaba mucho de ser igualmente clara en Valencia, hacia la misma época; mientras que la guarnición y los obreros en huelga continuaban observándose, la junta delegada, que dirigía Martínez Barrio, oponía a la autoridad insurrectiva la autoridad legal del gobierno republicano, que quería poner fin al sitio de los cuarteles, que se volviera al trabajo y que retornara la legalidad. En realidad, tres regimientos se habían sublevado, pero los soldados se amotinaron contra los oficiales, mientras que los milicianos se lanzaban al asalto. La guarnición fue desarmada, los oficiales sospechosos fueron detenidos y juzgados, y se licenció a los soldados; las milicias se apropiaron de las armas. El gobierno capituló entonces: la junta delegada fue disuelta, la autoridad del Comité Ejecutivo popular fue reconocida. Desde entonces, el Comité Ejecutivo popular, que extendió rápidamente su autoridad a toda la provincia, desempeñó un papel por todos conceptos semejante al del Comité Central en Cataluña

Otros gobiernos revolucionarios

Otros organismos tomaron el poder en sus manos en las demás regiones de España. En Asturias, en las aldeas y en las poblaciones mineras, estaba en manos de los Comités de Obreros y Campesinos

Fue en Aragón donde se constituyó, en último lugar, el poder revolucionario regional más original. Allí, los jefes republicanos, como vimos, se habían pasado al bando de los militares sublevados. La reconquista de gran parte del campo aragonés por las milicias catalanas, fue acompañada, en cada pueblo, de medidas revolucionarias radicales. Mientras que las autoridades y los guardias civiles habían huido o habían sido asesinados, la asamblea general del pueblo juzgó a los "fascistas" prisioneros y eligió al "Comité del Pueblo" que habría de dirigirlo, apoyado en las milicias armadas. A comienzos de octubre, cerca del cuartel general de Durruti, en Bujaraloz, se reunió un congreso de los comités, de las ciudades y de los pueblos. Eligió un "Consejo de Defensa" totalmente compuesto por militantes de la C.N.T. y presidido por Joaquín Ascaso, que se instaló en Fraga. El Consejo de Defensa, de acuerdo con los dirigentes de las columnas anarquistas, ejerció sobre Aragón una autoridad no compartida: comité supremo, que representaba al conjunto de los comités, fue en España revolucionaria el único organismo regional resultante de la federación de los comités locales y que tomaba de ellos su autoridad.

El esbozo de un aparato de estado nuevo

Durante los primeros días, la mayoría de los comités funcionó sin especialización ni división de atribuciones. El Comité o inclusive la Asamblea del Pueblo fueron, a la vez, organismo de deliberación, tribunal y consejo de guerra. Obreros y campesinos armados montaban guardia, patrullaban, vigilaban, requisaban, detenían, ejecutaban. Sin embargo,

muy rápidamente, por lo menos en las grandes ciudades, aparecieron cuerpos especializados.

Eran, en primer lugar, unidades encargadas de las funciones de policía. En Málaga, fue el comité de vigilancia; en otras partes, fueron las comisiones de orden público, los consejos de seguridad los que, con nombres diversos aseguraron la organización del terror en la retaguardia.

Paralelamente, unidades de las milicias, que pronto se conocieron con el nombre de "Milicias de la Retaguardia" se especializaron en las funciones de policía propiamente dichas.

La misma evolución se produjo en el campo de la justicia. Tribunales revolucionarios de clase diferente aparecieron a principios de agosto en Valencia, Castellón y Lérida: jueces, procuradores, presidente del Tribunal eran militantes designados por los partidos y los sindicatos. Sus decisiones eran severas y el procedimiento sumario, pero los derechos de la defensa se respetaban generalmente.

Las milicias

En el marco de la guerra, la construcción de un nuevo ejército fue la tarea más urgente. Fue esta necesidad, en todo caso, la que dio nacimiento a los nuevos organismos del poder.

Las milicias nacieron por iniciativa de los partidos y de los sindicatos y, en sus orígenes, no fueron sino estas organizaciones en armas

En Barcelona, fue el Comité Central el que organizó desde el 24 de julio la primera columna, de 3.000 hombres, mandada por Durruti, auxiliado por el comandante Pérez Farrás. Los jefes de las primeras columnas eran militantes políticos y sindicalistas. Eran raros los que tenían una formación militar. Algunos militares de carrera los respaldaban. Los suboficiales desempeñaron un papel más importante en el encuadramiento de las milicias: después de Pérez Farrás, el antiguo sargento Manzana fue el cerebro militar de la columna Durruti. Claro es, los raros antifascistas extranjeros que se presentaron como técnicos fueron recibidos con los brazos abiertos.

La masa de los milicianos ignoraba los rudimentos del manejo de armas, y las reglas más elementales de protección. Fue por falta de armas, cierto es, pero también por falta de jefes por lo que se renunció a la movilización obrera: no se podía ni equipar, ni instruir, ni encuadrar a los reclutas. Por lo demás, las milicias tenían fisonomías diferentes según la ideología que animaba a sus creadores: las columnas anarquistas eran mandadas por "delegados políticos" asistidos por "técnicos militares". En las columnas socialistas, de la U.G.T., del P.O.U.M., del P.S.U.C., y en el Quinto regimiento los que mandaban eran los oficiales, auxiliados por "comisarios políticos".

En todas las columnas, oficiales y soldados recibían un sueldo uniforme de 10 pesetas al día. No se exigía a los hombres ninguna señal exterior de respeto, y no había insignias de grado.

Así, poco a poco, se constituyó una fuerza armada cuya eficacia en los combates callejeros, o cuyo entusiasmo, eran innegables. Fue verdaderamente la realización de la vieja consigna del "pueblo en armas" y, por el momento, parecía escapar completamente a la autoridad gubernamental

¿Qué quedaba del poder del Estado?

En efecto, el gobierno subsistía. El presidente Giral, después de haberse resignado a armar a los obreros, luchó, dondequiera que conservó un ápice de autoridad, porque se respetaran las formas y la legalidad, y para que se preservara, ya que no un aparato de Estado -que estaba muy dañado-, sí por lo menos el principio mismo de su propia legitimidad.

El gobierno existía, sin embargo, y en primer lugar, ante el extranjero, para el cual se esforzaba en encarnar la legalidad. El gobierno manifestaba también su existencia por la radio, y parecía obstinarse curiosamente en un sueño de conciliación con una parte de los generales sublevados. El 29 de julio, en nombre de la República, Martínez Barrio lanzó

todavía este llamado solemne: *"Que los que nunca debieron tomar las armas las rindan, restableciendo así la vida normal en el país"*.

En Madrid, algunos días después de la revolución, el gobierno logró quitarle a las milicias el dominio de la calle y dárselo a su policía: el pase gubernamental sustituyó a la cartilla sindical y a los salvoconductos de los comités. La policía había sido diezmada, pero se esforzaban en reconstituirla.

Todas estas autoridades policíacas coexistían, claro es, con el *Comité Provincial de Investigaciones* formado a comienzos de agosto con representantes de todos los partidos y con lo que comenzó a llamarse "checas" de los partidos, pero, de cualquier modo, eran un apreciable instrumento de acción gubernamental.

La situación era más difícil en el dominio de lo militar. El gobierno no tenía ejército. Había logrado recuperar en Madrid algunos miles de fusiles cambiándoselos a los milicianos por revólveres. Eran los partidos y los sindicatos los que organizaban las milicias, lo mismo que el abastecimiento, pero lo hacían en nombre del Estado y en cierta manera, por delegación. El gobierno reconocía a los Consejos y Comités Revolucionarios porque no podía hacer otra cosa, pero no dejó de esforzarse por hacerlos entrar, por lo menos nominalmente, en el marco que era el suyo, el del Estado republicano.

En Cataluña, a pesar de los sólidos apoyos populares de que disfrutaba el partido del presidente Companys, el gobierno de la Generalidad tenía, ciertamente, menos autoridad efectiva todavía ante el Comité Central. Pero sin embargo, seguía "decretando" la formación de las milicias que montaban guardia ante sus despachos, la formación del Comité central, que deseaba convertir solamente en comité de "enlace" y "nombraba" Comisario de la Defensa al elegido por el Comité... ¿Formalidades inútiles? No, porque salvaguardaban el principio de la legalidad republicana. El gobierno no gobernaba, pero seguía existiendo.

Hacia el mismo tiempo, el gobierno de Madrid trató, movilizandando tres quintas que esperaba encuadrar con los oficiales y suboficiales fieles, darse la fuerza armada que sólo él no poseía en su zona. Milicianos y organizaciones obreras, salvo el Partido Comunista, reaccionaron violentamente. La columna Caballero amenazó con marchar sobre Madrid para impedir esta reconstitución del ejército regular. *Claridad* declaró, sin ambages, el 20 de agosto: *"pensar que otro tipo de ejército debe sustituir al que combate realmente y que, en cierta medida, controla su propia acción revolucionaria, es pensar en términos contrarrevolucionarios"*. En Barcelona, 10. 000 conscriptos reunidos al llamado de la C.N.T. votaron una resolución que afirmaba: *"queremos ser milicianos de la libertad, no soldados en uniforme. El ejército ha sido un peligro para el país, sólo las milicias populares protegen las libertades públicas: ¡milicianos, sí!, ¡soldados, nunca!"*

La toma de las fábricas

Tras vencer a los insurrectos, los obreros en armas eran los dueños de las grandes ciudades. De inmediato aplicaron este poder que habían conquistado a la satisfacción de sus reivindicaciones sociales.

En muchos casos, las "conquistas revolucionarias" respondían tanto a exigencias ideológicas como a necesidades prácticas. En las semanas que precedieron a la sublevación, numerosos jefes de empresa habían huido ya, habían puesto a buen recaudo sus capitales y contribuido, de tal manera, a aumentar el marasmo económico. La victoria de la revolución y el terror que se apoderó de los jefes y los funcionarios de las empresas bancarias e industriales paralizaron el funcionamiento de un aparato económico que a menudo se hallaba ya singularmente deteriorado por el comienzo de los combates. Por último, y sobre todo, la revolución de julio de 1936 tenía sus objetivos sociales. Los obreros se apoderaron de las fábricas y los campesinos de los campos porque eso era, a su juicio, el objetivo último, el victorioso remate de su acción revolucionaria. Se necesitaría un libro entero para describir la extraordinaria variedad de las soluciones adoptadas por los obreros españoles para poner fin a la "explotación del hombre por el hombre."

El caso más sencillo era que los obreros se apoderaran de la empresa, la incautación: fue lo que constituyó la norma general en Cataluña, tanto si el patrono había huido, como si no lo había hecho. Pero cuando no hubo incautación, muy pronto se vio la necesidad de

establecer un control, la intervención, en el que participaban conjuntamente delegados de los obreros y representantes oficiales. Estas dos formas jurídicas que parecían, por el momento, constituir la realización concreta de la consigna "la fábrica para los obreros" dieron origen, en la etapa siguiente, a dos formas distintas de empresas colectivizadas o sindicalizadas y de empresas nacionalizadas.

De los servicios públicos se encargaron comités mixtos C.N.T.-U.G.T. Dos días después de la sublevación, funcionaban de nuevo los tranvías; autobuses y metro circulaban normalmente, el gas y la electricidad se suministraban sin interrupción. Después de una demora más larga, los trenes comenzaron a circular normalmente también

La colectivización en los campos

En realidad hubo, durante y después de la revolución, un vasto movimiento de colectivización rural, que es uno de los puntos más ardientemente controvertidos por los testigos y por los actores. Para unos, anarquistas sobre todo, la colectivización fue resultado de un poderoso movimiento de asociación voluntaria provocado por la propaganda y el ejemplo colectivista de sus grupos. Para los otros, comunistas o republicanos, la colectivización agraria, en la mayoría de los casos, fue impuesta por la fuerza, bajo el terror, por las milicias y los grupos de acción anarquista.

La matanza de los grandes propietarios, con que comenzó frecuentemente la colectivización de las tierras -en particular, con Durruti y su columna- no significa que no haya sido voluntaria: creó las condiciones materiales, puesto que de esa manera se ofrecieron tierras, y psicológicas, al mismo tiempo, puesto que abrió posibilidades hasta entonces inexistentes. El terror es uno de los fermentos de la revolución y la discusión en torno a si esta última es voluntaria o forzada casi no tiene sentido. Por último, toda colectivización fue, al mismo tiempo, "voluntaria" y "forzada", cada vez que fue decidida por la mayoría.

En Cataluña, el movimiento tropezó con la hostilidad de los rabassaires. La C.N.T. adoptó una actitud prudente. La conferencia campesina convocada en Barcelona por la C.N.T. invitó a sus militantes a respetar la pequeña propiedad privada.

En Aragón hubo una colectivización masiva. Bajo la dirección de los anarquistas, en efecto, el movimiento de colectivización abarcó a más de tres cuartas partes de las tierras, casi exclusivamente en comunidades afiliadas a la C.N.T.; había más de 450 que agrupaban alrededor de 430.000 campesinos. Los pequeños propietarios podían subsistir, teóricamente, a condición de cultivar por sí mismos sus tierras y de no utilizar mano de obra asalariada. El ganado, para el consumo familiar, siguió siendo propiedad individual.

La colectivización de la tierra contó con la violenta oposición del PCE. El periódico comunista *Frente Rojo* decía: *"bajo el reinado del difunto Consejo de Aragón, ni los ciudadanos ni la propiedad podían contar con la menor garantía. (...). En los consejos municipales se habían instalado fascistas conocidos y jefes falangistas. Con cartillas sindicales, operaban como alcaldes y consejeros municipales, como agentes del orden público, estas personas nacidas del bandidaje y que hacían de él una profesión, un régimen de gobierno"*

Las colectivizaciones y el problema del poder

Las divergencias acerca del alcance y la significación de las colectivizaciones recubren, en realidad, divergencias de orden político.

Todos los que estiman que la España de 1936 no vivía una revolución social sino que debía ser una república democrática y parlamentaria, condenaban "colectivizaciones" y "sindicalizaciones" que constituían, a sus ojos, un peligro para la unidad de frente entre la clase obrera y sus aliados campesinos y pequeños burgueses. El Partido Comunista hizo hincapié en la necesidad de defender al "pequeño industrial" y al "pequeño comerciante". *"Lanzarse a tales ensayos -declaró José Díaz, secretario general del PCE- es absurdo y equivale a volverse cómplice del enemigo"*.

Ahora bien, no bastaba con hacer de las fábricas propiedades colectivas, "bienes sociales" conforme a una expresión frecuente, para poner en pie a una nueva economía y

hacerla funcionar. El problema del crédito quedaba totalmente por resolver. Se necesitaba dinero, divisas para las compras en el extranjero, un fondo de rotación para las empresas colectivizadas. El gobierno de Madrid, detentador del oro, rehusó todo crédito. Por tanto, la mayoría de las empresas colectivizadas tuvieron que vivir de lo que pudieron requisar en ocasión de la revolución. Los Comités-gobierno trataron de socorrerlas al buen tuntún, con medios fortuitos: requisamiento de las cuentas bancarias de los "facciosos", incautación y venta de joyas o de objetos preciosos que habían pertenecido a los rebeldes, a las iglesias, a los conventos. Pero el problema se replanteaba sin cesar. Los bancos, el crédito y el comercio exterior escapaban, gracias al gobierno, al sector colectivizado. Y el gobierno organizaba desde ellos un boicot al desarrollo de las industrias colectivizadas.

Lo mismo ocurría con las colectivizaciones en el campo. Con la supresión de hecho de las rentas feudales, el problema de la tierra se reducía en España al de la confiscación de las tierras de los grandes propietarios, "facciosos" o no. En este sentido, le faltó a la revolución española lo que fue para la revolución rusa el "Decreto sobre la tierra". El tiempo que pasaba no tardó en subrayar esta evidencia: el campesino se había apoderado de las tierras, pero, después del primer momento de entusiasmo, no estaba seguro ni de poseerlas efectivamente, ni de haber salido ganando.

Hacía falta realizar una centralización de la actividad económica, incluyendo el crédito. Y sobre todo, las conquistas revolucionarias tenían que ser consolidadas. Los problemas económicos no podían resolverse independientemente de los problemas políticos. Los organismos de control que se habían creado se reducían a cumplir funciones parasitarias.

Seis meses después de iniciada la revolución, la economía española se debatía en terribles dificultades. Entonces se oía a muchos acusar a la "anarquía" de las "colectivizaciones", y de las "sindicalizaciones", denunciar la "incompetencia" de los nuevos dirigentes que se habían improvisado. Y en todas estas requisitorias no todo era falso.

La gran debilidad de las conquistas revolucionarias de los trabajadores españoles estriba, más aún que en su improvisación, en su carácter de tarea incompleta. Pues la revolución, apenas nacida, tuvo que defenderse. Fue la guerra la que redujo a migas las conquistas revolucionarias antes que hubiesen tenido el tiempo de madurar y de llevar a cabo sus pruebas en una experiencia cotidiana constituida por avances y retrocesos, por ensayos y errores y por descubrimientos.

Un dilema enfrentaba a los trabajadores revolucionarios. Para salvaguardar y consolidar sus conquistas era necesario dar pasos adelante hacia la toma del poder, la constitución de un gobierno obrero basado en los Comités. De lo contrario, su revolución fracasaría.

La burguesía y el Estado

Sin fuerzas armadas leales, sin instituciones con poder real, enfrentados al armamento de los trabajadores que se sentían fuertes, Azaña y Giral podrían implorar pero no gobernar. La burguesía española comprendió, desde el comienzo del movimiento revolucionario de las masas, que cualquiera que fuera su punto de partida, ese movimiento se dirigía contra la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción, y que era imposible terminar con él con los medios de la democracia. Por esto solo quedaron en el campo republicano residuos insignificantes de la clase poseedora, los señores Azaña, Companys y sus semejantes, abogados políticos de la burguesía, pero en absoluto la burguesía misma.

Pero esos políticos burgueses que constituían, en expresión de Trotsky "la sombra de la burguesía" tenían un importante papel que jugar: "el de paralizar, disgregar y luego asfixiar el movimiento socialista de las masas en territorio republicano...". ¿Pero cómo reconstruir el poder de la burguesía en la zona republicana? Al gobierno de Madrid y a la Generalitat le faltaba el instrumento más importante: las fuerzas armadas. El ejército se había pasado a Franco, exceptuando la marina y buena parte de la aviación, la policía regular no existía como fuerza dependiente del gobierno.

La reconstrucción del poder burgués en la zona republicana era una tarea que escapaba a las solas fuerzas de los políticos republicanos. Enfrentarse abiertamente a las masas armadas no era un ejercicio recomendable. Pronto comprendieron que sólo era

posible reconstruir ese poder a través de la participación en el gobierno de dirigentes obreros de reconocido prestigio que pudiesen reconducir la situación.

VII. EL GOBIERNO DE LARGO CABALLERO Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO BURGUÉS

Como hemos visto, para los trabajadores, se trataba de culminar o no la obra de la revolución. Para la burguesía, de reconstruir el estado burgués para apoyarse en él y revertir las conquistas de las masas. La dirección del PCE era también firme partidaria de la reconstrucción de las instituciones del estado y de poner fin a la "anarquía" revolucionaria. El 3 de agosto, *Humanité*, a petición del P.C. español, puntualizó que "el pueblo español no lucha por el establecimiento de una dictadura del proletariado", y que "no conoce más que una meta: la defensa del orden republicano, el respeto de la propiedad".

El 8 de agosto, Jesús Hernández declaró: "no podemos hablar hoy en día de revolución proletaria en España, porque las condiciones históricas no lo permiten... Queremos defender a la industria modesta que se halla en tantos apuros por las mismas razones y quizá más aún que el obrero mismo". Los fines del Partido Comunista fueron claramente fijados por su secretario general, José Díaz: "no deseamos luchar más que por una república democrática con un contenido social amplio". "Actualmente, no se puede hablar de dictadura de proletariado, ni de socialismo, sino solamente de la lucha de la democracia contra el fascismo".

La cuadratura del círculo pasaba por la persona de Largo Caballero.

Prieto, prohombre de la colaboración con la burguesía en el PSOE, al igual que antes de la revolución, pensaba que los socialistas debían asumir las responsabilidades del gobierno. Pero el estado de ánimo de las masas era tal que llegó inclusive a preconizar, sin vacilaciones, la formación de un ministerio dirigido por su viejo adversario, Largo Caballero, el único cuyo nombre y cuyo prestigio podían dar nacimiento a la indispensable confianza popular. "La opinión que tengo de él es conocida de todos. Es un imbécil que quiere dárseles de astuto. Es un desorganizador y un enredador que quiere dárseles de burócrata metódico. Es un hombre capaz de llevarlo todo y a todos a la ruina. Y sin embargo, hoy en día, es el único hombre, o por lo menos el único nombre útil para poner a la cabeza de un nuevo gobierno". Y precisando que estaba dispuesto a entrar en tal gabinete, y a trabajar bajo la dirección de Caballero, afirmó que "no hay otra salida para el país. Tampoco la hay para mí, si quiero ser útil al país".

El 4 de septiembre de 1936 Largo Caballero es nombrado Presidente del gobierno. Colocado en la encrucijada, trata de contentar a todos. Tras la firma del Pacto de No intervención sólo se podía optar entre dos soluciones. Era necesario, o bien llevar a la revolución hasta sus consecuencias últimas, instaurar el gobierno obrero, denunciar la "traición" de la revolución española que habían cometido, con la no intervención, el gobierno francés del Frente Popular y el gobierno de la U.R.S.S., suscitar en sus países una agitación susceptible de desbordarlos, pero correr entonces el riesgo de no recibir, antes de que fuese demasiado tarde, ningún socorro exterior; o bien, agrupar todas las "fuerzas políticas" en un programa común de guerra, lo que suponía el mantenimiento de las formas republicanas y la detención de la revolución, pero habría la posibilidad de una ayuda material de París y de Moscú, esta última a un plazo relativamente breve...

Caballero aceptó la oferta que se le hacía de todos lados: se convertiría en el jefe de un gobierno fuerte -de eso era de lo que se trataba- que disfrutara de la confianza de las

masas y fuese capaz de recibir apoyos exteriores por cuanto se mantenía dentro del marco del Estado republicano. Al hacerlo, renunció -provisionalmente a su juicio- a perseguir inmediatamente la legalización de la revolución para ganar, primero, la guerra.

Normalmente la participación de la U.G.T., y el apoyo de la C.N.T. debían darle la autoridad que no había tenido Giral. Pero su programa era el mismo, la *"unión de las fuerzas que luchan por la legalidad republicana"*, *"el mantenimiento de la república democrática"*.

La presentación de su programa fue toda una declaración de "principios": *"Este gobierno se constituye con la renuncia previa de todos su integrantes a la defensa de sus principios y tendencias particulares para permanecer unidos en una sola aspiración: defender España en su lucha contra el fascismo"*. (Claridad, 1 de octubre de 1936).

La disolución de los organismos revolucionarios

El 26 de septiembre, a su vez, los revolucionarios catalanes se plegaron. El presidente Companys pudo realizar la operación que había intentado en vano con Casanovas a comienzos de agosto: la formación de un gobierno de la Generalidad en el que figuraban representantes de todos los partidos obreros y sindicatos. Fue el republicano Tarradellas el que lo presidió.

Comentando el acontecimiento, algunos años más tarde, el autor republicano, Ossorio y Gallardo, escribió: *"Companys, que había reconocido el derecho de los obreros a gobernar, e inclusive les había ofrecido abandonar su cargo, manipuló las cosas con tal habilidad que llegó, poco a poco, a reconstituir los órganos legítimos del poder, a transferir la acción a los consejeros, a reducir los organismos obreros a un papel de auxiliares, de ayudantes, de ejecutantes... La situación normal se había restablecido"*.

La formación del nuevo Consejo de la Generalidad suponía, en efecto, el abandono de los organismos del poder revolucionario. El Comité Central quedó anexado al Departamento de la Guerra que dirigía el coronel Díaz Sandino. El Consejo de Economía, la Comisión de Investigación fueron incorporados y subordinados a los ministerios correspondientes.

La formación del Consejo de la Generalidad, con el apoyo de la C.N.T. y del P.O.U.M. era en realidad la orden de muerte del poder de los comités. El 19 de octubre, el Comité Central de las Milicias se disolvió y se adhirió, con un manifiesto, a la política del nuevo gobierno. El 9, un decreto tomado en Consejo con la aprobación de Nin y de los ministros de la C.N.T. disolvió, en toda Cataluña, a *"los comités locales, cualesquiera que sean los nombres o títulos, y todos los organismos que puedan haberse constituido para abatir al movimiento subversivo"*.

El 17 de septiembre, Andrés Nin acompañó a Lérida al presidente Companys que andaba en gira: unió sus esfuerzos a los de él para convencer a sus amigos del Comité Revolucionario de que era necesario plegarse a la nueva organización del poder, entrando a formar parte de un consejo municipal en el que se encontrarían en minoría, y del que formarían parte, por la fuerza, los republicanos que hasta entonces habían sido mantenidos al margen.

En estas condiciones, la situación de los animadores del Consejo de Defensa de Aragón se volvió difícil. Atacado violentamente por los comunistas y los socialistas, calificado de "organismo ilegal" por el P.S.U.C., no reconocido por las autoridades republicanas de Madrid y de Barcelona, el Consejo no pudo mantenerse, él solo, en la posición de poder revolucionario independiente. En el interior mismo de la C.N.T. su presidente, Joaquín Ascaso, fue objeto de vivos ataques por parte de algunos de los jefes. Se vio obligado a retroceder: en los últimos días de octubre, la C.N.T. propuso ampliar el Consejo con los partidos del Frente Popular. El 31 de octubre, una delegación dirigida por Ascaso hizo una visita a Caballero. Confirmó el acuerdo que acababan de tomar los sindicatos y partidos del Frente Popular para una reorganización del Consejo, abierto en lo sucesivo a los representantes de todas las organizaciones, en proporción a sus efectivos. De esta manera desapareció el último obstáculo serio a la concentración de los poderes: todos los demás organismos regionales se sometieron sin dificultad.

Los anarquistas en el gobierno

Para completar su tarea, Largo Caballero necesitaba no sólo de su prestigio y su control sobre las bases del PSOE y la UGT, sino también de la colaboración de los dirigentes de la CNT.

Poco después, arrojando por la borda todo su teoría política, los anarquistas entran en el gobierno. El 23 del mismo mes, Juan Peiró, en un discurso por la radio *C.N.T.-F.A.I.* había precisado la nueva posición anarquista, idéntica en todos sus puntos: *"Los que hablan, desde ahora, de implantar sistemas económicos y sociales acabados son amigos que olvidan que el sistema capitalista tiene... ramificaciones internacionales y que nuestro éxito en la guerra depende mucho del calor, de la simpatía, del apoyo que nos llegue del exterior..."*. El 4 de noviembre, Largo Caballero barajó de nuevo su ministerio para dar entrada a cuatro representantes de la C.N.T., García Oliver, que pasó a ser Ministro de Justicia, Federica Montseny, de Sanidad; Juan López, de Comercio; Juan Peiró, de Industria. Fue Santillán, adversario de la colaboración, a quien le tocó la tarea de justificar esta entrada desde el punto de vista de la teoría (13 de septiembre).

"La entrada de la C.N.T. al gobierno central es uno de los hechos más importantes que haya registrado la historia de nuestro país. La C.N.T. ha sido siempre, por principio y por convicción, antiestatista y enemiga de toda forma de gobierno... pero las circunstancias... han cambiado la naturaleza del gobierno y del Estado españoles... El gobierno ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase obrera, tal como el Estado ya no es el organismo que divide a la sociedad en clases. Ambos dos cesarán todavía más de oprimir al pueblo con la intervención de la C.N.T. en sus órganos". Así, en la prueba de la lucha por el poder, los dirigentes anarquistas encontraron de nuevo el lenguaje de los socialdemócratas más reformistas... Santillán, el primero en justificar esta política en 1936, fue también el primero, en 1940, en hacer, después de la derrota, la amarga crítica de la misma: *"Sabíamos que no era posible triunfar en la revolución, si no se triunfaba, antes, en la guerra. Hemos sacrificado la revolución misma sin comprender que este sacrificio envolvía también el sacrificio de los objetivos de la guerra"*.

Contra los Comités

Para realizar su programa, el gobierno tenía primero que habérselas con los comités. Se trataba de hacer admitir a los militantes que los comités, útiles en el periodo revolucionario, habían quedado ya superados. Claridad, por ejemplo, escribió: *"Podemos afirmar que todos estos órganos han cesado de cumplir la misión para la que habían sido creados. En lo sucesivo, no pueden ser más que obstáculos para un trabajo que corresponde, única y exclusivamente, al gobierno del Frente Popular en el que participan, con plena responsabilidad, todas las organizaciones políticas y sindicales del país"*. En Cataluña, Comorera, líder del P.S.U.C., hizo de su disolución la primera tarea de la coalición antifascista: *"La autoridad legítima, afirmó, debe poder imponerse a la dictadura irresponsable de los comités"*.

Caballero supo evitar los choques: nombró gobernadores o alcaldes a los dirigentes mismos de los comités-gobierno, y sustituyó los organismos revolucionarios por organismos regulares, formados a veces por los mismos hombres, poco diferentes en apariencia, pero, en realidad, menos sujetos a la influencia de la base y más fácilmente dominables por él.

En el plano de las localidades, los comités-gobierno se desvanecieron ante los ayuntamientos, consejos municipales compuestos también ellos, por representantes de los diferentes partidos y sindicatos. La diferencia, mínima en apariencia, era en realidad considerable. Por una parte, el sistema paritario de representación daba ventaja a los comunistas oficiales, representados por intermedio de varias organizaciones: P.C.E. o P.S.U.C., o U.G.T., sobre todo en Cataluña, y las J.S.U. por doquier. Sobre todo, la iniciativa ya no venía desde abajo. Por último, el alcalde era elegido por el gobernador civil: el gobierno disponía en él de un agente directo que no tenía en el seno de los comités.

La reconstitución de la policía

De hecho, el doble poder había multiplicado los organismos de represión: milicias de la retaguardia, patrullas de control, cuerpos de investigación y de vigilancia, coexistían con la policía de seguridad, los carabineros, los guardias de asalto, los guardias civiles rebautizados con el nombre de "Guardias nacionales republicanas". El 20 de septiembre un decreto reunió a todas estas fuerzas en un cuerpo único, las "Milicias de la retaguardia": la policía revolucionaria quedaba oficialmente consagrada y, a la vez, se encontraba colocada bajo la autoridad directa del ministro de gobernación.

Al mismo tiempo se constituyó discretamente lo que llegó a convertirse en un verdadero cuerpo de policía nueva. En el momento en que el tráfico por las fronteras era inexistente, el ministro de Hacienda, Juan Negrín, reforzó considerablemente a los carabineros, policías de aduanas poco numerosos antes de la guerra, hasta alcanzar más tarde bajo su gobierno los 40.000 efectivos. Se les llamaba "hijos de Negrín"

Un paso decisivo para separar a las fuerzas de policía de las organizaciones obreras se dio con la prohibición, impuesta a los carabineros y a los guardias civiles, de pertenecer a un partido o a un sindicato. La policía, se volvió a convertir, de tal manera, en principio, en el instrumento ciego y dócil de que tiene necesidad un gobierno.

Al mismo tiempo, el 27 de octubre de 1936, se promulgó el decreto de desarme de los obreros: *"Artículo primero: todas las armas largas (fusiles, ametralladoras, etc.), que obren en poder de los ciudadanos serán entregadas a las municipalidades, o requisadas por ellas, dentro de los ocho días siguientes a la promulgación de este decreto. Las mismas serán depositadas en el Cuartel General de Artillería y el Ministerio de Defensa de Barcelona para cubrir las necesidades del frente". "Artículo segundo: Quienes retuvieren tales armas al fin del período mencionado serán considerados fascistas y juzgados con todo el rigor que su conducta merece"*

La militarización de las milicias

Las derrotas militares de agosto y septiembre sacudieron fuertemente a los partidarios del mantenimiento de las milicias. Anarquistas como Durruti, García Oliver y Mera pedían una organización unificada, un mando único. Para todos era claro que, si se quería evitar una catástrofe, había que instaurar, una disciplina de hierro en el combate y en el servicio, coordinar los abastecimientos, y el equipo y las comunicaciones, elaborar y aplicar una estrategia de conjunto. Pero, a partir de allí, comenzaron las divergencias. Los anarquistas querían realizar estas transformaciones dentro del marco de las milicias, conservando la elección de los oficiales, el sueldo único, la supresión de los galones. El P.O.U.M. abogaba por el modelo ruso de 1918-1920. El gobierno avanzó paso a paso, sin chocar de frente con el estado de ánimo particular de las milicias, a las que, sin embargo, fue transformado poco a poco en ejército.

Si Giral no pudo reconstituir un ejército fue porque nadie tenía confianza en él, y porque no disponía de las armas modernas necesarias. Ahora bien, el gobierno de Caballero disfrutaba de la confianza de los partidos y sindicatos que exigían la unidad de mando, y además disponía de las armas que le había dado el apoyo de la U.R.S.S. El reparto mismo de las armas sirvió para la militarización de las milicias: sólo las unidades "reorganizadas" recibieron armas. Los éxitos alcanzados por las tropas organizadas por el Partido Comunista o por el gobierno sirvieron también para arrastrar a otras columnas a la militarización. Los ministros de la C.N.T. la apoyaban, los comités nacionales de la C.N.T. y de la F.A.I. enviaron al frente delegaciones que se esforzaron por convencer a los milicianos y a sus gentes. Una tras otra, las columnas más duras se resignaron, con la esperanza de recibir armas, a "militarizarse". Los consejos de obreros y soldados se suprimieron, con la bendición de *Solidaridad Obrera*, que ya no les encontraba "razón de ser".

Los galones reaparecieron, discretamente, sobre las blusas y los monos. Con la militarización, las milicias tuvieron que aceptar que se pusiese de nuevo en vigor el antiguo Código de Justicia Militar, al que se presentó, por el momento, como provisional, mientras se redactaba un nuevo texto.

Así se creó un cuerpo de oficiales, que el mantenimiento del sueldo único impidió que se transformara en cuerpo privilegiado, a pesar del restablecimiento, con el antiguo Código, de la disciplina y de las señales exteriores de respeto fuera del servicio.

El papel de los anarquistas

La obra de restauración del Estado llevada a cabo por el gobierno de Largo Caballero no fue posible más que con la participación de los jefes más populares de la C.N.T.-F.A.I. y gracias a sus organismos dirigentes. Pero, para los militantes, el cambio fue tanto más brutal cuanto más sumarias fueron las explicaciones. Si, como hemos visto, algunos jefes, como Santillán, no se resignaron más que con la muerte en el alma a la liquidación del poder revolucionario, otros, muy rápidamente, fueron mucho más lejos y pisotearon alegremente lo que había sido hasta entonces el credo anarquista.

Los ministros anarquistas se convirtieron en verdaderos ministros y el ministerio de la propaganda hablaba del "excelentísimo señor ministro de justicia, camarada García Oliver". Los oficiales y los policías anarquistas hablaban y obraban más como oficiales y policías que como anarquistas: Eroles, comisario de policía, afirmó que su más "ferviente deseo" había sido realizado con la creación de un cuerpo único de policía y Mera, olvidándose en lo sucesivo de los "camaradas", afirmó que no quería tratar más que con los "capitanes y sargentos".

Muchos jefes sintieron un profundo malestar. No discutían la táctica de la colaboración, pero sí criticaban de buen grado el celo puesto en su aplicación. Así Santillán, al que le fueron retirando los cargos, se mantuvo finalmente al margen, escéptico y amargado, impotente ante el aparato de su propia organización. Los militantes, en general, tuvieron menos escrúpulos y crisis de conciencia. Más que nunca, organizaciones locales o regionales, individuos inclusive, tomaron iniciativas sin tener en cuenta la política de la Confederación. El grueso de los opositores, los "sectarios", no perdieron su tiempo en argumentar y en elaborar tesis. Obraron, y su desacuerdo cobró las formas más variadas, desde la desertión hasta la manifestación armada, pasando por el atentado. Aquí y allá, día tras día, estallaron incidentes de esta clase, conforme a un esquema casi siempre idéntico: una explosión de violencia ciega de los anarquistas a menudo sin convicción, y en todo caso sin objetivo preciso, a la cual fuerzas de policía de unidades comunistas respondían duramente, aprovechando su ventaja para dismantelar, por último, las posiciones anarquistas.

La pequeña burguesía de las ciudades se había escondido durante los primeros meses. Pero si los anarquistas habían sembrado el temor no habían vencido, no habían tomado el poder y, sobre todo, no habían aplastado al adversario. Por no haber sabido llevar a la revolución hasta su término tuvieron que resignarse entonces a verla levantar de nuevo la cabeza: la revolución inacabada se volvió contra sus promotores.

La misma evolución se produjo en el campo. Los adversarios de las colectivizaciones recuperaron confianza, alentados por las declaraciones oficiales sobre el orden, la legalidad, la propiedad. Sabían que podían contar con la nueva policía.

Y es que los anarquistas, que en la cresta de la ola revolucionaria, en la cohesión que daba la victoria, no supieron liquidar al débil gobierno de Giral, tropezaban ahora, en orden dispersado, sin orientación ni política, con un gobierno fuerte, reconocido por todos, apoyado por sus propios dirigentes. Tropezaban, sobre todo, por doquier, con la fuerza cada vez mayor de las organizaciones del P.C. y del P.S.U.C. que poseían los mandos y la disciplina, los medios materiales y una política.

El ascenso del PCE

A partir de septiembre de 1936 el Partido Comunista y el P.S.U.C. se convirtieron en un factor preponderante de la vida política. De ser cerca de 30.000 a comienzos de la guerra civil, en pocos meses pasaron a tener varios cientos de miles de militantes, para llegar al millón en junio de 1937.

Pero los dirigentes españoles del P.C. y del P.S.U.C. no jugaron solos esta partida importante, una vez que el gobierno de Moscú había aceptado comprometerse. Desde fines

de julio, los delegados de la Internacional Comunista tomaron en sus manos la dirección y la organización del partido.

El Partido Comunista había tomado, desde las primeras horas, una posición claramente afirmada en favor del mantenimiento del orden republicano para la defensa de la propiedad y de la legalidad. Todos los discursos de sus dirigentes tocaban el mismo tema: no se trataba, en España, de revolución proletaria, sino de lucha nacional y popular contra la España semi-feudal y los fascistas extranjeros, al mismo tiempo que era un episodio de la lucha que se libraba en el mundo entre los "demócratas" y Alemania e Italia. El Partido Comunista condenó vigorosamente todo lo que podía parecer capaz de romper la "unidad de frente", entre la clase obrera y las "demás capas populares". Particularmente, puso mucho cuidado en conservar buenas relaciones con los dirigentes republicanos y repitió incansablemente sus consignas de *"respeto al campesino, al pequeño industrial, al pequeño comerciante"*.

La única tarea del día, por lo tanto, era de combatir: *"vencer a Franco primero"* era la consigna central de los comunistas. Para lograrlo, había que consolidar el "bloque nacional y popular", reforzar la autoridad del gobierno de Frente Popular. Así, también, en el campo republicano, dirigió todos sus golpes contra su izquierda, contra los revolucionarios. *"Los enemigos del pueblo son los fascistas, los trotskistas y los incontrolables"*, afirmó José Díaz, en el mismo discurso, y los propagandistas del P.C., apoyándose en los procesos de Moscú, tocaron incansablemente el tema antitrotskyista.

Se trataba de una línea política que arrastraba a las organizaciones comunistas "estalinistas", más allá de la organización de la lucha contra Franco, hacia una lucha abiertamente dirigida contra la revolución en España misma, en nombre de su inoportunidad.

Esta política conservadora aseguró el desarrollo del P.C. y del P.S.U.C. y aumentó su audiencia. En Cataluña, el decreto de la sindicalización obligatoria engrosó los efectivos de la débil U.G.T. controlada por el P.S.U.C. Bajo su patrocinio se constituyó en sindicato la G.E.P.C.I. (Federación de los gremios y entidades de pequeños comerciantes e industriales) que so capa de defensa profesional de los comerciantes, artesanos y pequeños industriales, fue el instrumento de lucha de la mediana y de la pequeña burguesía contra las conquistas revolucionarias. En Levante, donde la U.G.T., por el contrario, tenía una base de masas entre los pequeños campesinos, el P.C., con Maten, organizó una Federación Campesina Independiente, a la que apoyaron todos los adversarios de la colectivización, sin exceptuar a los caciques.

De manera más general, hacia el P.C. y el P.S.U.C., defensores del "orden y de la propiedad" se volvieron los partidarios del orden y de la propiedad en la España republicana. Magistrados, altos funcionarios, oficiales, policías encontraron en él el instrumento de la política que deseaban, y al mismo tiempo, un medio de obtener, dado el caso, protección y seguridad. Por lo mismo, el P.C. dejó de ser un partido de composición proletaria: en Madrid, en 1938, según sus propias cifras, no contaba más que con 10.160 trabajadores sindicalizados de 63.426 militantes, lo que indica un escaso porcentaje de obreros.

Uno de los instrumentos más eficaces del desarrollo de la influencia del P.C. fue, a este respecto, el *Quinto Regimiento*. Con la ayuda rusa, el Quinto Regimiento se desarrolló con rapidez relampagueante. Estaban equipado, entrenado, tenía los mandos completos. El gobierno lo favorecía porque era un modelo de disciplina: había puesto en vigor, de nuevo, todas las prácticas de las unidades regulares, el saludo, los galones, los grados.

Los comunistas estalinistas que se habían tomado intocables desde las entregas de armamentos rusos, defensores consecuentes del programa antifascista de restauración del Estado, organizadores del ejército, se convirtieron, de tal modo, en los elementos más dinámicos de la coalición gubernamental.

HACIA EL FIN DEL GOBIERNO LARGO CABALLERO

Para aquellos que piensan, de buena fe, que las necesidades de la guerra -y sólo ellas- determinaron la evolución política en la España republicana, no es fácil explicar que el

gobierno Largo Caballero, bajo el cual se habían alcanzado éxitos militares tan importantes como la resistencia de Madrid y la victoria de Guadalajara, haya podido caer tan poco tiempo después. Y es que los problemas propiamente políticos venían, en definitiva, delante de los otros.

Largo Caballero, al ponerse a la cabeza del gobierno, había creído que su sola presencia lo garantizaría contra todo riesgo de evolución hacia la derecha. Pero al hacer esto se había encerrado en un marco que ya no era el marco revolucionario. La política de Francia, de Inglaterra, de la U.R.S.S., que había elegido no desagradar para evitar el aislamiento del país, se convirtió en uno de los factores primordiales de su política interior, que determinaba inclusive la concepción de la política de guerra.

De igual manera, la restauración del Estado había permitido el renacimiento de fuerzas que parecían estar definitivamente aplastadas en los días siguientes al levantamiento de julio: accionistas expropiados o propietarios latifundistas, funcionarios antiguos y nuevos, representantes de los partidos políticos cuya autoridad, en el nuevo "Estado popular", tendía a ampliarse a expensas de los sindicatos

La reconstrucción del Estado -un medio para ganar la guerra, a ojos de Largo Caballero-, trastornó los datos y la relación de las fuerzas. La autoridad de Largo Caballero sobre los obreros permitió realizarla con la apariencia de una transacción con la revolución. Pero el Estado restaurado manifestó cada vez más una tendencia a romper con la revolución y a combatirla: las fuerzas políticas que se expresaban a través de él se sumaron a las que obraban bajo la presión de las fuerzas de las potencias occidentales y de la U.R.S.S. De la detención de la revolución se quería pasar a la lucha contra la revolución. Y, en este camino, Largo Caballero habría de ser, en lo sucesivo, un obstáculo.

Largo Caballero, se oponía, además al predominio del PCE y se negaba a la unificación -que Moscú defendía- de comunistas y socialistas.

Indispensable para una reconstrucción del Estado en 1936, Largo Caballero se había convertido, en 1937, en un obstáculo para quienes no querían una revolución social y querían hacer desaparecer toda huella revolucionaria del "Estado popular". En el Partido Socialista, se contempló una inversión de las alianzas. En el momento en que los amigos de Largo Caballero se alejaban de los comunistas, los de Prieto se acercaban a ellos.. Prieto, en esa época, fue más lejos todavía y se declaró en favor de la fusión inmediata con el Partido Comunista. Los comunistas y los socialistas de derecha estaban de acuerdo, en efecto, para la restauración del Estado, para la organización de un ejército regular, contra las colectivizaciones, para la defensa de las clases medias contra la intervención de los sindicatos y para la detención de la revolución. La evolución de la J.S.U., inquietante para Largo Caballero, era tranquilizadora para Prieto. En su congreso de Valencia, en enero de 1937, Santiago Carrillo se convirtió en campeón de la "unidad nacional", predicó la renuncia a todo objetivo socialista inmediato.

Oposición revolucionaria

La política del gobierno de Largo Caballero empezaba a despertar, también la organización de una oposición revolucionaria en las distintas organizaciones obreras. El gobierno tenía que enfrentarse a nuevas dificultades económicas y sociales, que la propaganda heroica y patrioter no bastaba para hacer olvidar. Las fábricas casi no trabajaban o lo hacían muy despacio. El abastecimiento se llevaba a cabo mal. La situación era catastrófica en el campo de los abastecimientos.

Así, pues, en el transcurso de los primeros meses de 1937, se habían creado condiciones favorables para el desarrollo de una oposición revolucionaria en el seno mismo de las organizaciones que, en el otoño, habían aceptado la colaboración.

Fue el P.O.U.M., el primer excluido de la coalición antifascista, el que pareció lanzarse antes que los demás por este camino. Cierto es que contaba en sus filas a numerosos defensores de la política de colaboración. Por lo demás, los ataques de que el P.O.U.M. era objeto por parte del P.C. y del P.S.U.C., la persecución dirigida contra él por numerosas autoridades locales, la acción de la censura, no le dejaban casi elección. Fue rechazado definitivamente de la coalición. Cada vez más claramente, se orientó hacia una línea de

oposición revolucionaria, denunciando los resultados de una coalición antifascista que se había transformado en unión sagrada, la detención y el retroceso de la revolución, y *"las maquinaciones contrarrevolucionarias del P.C. y del P.S.U.C."*.

La acción de su organización de juventudes, la *Juventud Comunista Ibérica*, estaba exenta de estas indecisiones y estas ambigüedades. La J.C.I. se declaró francamente, en una campaña sistemática en favor de la disolución del parlamento y en pro de una asamblea constituyente elegida sobre la base de los comités de fábricas, de las asambleas de los campesinos y de los combatientes. En oposición a Nin, afirmó que a la organización de tales comités de tipo "soviet", debían consagrarse los revolucionarios. Propuso la organización de un "frente" de la juventud revolucionaria para la victoria en la guerra y la revolución.

Independientemente del P.O.U.M., se desarrolló en la C.N.T. una corriente de oposición revolucionaria. En Barcelona, se organizó un grupo de militantes hostiles a la militarización de las milicias con la etiqueta de "Amigos de Durruti", que publicaban el diario *El Amigo del Pueblo*. La gran debilidad de esta oposición es que no tenía ningún dirigente español de primer plano. Santillán se callaba. Era un extranjero, el italiano Berneri el que hacía el papel de teórico y de inspirador de la tendencia revolucionaria.

Esta posición sin jefes, sin embargo, tenía tropas cada vez más numerosas. Las *Juventudes Libertarias* catalanas habían firmado en septiembre con la J.S.U. un pacto de unidad de acción. Pero en su órgano, *Ruta*, tomaron posiciones revolucionarias. Se comprende que las consignas de la J.C.I. encuentren en sus filas un eco favorable. El 14 de febrero, más de 50.000 jóvenes asistieron en Barcelona a un mitin para la constitución en Cataluña del *"Frente de la Juventud Revolucionaria"*.

La juventud obrera se dividió en dos campos. Por una parte, al llamado de la J.S.U. se constituyó la *"Alianza de la Juventud Antifascista"*, de la que Santiago Carrillo quería que fuera *"la unidad con los jóvenes republicanos, con los jóvenes anarquistas, con los jóvenes católicos que luchan por la libertad... por la democracia y contra el fascismo y por la independencia de la patria contra el invasor extranjero"*, pero que se reducía a una alianza de la J.S.U. y las juventudes de los partidos republicanos. Por otra parte, en el *Frente de la Juventud Revolucionaria* se agrupaban los revolucionarios de la J.C.I. y de las J.L.

Así, en la primavera de 1937, se encontraban de nuevo reunidas las condiciones de una marejada revolucionaria. Los temas de la oposición revolucionaria encontraban, por lo menos en Cataluña, un eco creciente entre los trabajadores que seguían a la C.N.T. y veían cómo se ponía en tela de juicio a sus conquistas. En la U.G.T., el ejército, la administración, los partidarios de Largo Caballero reaccionaron contra los comunistas. Las dificultades económicas, los escándalos de las "checas" ofrecieron a la agitación un terreno favorable.

Ni la C.N.T. ni la U.G.T. eran ya fuerzas homogéneas: los dirigentes medios estaban divididos, la masa de los afiliados se pasaba, cada día más claramente, a uno de los dos campos que comenzaban a dibujarse. Largo Caballero permanecía en el medio. Quería ser árbitro en nombre del Estado, combatía a su derecha contra quienes querían disputarle el control, y a la izquierda contra los que rechazaban su autoridad. No quería volver a lanzar la revolución por temor a perder la guerra, pero tampoco quería quitarles a los trabajadores, al luchar abiertamente contra la revolución, sus razones para ganar la guerra. Sin embargo, aunque era el representante de los obreros a la cabeza del Estado, ya no era dueño ni de unos ni del otro.

Mayo de 1937. Barricadas en Barcelona

Era en Cataluña donde subsistía lo esencial de las conquistas revolucionarias y del armamento de los obreros; allí se encontraba el bastión de la oposición revolucionaria. Allí se encontraba también la organización más resueltamente decidida a poner fin a la revolución, el P.S.U.C., al que apoyaban firmemente el Estado republicano de Companys y la pequeña burguesía impaciente por sacudirse el yugo de los anarquistas. Fue allí donde se produjeron los acontecimientos que prendieron la mecha.

Comenzó el 17 de abril con la llegada a Puigcerdá, y después a Figueras y a toda la región fronteriza, de los carabineros de Negrín, que habían llegado para quitar a los milicianos de la C.N.T. el control de las aduanas, de que se habían apoderado desde julio de 1936. Ante la resistencia de las milicias, el Comité Regional de la C.N.T. catalana fue corriendo a los lugares para negociar un entendimiento.

En Barcelona, el gobierno se esforzaba por acabar con ellos definitivamente. Durante las últimas semanas de abril los enfrentamientos entre los Guardias de Asalto y los obreros se multiplicaron: los trabajadores se negaban a ser desarmados.

Fue el lunes 3 de mayo cuando la batalla que amenazaba estalló, con el incidente de la central telefónica. Los hombres de la C.N.T. les habían quitado a los sublevados el edificio. Desde entonces, la central, que pertenecía al trust norteamericano American Telegraph & Telephone había sido incautada y funcionaba bajo la dirección de un Comité U.G.T.-C.N.T. y de un delegado gubernamental. Lo cuidaban milicianos de la C.N.T. Constituía un excelente ejemplo de lo que era la dualidad de poderes. Aquel día, Rodríguez Salas, comisario de orden público y miembro del P.S.U.C. se dirigió a la central con tres camiones de guardias y penetró. Desarmó a los milicianos del piso bajo, pero tuvo que detenerse ante la amenaza de ametralladoras colocadas en batería en los pisos de arriba.

La provocación de los líderes estalinistas, sus ansias por controlar los últimos bastiones del proletariado, desencadenó la reacción de miles de obreros en las fábricas y en los barrios que se levantaron rearmándose y construyendo barricadas. El movimiento insurreccional se extendió como la pólvora por todas las zonas de la ciudad y fuera de ella, como en Lérida donde la misma noche del 3 de mayo la Guardia Civil rindió sus armas a los obreros o en Tarragona y Gerona donde los locales del PSUC y *Estat Catalá* fueron tomados como medida preventiva por militantes del POUM y la CNT.

Al anochecer, en la ciudad en pie de guerra, tuvo lugar una reunión común de los Comités Regionales de la C.N.T., de la F.A.I., de las *Juventudes Libertarias* y del Comité Ejecutivo del P.O.U.M. Los representantes del P.O.U.M. declararon que el movimiento era la respuesta espontánea de los obreros de Barcelona a la provocación, y que había llegado la hora: *"O nos ponemos a la cabeza del movimiento para destruir al enemigo interior, o el movimiento fracasará y eso será nuestra destrucción"*. Palabras que no pueden sino calificarse de proféticas. Pero los dirigentes de la C.N.T. y de la F.A.I. no estuvieron de acuerdo con ellos y decidieron trabajar en pro del apaciguamiento. Y los del POUM no se atrevieron a seguir sin ellos.

Al día siguiente, el 4 de mayo, los obreros, cuya acción fue aprobada por el P.O.U.M., las juventudes libertarias y los *Amigos de Durruti*, eran dueños de la capital catalana, que cercaron poco a poco. Después de una entrevista con los dirigentes de la C.N.T., Companys dirigió la palabra por radio, desaprobó la iniciativa de Rodríguez Salas contra la central telefónica y lanzó un llamado a la calma. El Comité Regional de la C.N.T. lo apoyó: *"Deponed las armas. Es al fascismo al que debemos abatir"*.

El miércoles 5 de mayo, los obreros seguían dueños de las barricadas. La radio difundía el texto de los acuerdos a que se había llegado entre la C.N.T. y el gobierno de la Generalidad: cese el fuego y statu quo militar, retirada simultánea de los policías y de los civiles armados. El jueves 6 de mayo el orden estaba casi restablecido. Companys proclamó que no había "ni vencedores, ni vencidos". La masa de obreros de Barcelona había escuchado los llamados a la calma y el P.O.U.M se plegó: *"El proletariado -proclamó- ha obtenido una victoria parcial sobre la contrarrevolución... Trabajadores, volved al trabajo"*.

Frente a la provocación del burguesía y el PSUC, del lado obrero, la reacción fue espontánea, si se entiende por ello que los comités de defensa C.N.T.-F.A.I. de los barrios desempeñaron el papel principal en ausencia de toda directiva. Robert Louzon, en su estudio sobre las jornadas de mayo, se declaró sorprendido por la aplastante superioridad de los obreros en armas, dueños, prácticamente sin combate, de las nueve décimas partes de la ciudad. Pero subraya que esta fuerza no fue utilizada más que para la defensiva: durante toda la duración del conflicto, seis tanques permanecieron, sin combatir, detrás del edificio de la C.N.T. Los cañones del 75 jamás se apuntaron, y los de Montjuich, en manos de los milicianos de la C.N.T., no dispararon jamás. Afirmó: *"Desde el primer disparo hasta*

el último, los Comités Regionales de la C.N.T. y de la F.A.I. no dieron jamás más que una sola orden, que lanzaron ininterrumpidamente por la radio, a través de la prensa, por todos los medios, la orden de cesar el fuego". Para él, los dirigentes de la C.N.T. temían, por encima de todo, a un poder con el que no sabían qué hacer, y estaban dispuestos "a todos los abandonos, a todas las renunciaciones, a todas las derrotas"

En cuanto a los dirigentes del P.O.U.M., temían desde hacía tiempo, si hemos de creer a Victor Serge, "que la indecisión, la blandura, la incapacidad política de los dirigentes anarquistas no fuesen a tener como resultado una sublevación espontánea, que, por falta de dirección, y además desencadenada por una provocación, ofrecería a los contrarrevolucionarios la oportunidad de dar una sangría al proletariado". Sabiéndose en franca minoría, se negaron a correr el riesgo de aislarse intentando desbordar a la C.N.T. "Las órdenes... que emanaban directamente de la dirección del P.O.U.M. -dice Orwell- nos pedían que apoyásemos a la C.N.T., que no disparásemos, a no ser que disparasen sobre nosotros primero, o que fuesen atacados nuestros locales".

Los dirigentes del POUM y la CNT tenían en sus manos dar un cambio drástico a la situación. Apoyándose en el instinto revolucionario de los obreros de la ciudad podían haber tomado el poder, suprimir la Generalitat, haber restablecido un control obrero en las fábricas y las colectivizaciones en toda Catalunya, la centralización de las milicias con un programa revolucionario y hacer un llamamiento a los trabajadores del resto de la península para librarse de los dirigentes del Frente Popular. Pero dejaron pasar la oportunidad. Las jornadas de mayo fueron en realidad el toque de agonía de la revolución, anunciaron la derrota política para todos y la muerte para algunos de los dirigentes revolucionarios.

El resultado no se hace esperar: la represión se ceba contra los obreros y las patrullas que son desarmadas violentamente por los Guardias de Asalto provenientes de Zaragoza. Además de los 500 muertos, y 1.500 heridos de los enfrentamientos entre los obreros revolucionarios y las fuerzas republicanas y estalinistas, las cárceles empiezan a abarrotarse de militantes de la CNT y el POUM acusados de "contrarrevolucionarios". Fue el capítulo final de la revolución: "En lo que a Catalunya se refiere, la purga de trotskistas y anarcosindicalistas ha empezado; será conducida con la misma energía con que se ha hecho en la URSS", decía Pravda el 17 de diciembre de 1936.

Los estalinistas y sus aliados dieron marcha a una campaña de burdas manipulaciones y falsas acusaciones contra el POUM y sus dirigentes. Identificados como una quinta columna de Franco, para lograr su ilegalización y desmantelamiento no se ahorró en medios, desde fabricar informes falsificados hasta la detención y eliminación física de sus militantes y dirigentes, como Andreu Nin, asesinado por un grupo de la GPU rusa en colaboración con los responsables de inteligencia del PCE. También son asesinados otros opositores a Stalin, y numerosos revolucionarios, como Camilo Berneri, dirigente de los Amigos de Durruti.

VIII. EL GOBIERNO DE LA VICTORIA

Largo Caballero se niega a colaborar en la represión contra el POUM y el ala izquierda de los anarquistas, que Moscú y el PCE exigen. Su negativa a colaborar en la farsa de los juicios contra el POUM y en la declaración del POUM como agente de Franco en la retaguardia, provocó su salida del gobierno. Las fuerzas "leales" al Frente Popular, esto es, estalinistas, republicanos y socialistas de derechas eligieron a Negrín, socialista del ala derecha como nuevo presidente del gobierno. El nuevo ejecutivo bautizado como el de la "victoria" no hacía más que preparar el camino hacia la derrota militar, una vez aniquilado el impulso revolucionario y los órganos de poder obrero en la zona republicana.

La política del gobierno Negrín

El 17, se anunció la formación del gobierno Negrín. Tres socialistas, de la tendencia Prieto, ocuparon los puestos clave, Negrín se quedó con Hacienda y la Presidencia, Prieto con la Defensa Nacional y Zugazagoitia con la Gobernación. Jesús Hernández y Uribe conservaron Instrucción Pública y Agricultura. El catalán Aiguadé, de la Esquerra, al que la C.N.T. había denunciado como uno de los culpables de las jornadas de mayo, recibió la cartera de Trabajo. Irujo pasó a ser ministro de justicia y el doctor Giral ministro de estado... La C.N.T. y la U.G.T. fieles a su posición inicial en favor de un gobierno Largo Caballero, no participaron.

Negrín no se consideraba a sí mismo ni como un marxista ni como un representante de la clase obrera: socialista "a la occidental" era un gran burgués y un universitario distinguido, mucho más afín a Prieto que a Largo Caballero. Desde el Ministerio de Hacienda del gobierno Largo Caballero era el defensor incondicional de la propiedad capitalista, el adversario decidido de la colectivización, y fue él a quien los ministros de la C.N.T. se encontraron siempre como obstáculo en el camino de todas sus proposiciones. Fue él quien reorganizó sólidamente a los carabineros. Fue él también quien presidió el envío a la U.R.S.S. de la reserva de oro de la República.

Bajo el gobierno Negrín se consumó la represión contra el POUM. El 28 de mayo *La Batalla* fue suprimida. Julián Gorkín fue acusado por su editorial del 19 de mayo en que incitaba a los trabajadores a velar "con las armas en la mano" y proponía a la C.N.T. el "Frente de unidad revolucionario". El 16 de junio, en la noche, todos los miembros del Comité Ejecutivo del P.O.U.M. fueron detenidos, Nin en su despacho, otros en sus casas y otros más en el frente.

El 11 de junio apareció una primera acta de acusación contra el P.O.U.M. Afirmaba: "*La línea general de la propaganda de este partido era la supresión de la República y de su gobierno democrático por la violencia y la instauración de una dictadura del proletariado*". No había nada extraordinario en esta acusación, natural, contra revolucionarios que se decían celosos guardianes del pensamiento de Lenin. Sin embargo, más adelante, lo que el acta decía indicaba otro estado de ánimo: el P.O.U.M. era acusado de haber "*calumniado a un país amigo cuyo apoyo moral y material había permitido al pueblo español defender su independencia*", de hacer alusión a los procesos de Moscú "*atacando a la justicia soviética*", y de haber estado "*en contacto con las organizaciones internacionales conocidas con la denominación general de trotskistas; cuya acción en el seno de una potencia amiga demuestra que se encuentran al servicio del fascismo europeo*". Un lenguaje copiado de los infamantes procesos de Moscú contra los viejos bolcheviques. El 29 de julio una nota de Irujo, ministro de justicia, anunció que se había enviado a los tribunales acusados de espionaje y alta traición a Gorkín, Andrade, Bonet y a otros siete dirigentes del P.O.U.M., al lado del falangista Golfín: la técnica de la "amalgama", probada en los procesos de Moscú, seguía siendo la regla.

Sin embargo, durante el proceso, en octubre de 1938, la acusación de espionaje no se continuó. Andrade, Gorkín, Bonet y Gironella fueron condenados a quince años de cárcel por "haber intentado derrocar el orden establecido". El P.O.U.M. y la J.C.I. fueron disueltos. El proceso del P.O.U.M. no sólo fue la continuación de los procesos de Moscú: el asunto se montó con los mismos métodos, falso montaje policíaco, "amalgama" con un fascista auténtico, acusación de espionaje. Pero a este mecanismo le faltaba una pieza importante, las confesiones, elemento esencial del éxito de las operaciones de esta clase. Al parecer fue la resistencia de Andrés Nin la que produjo el fracaso final de una empresa destinada a demostrar que en España, lo mismo que en Rusia, "los trotskistas", adversarios del régimen estalinista, estaban al servicio de Hitler, de Mussolini y de Franco. Nin, torturado hasta la muerte en una cárcel secreta del PCE, se negó a confesar.

No fue sólo el POUM el perseguido. Las cárceles se llenaron pronto de presos revolucionarios. La comisión de investigación dirigida por Félicien Challaye y el inglés Mc Govern recibió la sorpresa de verse acogida, en la Cárcel Modelo de Barcelona, en noviembre de 1937, por la Internacional que cantaban 500 detenidos.

La disolución del Consejo de Defensa de Aragón

Los hombres del P.O.U.M. y los comunistas antistalinistas no eran los únicos que estaban en la mira del "gobierno de la victoria". Muy pronto se vio que el Consejo de Defensa de Aragón no podría conservar la casi autonomía de que había disfrutado bajo el gobierno de Largo Caballero, y que hacía de él el bastión de los extremistas de la C.N.T. y de la F.A.I. Su presidente, Joaquín Ascaso, fue acusado de haber sido el inspirador de la acción de algunos elementos irreductibles durante las jornadas de mayo. Su liquidación, y la de las colectividades aragonesas, se convirtió en una necesidad para un gobierno que deseaba demostrar que aseguraba el orden y respetaba la propiedad. Fue una prenda dada a todos los republicanos moderados y, al mismo tiempo, un golpe a los revolucionarios de la C.N.T.

El 10 de agosto apareció el decreto de disolución del Consejo de Aragón. "Aragón - decía la exposición de motivos- se ha quedado al margen de esa corriente centralizadora a la que debemos en gran parte la victoria que nos está prometida". La autoridad del Consejo fue sustituida por la de un gobernador civil, el republicano Mantecón.. Inmediatamente, la 11ª división del comandante comunista Líster, enviada por Prieto a los alrededores de Caspe, pasó a la acción contra los comités y las colectividades cuya disolución reclamaba unánimemente la prensa del Frente Popular. El periódico del Consejo, *Nuevo Aragón* fue suprimido y sustituido por el comunista *El Día*. Los comités locales fueron sustituidos por consejos municipales instalados por las tropas de Líster. Los locales de la C.N.T. y de las organizaciones libertarias fueron ocupados militarmente y luego cerrados. Numerosos dirigentes fueron detenidos y entre ellos Joaquín Ascaso, el 12 de agosto, acusado de "contrabando" y de "robo de joyas"

La liquidación de los Caballeristas

Contra las autoridades gubernamentales no quedaba más que un obstáculo serio, la oposición de Largo Caballero, que seguía siendo secretario de la U.G.T., y cuya influencia era todavía importante en el Partido Socialista y en la J.S.U. y se manifestaba en los periódicos que sus amigos controlaban, *Claridad*, *Adelante*, de Valencia y *La Correspondencia* de Valencia. El "viejo" resistía, se esforzaba por plantar cara, en esta lucha de aparato, a las fuerzas conjugadas de Prieto y del Estado. Pero procuraba no romper en público el frente antifascista; cuando se decidió, ya era demasiado tarde.

La minoría de la J.S.U. fue la primera aplastada. En el Partido Socialista, la batalla se libró en torno de los periódicos controlados por Largo Caballero y sus amigos. Desde el mes de mayo, Hernández Zancajo dejó de ser director de *Claridad*. Poco después, Carlos de Baraibar y Araquistáin fueron excluidos del comité de redacción. En julio, el secretariado de la U.G.T. hizo saber que *Claridad*, lo mismo que *Las Noticias* de Barcelona, ya no representaban la opinión de la central. Al día siguiente de la constitución del gobierno de Negrín, en efecto, comenzó la ofensiva contra la dirección en el seno de la U.G.T.. Los comunistas y sus aliados promueven una escisión de la misma, eligió un nuevo ejecutivo presidido por González Peña, quien se declaró incondicionalmente fiel al gobierno de Negrín. El ministro de gobernación suspendió *La Correspondencia* de Valencia: en esta ciudad los obreros se lanzaron a una manifestación de protesta. El 6, el ejecutivo de Caballero, en un manifiesto, anunció que preparaba un Congreso Nacional. Denunció la colusión de los "escisionistas" y del gobierno: el ministro Giner de los Ríos había dado a los carteros la orden de mandar todo el correo de la U.G.T. y de pagar los cheques al ejecutivo de González Peña. Los bancos recibieron órdenes semejantes. Por su parte, el Comité de Enlace P.S.-P.C., denunció la "conducta escisionista y dictatorial" del ejecutivo de Caballero y aclamó al "Comité Nacional de la U.G.T. que pone fin a la situación de violencia y malestar" "colocándose al lado del gobierno".

En lo sucesivo, el conflicto sería público: Largo Caballero anunció que iba a apelar a la opinión obrera mediante una serie de conferencias pronunciadas en las más grandes ciudades de la zona republicana. El gobierno le dejó hacer, esperando un fracaso en Madrid donde, por lo general, se consideraba que la popularidad del "viejo" había bajado. Pero, el 17 de octubre, cuando tomó la palabra en el cine Pardiñas, las cinco salas más grandes que

retransmitían su discurso estaban abarrotadas de gente y la multitud se apretujaba en las aceras alrededor de los altoparlantes. Habló de sus refriegas con los comunistas, de la manera en que habían tirado a su gobierno, denunció la coalición de los socialistas de derecha y de los comunistas, y el empleo de la autoridad del Estado para desplazarlo del mando de la U.G.T. Criticó ferozmente la política del gobierno de Negrín, sin proponer, no obstante una política de recambio, sin lanzar ninguna consigna. Su discurso era el de un oponente leal que no amenazaba con nada al régimen.

Sin embargo, produjo una enorme impresión por el eco que encontró. El gobierno, asustado, decidió impedirle proseguir: el 21, en camino para Alicante, fue detenido y conducido a Valencia donde se le tuvo en prisión domiciliaria. Su única protesta fue una carta abierta al presidente de las Cortes: ya no combatía.

Reconstrucción del aparato represivo

El gobierno de Negrín, entre tanto, velaba por montar el dispositivo necesario para la eficacia de una represión eventual. El ministro de justicia, Irujo, comenzó por reorganizar los tribunales populares, modificando su composición para excluir a la F.A.I.

Un decreto del 23 de junio de 1937 instituyó tribunales especiales destinados a reprimir los crímenes de espionaje y de alta traición. Estuvieron formados por trece jueces civiles y dos jueces militares, nombrados todos por el gobierno. La definición del "delito de espionaje y de alta traición" era lo suficientemente extensa como para permitir la utilización de esta arma terrible contra todo oponente. El decreto permitía todas las provocaciones y daba a la policía poderes discrecionales puesto que estipulaba que "quedaban exentos de pena aquellos que, después de haber prestado su asentimiento a la comisión de uno de estos delitos, lo denuncien a las autoridades antes de ser efectuado".

Prácticamente, esto era prohibir toda manifestación de oposición y toda crítica. Era dar al gobierno la posibilidad de condenar por "alta traición" a quien quiera que expresase un desacuerdo con todo o parte de su política

Como antes de la revolución, las reuniones sindicales tenían que ser autorizadas por el delegado de orden público, después de una petición hecha por lo menos tres días antes. Como antes de la revolución, la censura justificada al principio por necesidades militares, se ejercía ahora, sobre las tomas de posición políticas. El 18 de junio el gobierno se reservó el monopolio de las emisiones radiofónicas y se apoderó de las emisoras de las centrales. El 14 de agosto, una circular prohibió toda crítica al gobierno ruso.

En este aparato de represión hay que reservar un lugar aparte al S.I.M. -Servicio de Investigación Militar- creado, por iniciativa de Indalecio Prieto, mediante un decreto del 15 de agosto de 1937. Servicio de contraespionaje inicialmente, se convirtió muy rápidamente en una policía política todopoderosa, que podía sin más juicio e investigación que los suyos propios, decidir detenciones o liberaciones. Algunos meses después de su creación, el S.I.M. escapó completamente a la autoridad del ministro de la defensa nacional, contaba con más de 6 000 agentes, y dirigía prisioneros y campos de concentración.

Reconstrucción del Estado Burgués con rasgos autoritarios

Así, el Estado "democrático" reconstruido por Largo Caballero: se convirtió, bajó el mando de Negrín en un Estado fuerte. Se seguía proclamando "democrático y parlamentario", pero las Cortes esqueléticas no eran mas que una asamblea de figurantes, y no se hablaba de elecciones a Cortes ni para los Consejos Municipales. Ninguna oposición verdadera podía expresarse a plena luz y la crítica era equiparada a la traición.

Muchos terratenientes que se habían considerado "desaparecidos" regresaron y otros salieron de la cárcel. Todos reclamaron sus tierras que les habían sido quitadas en el 36. Tenían en su favor al derecho y a la ley, así como el apoyo gubernamental. En Cataluña se suspendió la aplicación del decreto de colectivización porque era "contrario al espíritu de la Constitución". El decreto del 28 de agosto de 1937 permitió al gobierno, mediante la intervención, tomar en sus manos, toda empresa metalúrgica o minera. La revista *The*

Economist escribió enseguida (26 de febrero de 1938): "La intervención del Estado en la industria, como va en contra de la colectivización y del control obrero, restablece el principio de la propiedad privada". Capataces y directores volvieron a ocupar su lugar. El Estado percibía por su cuenta los dividendos de las "acciones incautadas" a los facciosos y pagaba los de los capitalistas extranjeros.

El ejército volvió a la antigua jerarquía, eliminando cualquier tipo de democracia en su seno. Se redujo la paga de los milicianos de 10 a 7 pesetas diarias, mientras que los oficiales pasaron a ganar según el grado, de 25 a 100 pesetas. Los Comités de abastecimiento desaparecieron o fueron sustituidos por auténticas asociaciones de empresarios que boicoteaban la distribución de alimentos, hacían estraperlo o acumulaban mercancías para forzar la subida de los precios de primera necesidad de la población.

Cuando, el 19 de octubre de 1937 las Cortes se reunieron de nuevo, Caballero no estuvo presente y, claro es, tampoco ningún dirigente anarquista: en febrero de 1936 no eran, ni candidatos, ni elegidos. Pero el conservador Miguel Maura estaba allí, y también Portela Valladares, que había vuelto de Francia, donde se había refugiado y que proclamó su alegría de ver "marchar a España hacia una reconstrucción seria y profunda". Los ataques de la prensa de la C.N.T. contra Maura y Valladares fueron censurados, así como el discurso del viejo Pestaña en el que denunciaba la preponderancia comunista y el retroceso de la revolución.

Esta última había terminado. El Estado estaba restaurado. Los obreros en las fábricas trabajaban bajo la estricta disciplina de la "militarización". Dos galerías y media de seis que tenía la cárcel Modelo de Barcelona estaban reservadas a los detenidos del P.O.U.M. y de la C.N.T.

La revolución había muerto. Ahora el gobierno Negrín libraba una guerra de "defensa de la patria contra la intervención extranjera". Todas estas acciones se justificaban por la necesidad de ganar la guerra. Quedaba por ver si los que habían vencido a la revolución, iban a ganar la guerra.

IX. ¿GANAR LA GUERRA O HACER LA REVOLUCIÓN?

La cuestión militar en la revolución española

Los defensores del PCE, los socialistas de derecha y los demócratas burgueses defienden su política de desmantelamiento de las conquistas revolucionarias, de reconstrucción del Estado Burgués, de represión contra los revolucionarios, alegando que era la única manera de ganar la guerra. Merece la pena detenernos a considerar los resultados de esa política desde el punto de vista militar.

Es evidente que los que triunfaron en el campo republicano acabaron por perder la guerra. Como lo es que la táctica revolucionaria fue la que ganó la guerra civil desencadenada por el imperialismo y los reaccionarios contra la revolución rusa. En cualquier conflicto que enfrenta a la clase dominante contra el pueblo, este último siempre tendrá inferioridad en el plano militar, ¿por qué entonces se producen revoluciones victoriosas? ¿Cómo pudieron vencer los bolcheviques en la guerra civil rusa a un ejército combinado de 23 potencias imperialistas?.

Los dirigentes del PCE adoptaron una línea de actuación basada en liquidar los embriones de poder obrero, restablecer la "legalidad" republicana, y someter al conjunto de la clase obrera a la táctica de "ganar primero la guerra y luego hacer la revolución". Este eslogan repetido con vehemencia hasta en el último rincón, era clave para el objetivo que perseguían los republicanos y los líderes estalinistas: disolver las milicias obreras, fuera del control del gobierno y ligadas directamente a la conciencia revolucionaria de las masas. Liquidar el armamento independiente del proletariado era una condición indispensable para

ahogar el movimiento revolucionario. Toda la maquinaria propagandista de la Internacional Comunista estalinizada se puso a trabajar en este objetivo. Las milicias fueron calumniadas y desprestigiadas. Se hablaba de la indisciplina, la "anarquía". Incluso se hicieron populares las insinuaciones sobre las orgías y la prostitución que según fuentes del gobierno minaban la moral combatiente. Para terminar con este modelo de desorganización militar, incapaz de competir en la batalla contra el ejército profesional de Franco, el gobierno del Frente Popular levantó la bandera del Ejército Regular republicano, con el restablecimiento de la disciplina, el mando, la estructura... burguesa.

Ante los preparativos de la insurrección franquista

Desde el mismo día de la victoria electoral del Frente Popular, los militares empezaron a conspirar. Portela Valladares reveló más tarde que el general Franco le había ofrecido el apoyo del ejército para anular las elecciones. Tras la negativa de Portela, los jefes de la Unión Militar Española celebraron consultas y acordaron que el ejército, contagiado de la efervescencia política, no era segura. Era mejor esperar y preparar el golpe.

El gobierno fue informado de esto. Pero no tomó más medidas que el traslado de los conspiradores. Franco, el Jefe de Estado Mayor, fue privado de su cargo y trasladado al Comando Militar de las Canarias. Goded, Inspector General del Ejército del Norte, fue trasladado a las Baleares, y el General Mola, que perdió el mando del Ejército de África, fue trasladado a Navarra. La conspiración cambió de planes pero siguió adelante.

De qué servía enviar a las Canarias al general Franco, cuando este exilio lo acercó al Ejército de Marruecos en el que era muy popular, y siendo que los conspiradores en Madrid, podrían contar todavía con el Inspector General del Ejército que, él sí, se había quedado en el lugar? La asignación de Mola a Navarra, lejos de debilitar la insurrección, colocó a un jefe peligroso en uno de los focos más activos de conspiración. Y Goded, desde las Baleares, podría dirigir sin dificultad el levantamiento de Barcelona. Y más todavía, mediante una nota del 18 de marzo, el gobierno encubrió a los militares que conspiraban protestando contra los rumores de golpe de Estado que consideraba injuriosos.

La timidez de las medidas tomadas contra los conspiradores, la declarada voluntad del gobierno de cerrar los ojos, no tuvieron más resultado, sin duda, que sumar al golpe de fuerza a muchos oficiales vacilantes.

Casares Quiroga, lo mismo que Azaña, vacilaron y tergiversaron porque habían quedado cogidos entre dos fuegos. De un lado, los militares golpistas amenazaban la democracia de la que obtenían sus escaños, sus privilegios como políticos. Del otro lado, Largo Caballero, en nombre del UGT reclamaba armas para los trabajadores para hacer frente a la insurrección. Pero armar a los trabajadores era armar a los albañiles de la CNT, que acababan de llevar a cabo una larga huelga llena de enfrentamientos con la Falange y las fuerzas del orden, armar a los jornaleros de UGT que durante un mes habían levantado al campo andaluz y extremeño en una huelga que había sufrido 12 muertos y centenares de detenciones. Era armar a la revolución.

Los partidarios del Frente Popular, atados a los Azaña y Casares Quiroga, permanecieron impotentes mientras los facciosos preparaban su levantamiento a la luz del día. Pero otra política podía haber ahorrado al pueblo español los sufrimientos de la guerra civil.

Los primeros días del Alzamiento

En los primeros días del levantamiento militar podía haberse decidido el fin del mismo. Los facciosos vencieron fácilmente en Navarra, donde contaban con el apoyo popular de los requetés, y en Marruecos, donde disponían de unidades militares profesionales como la Legión, los regulares (mercenarios rifeños) y apenas había organización obrera que se les opusiera. Pero en el resto del país la victoria de los facciosos dependió de muchas contingencias.

El Movimiento venció muy rápidamente cada vez que los insurgentes se adelantaron a la organización de sus adversarios. Venció también, con un poco de retraso, cada vez que

los dirigentes obreros se dejaron engañar por las declaraciones de lealtad de los oficiales. Fue menos en la acción de los rebeldes que en la reacción de los obreros, de los partidos y de los sindicatos, y de su capacidad de organizarse militarmente, en una palabra, en su perspectiva política misma, donde residió la clave del resultado de los primeros combates. En efecto, cada vez que las organizaciones obreras se dejaron paralizar por el cuidado de respetar la legalidad republicana, cada vez que sus dirigentes se contentaron con la palabra dada por los oficiales, éstos últimos vencieron. Por el contrario, el Movimiento fracasó cada vez que los trabajadores tuvieron oportunidad de armarse, cada vez que se lanzaron inmediatamente a la destrucción del ejército en cuanto tal, independientemente de las tomas de posición de sus jefes o de la actitud de los poderes públicos "legítimos".

Así, En Andalucía Los insurgentes vencieron rápidamente en Algeciras, donde el gobernador se negó a armar a los trabajadores mientras los militares se declarasen leales. Cuando, al final, se decidió, ante las evidencias, a detener al jefe de la guarnición, él mismo fue hecho prisionero... En Cádiz, la huelga era general desde el 19 y los guardias de asalto distribuyeron armas a los sindicatos, pero el gobernador salió fiador de la lealtad de los oficiales. El 20, al recibirse la noticia de la caída de Algeciras, y con la llegada de un barco de guerra sublevado, la guarnición se rebeló: al día siguiente, toda resistencia había sido aplastada y el comandante general prohibió la huelga y las reuniones sindicales. En Córdoba, el gobernador se negó a dar armas a los obreros en huelga: la guardia civil y la guarnición, a las órdenes de un oficial que tenía fama de republicano, el coronel Cascajo, se sublevaron al mismo tiempo y aplastaron toda resistencia. En Granada, los guardias de asalto se sublevaron con la guardia civil y la guarnición: aplastaron rápidamente la resistencia armada organizada en los barrios. En Huelva, el gobernador concentró a la guardia civil: los mineros de Río Tinto, movilizados por su sindicato, marcharon contra la Sevilla sublevada. Los guardias civiles que los acompañaban les tendieron una emboscada y los asesinaron. Luego, se lanzaron a la conquista de las minas.

Pero la gran victoria de los sublevados fue la toma de Sevilla, bastión de las organizaciones obreras. El general Queipo de Llano, que el gobierno no quiso detener, llegó de incógnito a la capital andaluza, en la que sólo el mando de la guardia civil estaba comprometido en la conjuración. En los cuarteles de la guardia civil, se armó y se organizó militarmente a los falangistas y a los señoritos voluntarios para participar en la sublevación. Los grupos de choque así formados atacaron por sorpresa el cuartel de los guardias de asalto, que se defendieron hasta el último cartucho en el edificio y en la central telefónica. Mientras tanto, un pequeño destacamento había ocupado sin disparar un tiro la emisora de Radio Sevilla. Queipo de Llano hizo tocar el himno republicano y luego anunció bruscamente que era dueño de la ciudad. Las organizaciones obreras no reaccionaron. Cuando, finalmente, la C.N.T. y la U.G.T. comenzaron a reagrupar a sus militantes para la lucha armada, era demasiado tarde: los guardias de asalto fueron batidos hasta el último hombre y los primeros refuerzos de soldados marroquíes aterrizaron en el aeródromo, del que los rebeldes se habían apoderado en las primeras horas.

Fue una victoria de igual clase la que obtuvo el ejército en Zaragoza, otro bastión obrero. Allí, el jefe de la guarnición, el general Miguel Cabanellas era también el jefe de la conspiración. Era un francmasón que pasaba por ser republicano. El 17 de julio, al recibirse la noticia de la sublevación de Marruecos lanzó una proclama de fidelidad a la República y decretó el estado de sitio para enfrentarse a las "tentativas fascistas". Tuvo que renunciar ante la amenaza de guerra general esgrimida por la C.N.T., pero incorporó rápidamente en sus tropas a los falangistas y a los señoritos. El gobernador suplicó a los dirigentes obreros que no perturbaran el orden, se negó a dar armas a los trabajadores y predicó la calma. A instancias de él, los dirigentes de la C.N.T. invitaron a los obreros a que volvieran a sus casas. Y el día 19 por la mañana, un ejército depurado y reforzado por militantes de derecha, junto con la guardia civil, ocupó la capital de Aragón e instaló cañones en batería. Aquí también, los dirigentes obreros no se dieron cuenta de lo que les ocurría hasta que la policía comenzó a detener a los suyos.

Sorprendentemente, la insurrección triunfó en Oviedo, en el corazón de Asturias, donde los militantes socialistas y anarco-sindicalistas tenían una sólida tradición de

combate, una experiencia en la lucha armada, cuadros entrenados, algunas armas. Fue una edición especial, no sometida a la censura, del periódico de Caballero *Avance* la que, desde el mediodía del 18, anunció la sublevación. Inmediatamente, los mineros se reunieron en sus locales sindicales, improvisaron unidades, desenterraron las armas ocultas desde octubre de 1934. Bajo su presión, partidos y sindicatos constituyeron un Comité provincial que se encargó de secundar y de vigilar la acción del gobernador Liarte Lausín, de cuya lealtad sospechaban algunos.

El coronel Aranda, jefe de la guarnición, se apresuró a tranquilizar a los dirigentes obreros y republicanos: se proclamó fiel a la República y condenó solemnemente a los facciosos. Sin embargo, en la víspera, había hecho transportar a los cuarteles todas las armas disponibles y había dado en secreto a la guardia civil la orden de marchar sobre Oviedo. Cuando los obreros asturianos cayeron en la cuenta, tuvieron que sitiar la ciudad. La toma de Oviedo por los rebeldes no trajo consigo la caída de Asturias, pero inmovilizó a decenas de miles de obreros que, por lo demás, carecían casi de armas. La habilidad de Aranda y la ingenuidad de algunos dirigentes detuvieron allí a combatientes cuya ausencia se sintió cruelmente en otras partes.

En cambio, en la flota, comités de marineros se organizaron en los principales barcos. Cuando sus oficiales les dieron orden de alzarse, se rebelaron contra ellos. La pérdida de la flota dejaba en entredicho los planes de Franco, que se veía privado de medios de transportar a sus tropas desde Marruecos a la Península.

En Madrid, en Barcelona, los trabajadores no esperaron. Al tener noticias de la insurrección militar, se dirigieron a sus organizaciones, se movilizaron con ellas, buscaron armas, exigieron armas al gobierno. Se organizaron. Frente a ellos, la resistencia de los militares pronto se disolvió. Los soldados empezaron a desertar.

De nuevo, donde los trabajadores confiaron en el Frente Popular, en la legalidad republicana, fueron traicionados y derrotados. Donde asumieron su propia acción, organizaron su destacamentos de combate, el enemigo se disolvió como un azucarillo.

El resultado de esta combinación de circunstancias distintas era que el 20 de Julio, la insurrección había triunfado en Marruecos, en Andalucía, salvo Málaga y Almería, en Castilla y Galicia y en parte de Aragón. Empezaba la guerra civil.

La cuestión colonial

Los mercenarios marroquíes eran una parte fundamental del dispositivo militar de Franco. La mayoría de esas tropas de *Regulares* eran montañeses del Rif, fieros combatientes. Eran las tropas de choque de los insurrectos.

Esos mismos soldados o quizá su padres habían combatido fieramente contra el colonialismo español durante la guerra del Rif al comienzo de los años 20, bajo la dirección del caudillo Abd-El -Krim. Sólo los más fieros bombardeos –utilizando incluso armas químicas- y el apoyo de las tropas francesas habían conseguido doblegarles.

La República había perdido Marruecos desde el primer día. Pero evidentemente, cualquier movimiento a favor de la libertad de un Marruecos militarmente perdido habría tenido un significado enorme en la retaguardia de Franco y en la propia moral de los Regulares que combatían en España.

Abd-el-Krim, el líder nacionalista marroquí exiliado en Francia, envió una carta a Largo Caballero pidiéndole que interviniese ante León Blum para que se le permitiese volver a Marruecos con el fin de dirigir una insurrección contra Franco. Pero fomentar una insurrección en el Marruecos español hubiera puesto en peligro la colonización francesa en el resto de Marruecos, en Argelia, incluso el dominio de Inglaterra sobre Egipto. Y el gobierno Giral primero y el de Largo Caballero después no querían enemistarse con las “democracias”. Una importante baza militar hubo de ser sacrificada.

La alianza con las “democracias”

Buena parte de la política del gobierno, especialmente en el campo exterior, pero también en el orden interno, se justificaba por la necesidad de lograr y mantener el apoyo

delas “democracias”, en particular de Francia e Inglaterra. Para apaciguarlas, era preciso frenar los “excesos” de las colectivizaciones y la “anarquía” de los comités.

Pero esta alianza tenía también costes militares. Antes hemos visto cómo determinaba la política sobre Marruecos. Además, en agosto, cediendo a las presiones de las potencias extranjeras el gobierno dio a la flota la orden de abandonar la bahía de Tánger, apenas cuarenta y ocho horas después de que el doctor Giral había asegurado a los valencianos que los rebeldes no recibirían ninguna ayuda de África, de donde les impedía llegar, según dijo, la marina republicana. Renunciando a impedir el paso de tropas por el estrecho, la República permitía el libre refuerzo de los franquistas. Pero combatir en el estrecho, decretar un bloqueo, significaría poner en entredicho el cordón umbilical del imperio británico. Una vez más, la política de Frente Popular dictaba opciones militares perjudiciales para la República.

Todo en vano. Las “potencias democráticas” auspiciaron un Pacto “de no intervención”, según el cual se negaba todo apoyo tanto a la República como a los insurrectos. Francia y Gran Bretaña lo cumplieron a rajatabla. Lo que no impidió que Alemania e Italia, firmantes también, suministraran sin parar armas, municiones y soldados a los facciosos. El campo republicano no recibió ninguna ayuda comparable. Las primeras entregas de aviones decididas por el ministro del aire francés provocaron toda una serie de protestas: el gobierno francés del Frente Popular cedió a la presión inglesa y a la campaña de prensa desencadenada contra él. Prohibió, el 27 de julio, la entrega de armas a España y después lanzó la idea de la “no intervención”, a la cual se adhirieron Inglaterra y la U.R.S.S.

Para las “democracias” la cuestión estaba clara: Uno de los más lúcidos y más conscientes de los políticos ingleses, Winston Churchill, expresó claramente estas inquietudes en su *Political Journal*: *“Una España fascista resucitada, en completa simpatía con Italia y Alemania, es una suerte de desastre. Una España comunista que desplegara a través de Portugal y de Francia sus pérfidos tentáculos sería otro, y que muchos consideran peor”...*

La ayuda de la URSS

Se ha insistido en que para ganar al guerra era necesario garantizar la ayuda militar de la URSS, y que algunas de las medidas políticas –como la represión contra el POUM_ venían dictadas por a necesidad de no indisponerse con la URSS.

En efecto, tras firmar inicialmente el Pacto de No Intervención, en septiembre de 1936 la U.R.S.S. decide proporcionar a la República española una ayuda material. Los primeros aviones llegaron en octubre.

La ayuda rusa fue muy importante, obre todo en la batalla de Madrid al permitir equipar con armas modernas y con municiones a las milicias y al joven “ejército popular” que había puesto en pie de guerra el gobierno de Largo Caballero.

Pero fue ella también, la que, en lo sucesivo, y en gran medida, condicionó la política del gobierno y de los partidos del Frente Popular, sobre la base de los consejos o de las exigencias dictadas, tanto por los representantes oficiales de la U.R.S.S., Rosenberg y el cónsul general en Barcelona, Antonov-Ovseenko, como por sus portavoces oficiosos, delegados de la Komintern o dirigentes del Partido Comunista o del P.S.U.C. que ganaron popularidad y autoridad. Un nuevo periodo comenzó bajo la bandera del “antifascismo”.

Sin embargo, hoy sabemos que la ayuda militar de la URSS a España no fue desinteresada ni mucho menos. Cada arma se pagó religiosamente. Pero además Stalin estafó a la República española. Mediante manipulaciones contables, le impuso un tipo de cambio especial para el rublo (2’5 rublos por dólar en vez del cambio oficial de 5’3). De este modo las armas costaban el doble. Además, muchas de las armas entregadas eran antiguas o no tenían municiones. La República, pagaba, además, el mantenimiento de todos los consejeros militares rusos.

Métodos revolucionarios en la guerra. Madrid ¡No pasarán!

Tras el verano de 1936, las tropas de los insurrectos confluyen rápidamente sobre Madrid. Todo el mundo piensa que la caída de la capital es inevitable. Los insurrectos

esperan tras la toma de Madrid el reconocimiento del régimen fascista por parte de las potencias imperialistas occidentales, Francia y Gran Bretaña.

El general Varela mandaba el ejército asaltante: 22 000 soldados profesionales, moros y legionarios, aguerridos, disciplinados, confiados, persuadidos de que no iban a encontrar ninguna resistencia. La ofensiva se desarrolló, al principio, siguiendo el plan previsto: la columna que remontaba el valle del Tajo se unió, el 10 de octubre, con el cuerpo de ejército de Dávila que venía de la Sierra. No había encontrado más obstáculo que el hostigamiento de las milicias de Levante que mandaban Uribarri y Bayo, acción de guerrillas insuficiente para frenar el avance de un ejército moderno que no chocaba con ninguna oposición en sus ataques frontales.

A comienzos de noviembre, fue el general Mola el que, después de haber reorganizado a las tropas, tomó en sus manos la dirección de lo que parecía que debía ser el asalto final; después de discusiones, el estado mayor rebelde resolvió entrar en Madrid por la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, evitando de esa manera la guerra de calles en los barrios obreros, que Varela, por lo menos, temía.

Se constituye bajo el mando del general Miaja la "Junta de Defensa encargada de organizar y de controlar la defensa de la capital. La junta, por su lenguaje y por sus métodos fue un verdadero gobierno revolucionario. Por intermedio de la representación de la U.G.T. y de la J.S.U., que se añadían a la suya, y por la importancia de los cargos que ocupó, el Partido comunista la controlaba.

Para los estalinistas la pérdida de Madrid hubiera significado un duro golpe a su prestigio, basado sobre todo en el V Regimiento, que contaba con 100.000 hombres y estaba encargado de la defensa de la ciudad. Por tanto, en la defensa de Madrid, donde se lo jugaban todo, abandonaron los métodos empleados en otras zonas, esta vez las medidas militares que eran reclamadas por los sectores más avanzados de la CNT y el POUM, sí fueron aceptadas y puestas en práctica en Madrid. Armamento del pueblo, omnipotencia de los comités, acción de masas, justicia revolucionaria sumaria. El 9 de noviembre llevaron al frente a columnas de obreros sin armas, designados por los sindicatos, para trasladarse a la línea de fuego y recoger las armas de los combatientes muertos o heridos. La Casa del Pueblo y los Ateneos Libertarios eran centros de movilización: las barricadas se levantaban en todas las calles de los barrios amenazados.

Madrid conoció una atmósfera de epopeya revolucionaria inspirada por la propaganda del ejemplo del Octubre ruso. "Hay que defender a Madrid como a Petrogrado", proclamaban carteles inmensos del P.C. La multitud madrileña se apretujaba, para aplaudir *Los marineros de Cronstadt*, *Chapallev* o *El acorazado Potemkin* que habían llegado con Rosenberg y se exhibían en todas las pantallas de Madrid, anudando lazos, directamente, a través de este espectáculo, con la tradición de la revolución rusa que creía revivir. La Pasionaria, vestida de negro, y que parecía la encarnación de la revolución obrera, organizó manifestaciones de masas de mujeres madrileñas que impresionaron muchísimo a todos los testigos del drama y que pronunciaban consignas breves y heroicas, a la española: "Más vale morir de pie que vivir de rodillas", "Más vale ser la viuda de un héroe que la mujer de un cobarde". Para defender a Madrid había que galvanizar a sus defensores. La junta lo sabía: aquí, nada de discursos sobre la "legalidad" del gobierno, el "respeto del orden y de la propiedad". No vaciló en dirigirse a los "trabajadores" de Madrid para glorificar la "revolución proletaria" que estaban a punto de realizar.

Se constituyeron comités de barrio, de manzana, de casa, que tomaron en sus manos las tareas inmediatas de la defensa, de la vigilancia antiaérea, y de los sospechosos. El Quinto regimiento pidió a la población que constituyera estos comités, que a nadie del partido del P.C. madrileño se le ocurrió condenar como "organismos ilegales".

Espontáneamente, y al llamado de la junta, se constituyeron también comités especializados: comités de abastos, de comunicaciones, de municiones, comités de mujeres para la confección de comidas colectivas, o el lavado de la ropa. Tampoco pensó nadie en denunciar como "ilegales" o "no autorizadas" a las pesquisas y detenciones realizadas por gente que no era de la policía republicana. Las tropas de guardias de asalto y de guardias

civiles fueron brutalmente depuradas y más de un centenar de guardias civiles fueron detenidos en unos cuantos días

Se organizó un ejército, que fue reforzado por los heroicos combatientes de las Brigadas Internacionales, tropas de choque no menos valerosas que las de la Legión y los Regulares de Franco. El avance de los militares rebeldes sobre Madrid fue detenido.

Las Brigadas Internacionales

En el momento del asalto decisivo fue cuando aparecieron en el frente las primeras brigadas internacionales: según Colodny fueron, en total, 8 500 hombres de la 11ª y la 12ª brigadas los que participaron, alrededor de la capital en los combates de noviembre y diciembre, después del desfile impecable de los 3 500 soldados de la 11ª brigada en la Gran Vía, saludados por los gritos entusiastas de "vivan los rusos". Eran tropas de choque y, en la Casa de Campo, al anochecer, el 8 de noviembre, se dispersó a sus hombres sobre la línea de fuego, en la proporción de un internacional por cada cinco españoles: dieron ejemplos prácticos de utilización de las armas y de los abrigos. Sobre todo, estos voluntarios extranjeros eran a menudo hombres que habían conocido años de vida militante muy dura, huelgas, zafarranchos callejeros, vida en la clandestinidad, cárcel y a menudo tortura, el presidio y la miseria de la emigración. Colodny dijo de los alemanes de los batallones Thälmann y Edgar André que eran "hombres indestructibles".

Estas tropas de militantes internacionalistas salvaron, a un precio terrible, la pérdida de cerca de la mitad de sus efectivos en apenas dos meses, a Madrid. Una demostración más de cómo los métodos revolucionarios podían proveer a la República de Combatientes invencibles.

Sin embargo, poco antes de la caída de Barcelona en manos de Franco, la República, unilateralmente, decidió prescindir de estos magníficos combatientes. Propuso su retirada bajo control de la Sociedad de Naciones, para proponer la retirada de los voluntarios italianos y alemanes que servían a Franco (que, naturalmente, no se fueron). Una vez más, y en condiciones extremadamente difíciles, la sumisión a la política de colaboración con las "potencias democráticas" privaba a la república de un valioso instrumento militar.

La batalla de Guadalajara

El gobierno de la República sostenía que en España no había una guerra revolucionaria, sino una guerra de liberación contra la intervención extranjera. Sin embargo, una de las más resonantes victorias de la República, la batalla de Guadalajara, se debió a la utilización de métodos muy distintos.

Tras el fracaso de los insurrectos en la batalla del Jarama, Franco intentó abrir un frente norte sobre Madrid. Habría de poder contar, para esto, con las tropas italianas que acababan de tomar Málaga, y para las cuales el Duce deseaba un éxito resonante. Desde fines de febrero, en la zona de Sigüenza, el estado mayor nacionalista había concentrado una fuerza de 50 000 hombres para el ataque en dirección de Madrid y de Guadalajara. El ala izquierda, sobre Guadalajara, mandada por el general Roatta, comprendía cuatro divisiones italianas de 5.200 hombres cada una, dos brigadas de infantería italo-alemana, cuatro compañías de ametralladoras motorizadas, 250 tanques, 180 cañones y un equipo considerable. El 3 de marzo, la orden del día del general Mancini expresó a los legionarios la confianza del Gran Consejo fascista en la victoria que significaría el "final de todos los proyectos bolcheviques en Occidente y el comienzo de un nuevo periodo de poderío y de justicia social para el pueblo español".

El batallón Internacional Garibaldi marchó sobre Brihuega al encuentro de las tropas de Coppi. En el Comisariado, Gallo, Nenni, Nicoletti, el comandante Vidali, los jefes políticos de los internacionales italianos habían preparado un plan de propaganda para sus compatriotas del C.T.V. Folletos, lanzados por aviones, altoparlantes, a través de las líneas se las entendieron con la moral de los soldados de Mancini: "Hermanos, ¿por qué habéis venido a una tierra extranjera para asesinar a los obreros? Mussolini os ha prometido la tierra, pero aquí no encontraréis sino la muerte". A estos hombres, modelados por la propaganda fascista, exacerbados por las consignas nacionalistas, que habían llegado como

conquistadores arrogantes, los revolucionarios de Garibaldi les hablaban de "fraternidad proletaria", de "solidaridad internacional". Les pedían que desertaran, que se pasaran a las filas republicanas, que se volvieran contra sus jefes, que eran los enemigos de los trabajadores italianos y españoles. La moral de las tropas italianas comenzó a bajar: los prisioneros y desertores arengaron, a su vez, a sus camaradas de las legiones italianas, les dijeron cómo habían sido recibidos, les pidieron a sus amigos que se les unieran. Las patrullas de los garibaldinos corrían por los bosques y, en vez de granadas, lanzaban a sus compatriotas folletos que llevaban piedras como lastre. El general Manzini se inquietó y sacó a las tropas de primera línea. Líster atacó y tomó Trijueque: la retaguardia de los legionarios se rindió en masa.

Los voluntarios internacionales se lanzaban al asalto, mientras que los altoparlantes difundían el himno comunista italiano Bandiera Rossa, entreverado de llamados a la fraternización y a la rendición. Manzini logró contener los asaltos de los tanques de Pavlov y de la infantería republicana. Se inquietaba por la moral de sus hombres. El 18, el día del aniversario de la Comuna de París, precedido por un bombardeo en masa de 80 aviones, dirigidos por el coronel Hidalgo de Cisneros, el Quinto cuerpo atacó. Mancini pidió refuerzos marroquíes. Líster y Mera atacaron, entonces, sobre los dos flancos: Mera por el oeste, con la 12ª brigada internacional y Líster al este, detrás de los batallones Edgar André y Thälmann que mandaba Kahle, perforaron al mismo tiempo las líneas italianas. El Campesino entró en Brihuega. Entonces se produjo la desbandada de los "camisas negras" que huían hacia Sigüenza, abandonando armas, municiones y material. Las tropas republicanas los persiguieron todo lo que les permitieron sus reservas, insuficientes. Se cogieron miles de prisioneros, que los garibaldinos rodearon y catequizaron, que los comisarios políticos arengaron.

La victoria de Guadalajara, obtenida por el ejército popular que se batía como un ejército moderno, empleando los métodos revolucionarios del derrotismo en las filas enemigas, sobre un ejército superiormente equipado y entrenado, demostraba un avez más que otro camino era posible.

La caída de Barcelona

Barcelona había sido el centro neurálgico de la revolución, y de la movilización militar contra el fascismo. De Barcelona salieron columnas a la conquista de Aragón, la defensa de Madrid... Y sin embargo en enero de 1939, Barcelona cae en manos de los fascistas sin apenas resistencia. Cientos de miles de combatientes huyen hacia la frontera francesa y el exilio

Había otro camino

La cuestión fundamental no era la necesidad de centralización y la disciplina más férrea, objetivo que estaba fuera de toda duda. El punto central cuando tratamos los aspectos militares en una guerra civil es precisamente qué clase social controla el ejército, la burguesía o el proletariado, con qué fines y con qué objetivos se lucha. No es posible tener un ejército proletario en el seno de un estado burgués. Para tener un ejército capaz de luchar contra el fascismo, librando una guerra revolucionaria, el proletariado debía tomar el poder y poner todos los recursos del Estado bajo su control.

La experiencia militar de la revolución y la guerra civil rusa fueron extraordinariamente claras. ¿Cómo pudieron vencer los bolcheviques? ¿Acaso porque tenían más armas que los ejércitos imperialistas, más cuadros técnicos que el ejército blanco contrarrevolucionario? Una y mil veces no, esta no fue la razón. El factor decisivo de la victoria de los bolcheviques fue que disponían de una clara estrategia revolucionaria y por tanto de métodos revolucionarios.

"En una guerra civil", escribía Trotsky, "una parte fundamental de la lucha se desarrolla en el terreno político. Los combatientes del ejército republicano tienen que tener conciencia de que combaten por su completa emancipación social y no por restablecer las anteriores formas de explotación. Lo mismo debe hacerse comprender a los obreros y sobre todo a los

campesinos tanto en la retaguardia del ejército revolucionario, como en la del ejército campesino...". La disciplina fue decisiva para el triunfo del Ejército Rojo en la guerra civil rusa, pero ésta surgía del grado de convencimiento de la tropa, de su compromiso con los objetivos de la lucha. La moral de los soldados rojos en Rusia provenía precisamente de que estaban convencidos de que libraban una guerra revolucionaria contra el zarismo y los imperialistas. Su lucha no era a favor de una "democracia burguesa" sin significado, sino a favor del futuro de sus familias, de la tierra y las fábricas que habían expropiado a los terratenientes y burgueses, de la nueva sociedad que estaban construyendo. Cuando estas ideas penetraron en la conciencia de miles de soldados rojos se convirtieron en una fuerza imparable.

Muchos dirigentes de la CNT y del POUM, explicaban que era necesario aceptar la disolución de las milicias y la formación de un ejército regular porque eran las condiciones que Stalin imponía para enviar nuevos cargamentos y material de guerra al bando republicano. Los líderes anarquistas, si hubieran adoptado una firme política revolucionaria, habrían continuado la ofensiva en Aragón y denunciado ante la clase obrera las condiciones contrarrevolucionarias exigidas por Stalin.

Además convertir una parte importante de las industrias civiles en fábricas de guerra era totalmente posible, si los obreros y sus comités con un programa revolucionario hubieran tenido el poder en sus manos. El problema era precisamente que el poder se encontraba del lado de la burguesía republicana, los nacionalistas catalanes y vascos y los dirigentes estalinistas.

"Las condiciones para la victoria de las masas en la guerra civil contra los opresores son:1.- Los combatientes del ejército revolucionario deben tener plena conciencia de que combaten por su completa emancipación social y no por el restablecimiento de la vieja forma (democrática) de explotación.2.- Lo mismo debe ser comprendido por los obreros y campesinos, tanto en la retaguardia del ejército revolucionario como en la del ejército enemigo.3.- La propaganda, en el frente propio, en el frente adversario y en la retaguardia de los dos ejércitos, tiene que estar totalmente impregnada por el espíritu de la revolución social. La consigna: "primero la victoria, después las reformas", es la fórmula de todos los opresores y explotadores.4.- La victoria viene determinada por las clases y capas que participan en la lucha. Las masas deben disponer de un aparato estatal que exprese directa o indirectamente su voluntad. Este aparato sólo puede ser construido por los soviets de los obreros, campesinos y soldados.5.- El ejército revolucionario (...) debe llevar a cabo inmediatamente en las provincias conquistadas las más urgentes medidas de revolución social...6.- Debe expulsarse del ejército revolucionario a los enemigos de la revolución socialista, es decir, de los explotadores y sus agentes, aunque se disfracen con la máscara de "democráticos", "republicanos"...7.- A la cabeza de cada división debe figurar un comisario con una autoridad irreprochable, como revolucionario y combatiente.8.- El cuerpo de mando (...) su verificación y selección debe realizarse sobre la base de su experiencia militar, de los informes aportados por los comisarios y de las opiniones de los combatientes rasos. Al mismo tiempo deben dedicarse esfuerzos en la preparación de comandantes procedentes de las filas de los obreros revolucionarios.9.- La estrategia de la guerra civil tiene que combinar las reglas del arte militar con la tareas de la revolución social...10.- El gobierno revolucionario, como comité ejecutivo de los obreros y campesinos, tiene que ser capaz de conquistar la confianza del ejército y del pueblo trabajador.11.- La política exterior debe tener como principal objetivo, despertar la conciencia revolucionaria de los obreros, los campesinos y las nacionalidades oprimidas del mundo entero...".(León Trotsky, España, última advertencia, pág. 113, 114, 115).

X. EL FIN DE LA REPÚBLICA

A la represión del movimiento obrero catalán en mayo de 1937 y la ilegalización del POUM, se sumó la cadena de desastres en el frente militar. Todo el norte del país, cuya defensa exceptuando Asturias se puso en manos de los nacionalistas vascos, fue entregado a Franco sin apenas combate. Los dirigentes del PNV preferían entregar sus fábricas enteras a Franco que arriesgarlas en la batalla.

La desconfianza en la victoria aceleró los planes de capitulación del gobierno. Coincidiendo con el 1º de Mayo de 1938 el gobierno propuso en un documento público las condiciones de la rendición. El documento denominado Fines de Guerra del gobierno de la Unión Nacional de la República Española proponía entre otras cosas: "*Garantizar una República popular representada por un Estado fuerte y vigoroso*", que "*la estructura jurídica y social de la República será obra de la voluntad nacional libremente expresada mediante un plebiscito que tendrá efecto tan pronto como termine la lucha*"... "*El Estado garantizará la propiedad legal y legítimamente adquirida*"...

Negrín, que tantos esfuerzos había hecho por atraerse el apoyo o cuando menos la neutralidad de Gran Bretaña y Francia, fracasó rotundamente. Tras el Pacto de Munich, firmado por Gran Bretaña, Francia y la Alemania nazi, como prueba de buena voluntad ante Hitler, los gobiernos de Londres y París, reconocieron al gobierno de Franco. Los "democráticos" estados de Gran Bretaña y Francia rompieron con Negrín. Francia cerró la frontera de los Pirineos, aumentando de esta forma el bloqueo militar, y congeló créditos y fondos depositados en este país por el gobierno republicano. Este acuerdo entre las potencias imperialistas y Alemania, fue sólo la antesala del pacto Ribentrop-Molotov, por el que la burocracia estalinista intentaba llegar a un acuerdo de buena voluntad con la Alemania nazi, acuerdo que fue firmado ya, sobre las cenizas de la revolución española.

Mientras tanto, el gobierno Negrín en su política de capitulación abierta frente a Francia y Gran Bretaña, accedió, con el beneplácito de Stalin, a la desmovilización y salida del país de las Brigadas Internacionales en noviembre de 1938, justo tres días después de que participaran heroicamente en la Batalla del Ebro. Bajo la bandera de las Brigadas Internacionales combatieron 60.000 hombres y mujeres de 70 países diferentes. Con el ideario de la revolución, estos combatientes internacionalistas fueron el ejemplo más claro de las enormes consecuencias que hubiera tenido en Europa y en todo el mundo el triunfo de la Revolución Socialista en España: ningún ejército burgués hubiera podido parar los efectos de la revolución española triunfante entre los obreros, franceses, ingleses, italianos o alemanes.

El ejército republicano retrocedía contundentemente en todos los frentes. Con la desmoralización apoderándose del cuerpo de oficiales, del gobierno, de los políticos, las posibilidades de elevar la moral de los combatientes eran nulas. La derrota en las batallas frente al ejército franquista y la liquidación de la revolución en la retaguardia abrieron el camino hacia un acuerdo con Franco. Finalmente la caída de Catalunya y de Barcelona el 1 de febrero de 1939 tras soportar un año de bombardeos permanentes de los fascistas, desmoralizó profundamente a los trabajadores. El éxodo masivo de la población hacia Francia, más de 400.000 refugiados, fue una tragedia que prologaba lo que ocurriría después. Hambrientos, enfermos, y exiliados forzosos, los obreros, milicianos, mujeres y niños que llegaban a Francia fueron internados en campos de concentración por el "democrático" gobierno francés, y miles de ellos deportados y entregados posteriormente a Franco.

El Golpe de Estado de Miaja-Casado

En Madrid mientras tanto, la cúpula militar del gobierno conformada en Junta de Defensa Nacional, compuesta en su mayoría por oficiales de carrera próximos ideológicamente a los republicanos, junto con socialistas de derecha como Besteiro, fraguaban un golpe de estado para eliminar a la dirección del PCE del gobierno y fraguar una paz "honrosa" con Franco.

El golpe de Estado sin embargo, contaba con un obstáculo: los dirigentes estalinistas no podían aceptar un acuerdo, en la práctica una capitulación, con Franco. Eso hubiera tenido consecuencias evidentes en sus filas, acelerando su crisis interna, la pérdida de prestigio de la dirección y tarde o temprano la escisión; hubiera cuestionado la política estalinista entre miles de militantes honestos. Esto también era evidente en las filas del anarquismo. Algunos dirigentes como Cipriano Mera, impacientes por descargarse contra las acciones del estalinismo, apoyaron el golpe, pero fueron una excepción. Los militantes comunistas y anarquistas no dudaron en coger las armas contra el golpe de la Junta de Defensa encabezada por los Coroneles Miaja y Casado.

Finalmente, con la guerra perdida, la Junta declaró ilegítimo al gobierno de Negrín, huido a Francia, y expulsó a los dirigentes del PCE del Frente Popular, iniciando una cruenta represión contra los obreros que se habían resistido al golpe.

Una vez eliminados y reprimidos todos los focos de resistencia, la Junta se preparó para negociar con Franco y entregar a su ejército lo que quedaba de territorio republicano. El 28 de marzo de 1939 entregaron Madrid y al día siguiente el resto de las ciudades. La contrarrevolución fascista había completado su victoria.

XI. BALANCE DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA

A lo largo de 8 años, el proletariado español había mantenido una intensa lucha política. Primero había intentado que la República burguesa satisficiera sus reivindicaciones políticas y sociales. En la escuela de la lucha de clases había aprendido que sólo la revolución podía dar respuesta a esas necesidades.

Primero la conjunción socialista-republicana defraudó todas sus esperanzas de cambio. El avance del fascismo en Europa, la reacción interna de la burguesía y los terratenientes, la represión en la ciudad y en el campo, todos estos factores se combinaron junto a la miseria creciente y el desempleo para favorecer la radicalización de las masas que giraron con rapidez hacia la izquierda. Este proceso se reflejó en el seno de las organizaciones tradicionales especialmente en las Juventudes Socialistas, el PSOE y la UGT, cristalizando en la formación de la izquierda caballerista. La clase obrera se orientaba firmemente a la revolución socialista. La prueba concluyente, para la burguesía, fue la insurrección de 1934. Sin embargo, la oportunidad más evidente que se produjo con la radicalización de la JJSS fue malograda y desaprovechada. Largo Caballero y la izquierda del PSOE presos de una extrema confusión ideológica, no fueron capaces de liderar el proceso hacia la revolución.

Enfrentándose al golpe militar, la gesta del proletariado español se extendió durante tres años de lucha. No fue la política de los dirigentes del Frente Popular la que frenó el levantamiento franquista, sino la insurrección armada espontánea y ejemplar de los obreros en Madrid, Barcelona, Asturias, Málaga, Bilbao...

Durante la revolución española fueron puestas a prueba las distintas corrientes políticas del movimiento obrero. La izquierda del PSOE era la fuerza más poderosa. Pero al dirección de Largo Caballero primero no supo aprovechar sus oportunidades para tomar el poder. Luego puso toda su influencia a favor de la reconstrucción del Estado Burgués, que prescindió de ellos cuando ya no les necesitaba.

Los anarquistas de la CNT tuvieron, sobre todo en Barcelona, la oportunidad de constituir un poder revolucionario. Primero se negaron a ello. Luego, echando por la borda todos los "principios" de su ideología pasaron a formar parte del gobierno burgués que destruía los organismos del poder popular. Finalmente, confrontados al momento decisivo tras las barricadas de Barcelona, entregaron sus posiciones sin lucha.

Los revolucionarios del POUM tampoco se atrevieron. Primero cedieron al participar en el Frente Popular, bajo un programa que sometió a alas organizaciones obreras alas peticiones de la burguesía, a la que entregaba el gobierno. Luego, desde el gobierno de la

Generalitat, participaron en la destrucción de las conquistas obreras. Expulsados del gobierno de la Generalitat, giraron hacia la revolución, pero vacilaron en mayo del 37, por miedo a romper con los dirigentes de la CNT.

Merece la pena detenerse sobre el papel del PCE durante la revolución española. Tras romper con su política ultraizquierdista, los dirigentes del PCE apostaron desde el principio por la defensa de la propiedad privada y del orden. Desde 1936 -excepto durante la defensa de Madrid- el PCE fue el principal defensor de las instituciones de la república burguesa frente a las conquistas revolucionarias y el poder de los comités obreros. Y persiguió con saña a todos los revolucionarios que discutieron esa política. En lugar de aplicar una política para la revolución española, siguió al pie de la letra las indicaciones de Stalin, que no quería una revolución obrera que cuestionara su liderazgo y diera al traste con sus planes de un alianza con las potencias democráticas

Las condiciones para el triunfo revolucionario eran cuanto menos tan favorables como en Rusia de 1917. Pero la ausencia de una dirección bolchevique desequilibró la situación en favor de la contrarrevolución fascista. En Julio de 1936 los obreros respondieron al golpe de estado con una revolución obrera. Una situación de doble poder se instauró en la España republicana.

Para ganar la guerra, para vencer al fascismo, era necesario consolidar las conquistas revolucionarias, unificar el gobierno de los comités, legalizar la toma de las fábricas y ofrecerles créditos estatales, dar cobertura legal a la toma de tierras por los campesinos, organizar la propaganda revolucionaria en la retaguardia franquista (incluyendo Marruecos), eliminar los últimos restos del Estado Burgués y oponerle el gobierno de los comités obreros. El gobierno Largo Caballero primero, y el de Negrín después, optaron por la vía contraria. Al estrangular a la revolución dieron paso a la desmoralización y a la derrota frente a Franco.

En 1938 el Programa de fundación de la IV Internacional decía que *“la crisis de la Humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria”*. El balance de la revolución española confirma trágicamente esta afirmación. En España estuvieron presentes todas las condiciones para un triunfo de los trabajadores. Pero faltó un partido obrero revolucionario que aportara al movimiento una dirección política.

Folleto editado por el POSI



Partido Obrero Socialista Internacionalista
Sección en España de la IV Internacional

LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SERÁ OBRA DE ELLOS MISMOS

C/ Desengaño 12, 1º 3 28004 MADRID

<http://www.posicuarta.org>

inforposi@gmail.com